



**MEDELLÍN SIN MÁSCARAS: LA COMUNA 13
ENTRE EL URBANISMO SOCIAL Y LA VIOLENCIA URBANA 2006-2014**

POR: Estefany Largo García

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE POLITÓLOGA
MODALIDAD MONOGRAFÍA**

**ASESOR: Leider Humberto Perdomo Ramírez
Especialista en Derecho Constitucional**

**PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN
2018**

Agradecimientos

A mi abuela, por sus incontables esfuerzos del día a día, por su espíritu inquebrantable que siempre se sostiene con fuerza ante las adversidades de la vida y por el apoyo incondicional que me ha dado en cada decisión que he tomado.

A mi tío Richard, que hoy no está en este mundo porque la furia de esta ciudad se lo llevó, pero cuyo amor nunca podrá ser atravesado por una bala.

A Medellín, por los amores asesinados y los odios despertados, porque "A pesar de ti, te debo lo que soy, pues no sería nada si no hubiera nacido bajo tu cielo. Tu tradición me predestinó desde siempre a la rebeldía." Gonzalo Arango

Contenido

Introducción.....	5
Objetivos.....	8
Metodología.....	9
CAPITULO I	
Medellín enmarañada.....	12
Comuna 13: La convulsión de la guerra urbana.....	17
La importancia del barrio Las Independencias para las milicias.....	20
La incursión paramilitar.....	22
Operaciones militares en la Comuna 13.....	25
Desmovilización parcial de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.....	28
Referentes teóricos para el análisis crítico del urbanismo social y la violencia urbana en Medellín.....	33
Tendiendo puentes.....	42
Intentando desanudar.....	46
CAPITULO II	
La voz institucional del Urbanismo Social en Medellín.....	47
Proyecto Urbano Integral: Reconocimiento de una deuda histórica.....	50
Proyecto Urbano Integral en la Comuna 13.....	54
Una comuna fragmentada.....	59
Estrategias múltiples: lo social y lo securitivo. La otra pacificación de la comuna 13.....	62
CAPITULO III	
¿Una ciudad segura?.....	67
Los patrones de la guerra y la paz: el pacto del fusil.....	70

Estados paralelos en la Comuna 13.....72

Reencuentro entre Estados.....	76
Las violencias soterradas en la Comuna 13.....	80
El proyecto Urbano Integral y la violencia homicida en la Comuna 13.....	90
La centralidad urbana y la concentración de la violencia.....	94
La tensa calma.....	95
CAPITULO IV	
Modelo urbano para el capital: la Medellín que renace para los inversionistas.....	96
Intervención territorializada: La comuna13.....	105
Elementos disruptivos.....	107
La prolongación de la violencia.....	113
Conclusiones.....	114
Bibliografía.....	118

Introducción

Medellín es una ciudad cuya configuración poblacional mayoritaria es de carácter popular, muchos de sus barrios se construyeron a varias manos en medio de situaciones adversas. Así, mientras los “ranchos” se levantaban y la ciudad se expandía, también iban surgiendo múltiples violencias que han mutado con el tiempo; violencias que llegaron a escalar a una guerra urbana de gran magnitud y que se han dispersado de tal manera hasta convertirse en fenómenos incontenibles, paradójicamente cada vez menos perceptibles, como si el exceso hubiera superado nuestra capacidad de conmoción.

De ese modo, sumergirse en las entrañas de Medellín es un poco reconocerse en medio de la agitación de sus calles, sus barrios, su gente y sus contrastes. Cuestión en la que se involucran todas sus memorias y donde es necesario escudriñar en su pasado, en las historias de bala, la pobreza, las resistencias personales y comunitarias, la mafia y la abundancia de cocaína, la pillería, la subversión, la contrainsurgencia, las resurrecciones, todo y nada. ¿Quiénes somos? y ¿Quién o qué es esta ciudad?

Este trabajo surge entonces de las vivencias, sensaciones, emociones y pensamientos que la ciudad despierta, acompañando ese trasegar cotidiano en el territorio popular de un ejercicio analítico que se pregunta por las transformaciones que han atravesado a Medellín en la última década. Por un lado, las variaciones de la violencia en la ciudad después de la desmovilización paramilitar (2005) y por el otro, la nueva forma de intervención estatal a través del Urbanismo Social en territorios marginados (2004).

Ahora bien, ambas transformaciones han tenido a las comunas populares de Medellín como principal objeto de su intervención, entre ellas, la Comuna 13 ubicada en la Zona Centro Occidental, la cual ha sido una de las más impactadas por la violencia armada en sus múltiples manifestaciones, pero aun así, se convirtió en una de las comunas más reconocidas por las transformaciones positivas endilgadas al Urbanismo Social. En ese sentido, el estudio de ambos fenómenos urbanos nos desafía a insertarnos en la lógica territorial, pues desde sus particularidades podemos entender el tránsito al que se enfrentó la ciudad de un modo más profundo y detallado.

De esta manera, el acercamiento al lugar común que es la Comuna 13 nos permite identificar el comportamiento del Estado y de las formas de la violencia que persisten en el territorio, antes, durante y después de toda la intervención contenida en el Urbanismo Social, pues a pesar de que la violencia dada en la ciudad luego de la desmovilización paramilitar, suele reducirse a meras acciones criminales, señalando también escenarios de mayor seguridad en la ciudad y en los barrios, la investigación intenta hacer un análisis más integral de esta situación, vinculando no sólo la vivencia barrial y las distintas voces que de allí emergen, sino también elementos teóricos e históricos que le dan soporte.

Desde esa misma lógica, el trabajo parte de una visión crítica del urbanismo, en el que se cuestionan las motivaciones de la intervención del Estado en una Comuna que ha sido estratégica para todos los actores armados. Lo que además de llevarnos por un reconocimiento del territorio y de la ciudad, también nos obliga a profundizar en la construcción ideológica del urbanismo y las relaciones económicas, políticas y sociales de dominio que lo atraviesan.

Es en este panorama es donde buscamos hallar y analizar de manera crítica e integral el relacionamiento de las distintas instituciones que representan al Estado en lo local con los actores que han perpetuado la violencia en los barrios de la Comuna 13 de Medellín. Así, este trabajo investigativo se encuentra dividido en cuatro partes:

En la primera parte se hace un recorrido histórico para posibilitar la comprensión del desarrollo de la violencia en la ciudad y de las variaciones que ha tenido el accionar del Estado en los territorios que durante años han concentrado diversas problemáticas sociales. De ese modo, tanto la violencia de los últimos tiempos, como la transformación de la intervención estatal, se entienden como producto de un pasado atravesado por complejas hibridaciones y mixturas de actores, modalidades de violencia y la persistencia de condiciones sociales asimétricas, panorama que sólo es posible entender desde una lectura en retrospectiva.

El contexto histórico inicia en la década de los 60 cuando la población de Medellín comienza a crecer de manera acelerada y con ello, la formación de grandes asentamientos informales con las múltiples problemáticas sociales que acompañan y profundizan esta

formación urbana. De ahí en adelante, se expone la situación de las décadas siguientes y la formación e incidencia de los múltiples actores de la violencia en la ciudad y en la Comuna 13, hasta entrar a los procesos de desmovilización paramilitar como un punto de llegada de la confrontación armada iniciada a finales de los 90 entre estos y las milicias, pero también como punto de partida de las nuevas formas de la violencia en el escenario urbano después del 2005.

Luego de este trayecto histórico que abre la temporalidad en la que se sitúa esta investigación (2006-2014) se presentan los referentes teóricos para el análisis del Urbanismo Social y la violencia en Medellín. En principio, se retoman los planteamientos del marxismo aplicados por la geografía radical, la cual establece una crítica al urbanismo global que produce ciudades por y para el capital, cuya lógica mercantil se sostiene por una compleja estructura ideológica, donde la idea de la vida urbana se totaliza, suprimiendo los antagonismos y las contradicciones presentes en la realidad social.

De ese modo, la ejecución de un modelo urbano competitivo atraviesa el ámbito territorial encarnado en las comunas y los barrios, con el objetivo de concretar un proyecto hegemónico de ciudad por encima de las asimetrías sociales. Con todo, en la aplicación del urbanismo global en los territorios, el Estado se encuentra con las manifestaciones de violencia presentes en el espacio social, por ello se aborda la violencia desde un ejercicio descriptivo y concreto de la experiencia local, lo que más adelante nos permite analizar las interacciones emergentes en este nuevo contexto.

En el segundo capítulo se expone la visión institucional del Urbanismo Social, las razones de su surgimiento y los criterios para intervenir en comunas que estuvieron marginadas durante años en la ciudad. De ahí se resalta al Proyecto Urbano Integral como la metodología de intervención territorial de este nuevo modelo urbano, por lo que se señalan las formas de su acercamiento con el territorio y los habitantes de la Comuna 13, las estrategias sociales y de seguridad puestas en marcha durante todo el proceso y los objetivos pretendidos con su aplicación.

Basados en lo expuesto en el capítulo anterior, la tercera parte se centra en develar elementos que influyen en los ritmos de la violencia en la ciudad y que a su vez inciden en

los hechos violentos a nivel comunal, durante y después de la intervención del Urbanismo Social (2006-2014). Por otro lado, este capítulo se ocupa de la interacción y el relacionamiento de las instituciones estatales con los combos y bandas que hacen presencia en la comuna y analiza el comportamiento de los homicidios, junto a otras modalidades de victimización en los barrios intervenidos de manera directa e indirecta por medio del Proyecto Urbano Integral.

Después de revelar el relacionamiento del Estado con los grupos ilegales y de analizar el comportamiento de la violencia en la comuna, donde se señalan las contradicciones propias del proyecto, la cuarta parte del trabajo señala las principales motivaciones por las que se intervino en las comunas más pobres y violentas de Medellín. Se retoman así los planteamientos teóricos esbozados en la primera parte, con las particularidades de la construcción del nuevo modelo urbano en lo local y de su aplicación en la Comuna 13, como uno de los territorios clave para la consolidación de Medellín en el mercado global.

Por último, se dan las conclusiones generales de la investigación, fruto de una compleja ruta en la que se alcanza a odiar y amar a esta ciudad en la misma proporción, donde se logra ser la ruptura, pero también el reflejo de toda su convulsión urbana y donde se fortalecen en la memoria las enseñanzas del barrio popular, que en lo cotidiano delatan a la Medellín sin máscaras.

Objetivos

Objetivo general: Develar las relaciones e incidencias entre el Proyecto Urbano Integral y la violencia urbana en la comuna 13 de Medellín, en el periodo de tiempo 2006-2014

Objetivos específicos:

- Identificar las transformaciones que sufren las dinámicas de la violencia urbana en la comuna 13 con los Proyectos Urbanos Integrales.
- Reconocer la influencia de la violencia urbana en la planeación y ejecución del Proyecto Urbano Integral de la comuna 13 de Medellín
- Analizar de forma crítica la relación encontrada entre el Proyecto Urbano Integral y la violencia urbana en la comuna 13 de Medellín.

Metodología

Adentrarse en el estudio de Medellín es una tarea tan apasionante, como compleja, un camino difícil en el que necesariamente hay que establecer una ruta metodológica que permita precisar el objeto de estudio para no perderse en medio de tantos fenómenos sociales que confluyen en un mismo territorio.

Ahora, si bien el trabajo se enfoca en las particularidades de la aplicación del Urbanismo Social en la Comuna 13 de Medellín, el análisis realiza de manera constante una relación ciudad- territorio, pues la aplicación del Proyecto Urbano Integral en la comuna hace parte de la puesta en marcha de un modelo compacto de ciudad, que se encuentra influenciado por los principios de competitividad del mercado global, asimismo, la violencia está enmarcada en estructuras de mayor alcance que penetran la dinámica barrial e influyen en el comportamiento de los hechos violentos que allí se presentan.

De esta manera, el núcleo del análisis se encuentra sustentado en el macro molde crítico, pues además de hacer una lectura ciudad- territorio y viceversa, también se consideran estructuras globales de dominación que influyen, en este caso, en la construcción del urbanismo como instrumento hegemónico de la clase capitalista. Además, el valor principal del quehacer de las teorías inscritas en este macro-molde es *“descubrir y denunciar la serie de injusticias, alienaciones, explotaciones y dependencias en medio de las cuales viven la mujer y el hombre de cualquier sociedad y en cualquier época”* (Losada & Casas, 2008, pág. 55)

En esa medida, el trabajo no se reduce a una mera descripción analítica, sino que además hace un esfuerzo por develar las relaciones de dominación y los intereses particulares presentes en el encuentro del nuevo urbanismo con territorios marcados durante años por la violencia. Por tanto, la investigación se sirve de los enfoques críticos contemporáneos, ya que estos ejercen una crítica a las estructuras del sistema capitalista sin dejar de contemplar variables subjetivas como las que se dan en el entorno territorial en el que el investigador se introduce, pues *“para el teórico crítico no existe tal cosa como la separación sujeto-objeto. Su ‘objetivación intelectual’ forma parte del contexto real investigado y, a su juicio, influye directamente en la transformación del mismo”* (Losada & Casas, 2008, pág. 275)

Por otro lado, el análisis bebe del enfoque marxista, en la medida que reconoce la contradicción como motor de la historia, razón por la cual, se intenta señalar la vigencia de este planteamiento al extender un puente entre la abstracción teórica y la experiencia local, evidenciando las desigualdades sociales y antagonismos presentes durante la historia de mayor expansión de Medellín. Adicionalmente, se retoma la importancia de las fuerzas y las relaciones de producción, que según los postulados de autores como Henri Lefebvre y David Harvey, se transforman con los procesos de globalización y la ciudad pasa de ser el lugar donde se produce, a ser lugar producto, es decir, se convierte en mercancía, fundamento que sustenta la crítica al nuevo intervencionismo estatal.

En búsqueda de nutrir el análisis, la investigación se sirve de un enfoque mixto en el que se utilizaron fuentes cualitativas y cuantitativas, pues los datos cuantitativos se ocupan del qué, el donde y el cuándo, complementando así el por qué y el cómo del análisis cualitativo. Los datos cuantitativos utilizados se extrajeron principalmente de los informes anuales de la Personería de Medellín y del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-, los cuales, se encuentran relacionados con cifras de homicidios, cantidad de personas afectadas por Desplazamiento Forzado Intraurbano y personas reportadas como desaparecidas. El uso de esta información se condensa en la tercera parte del trabajo, donde se busca señalar las contradicciones latentes en el nuevo modelo urbano.

Se utilizaron técnicas cualitativas como el recorrido y la entrevista semi-estructurada para la recolección de información más detallada. Por un lado, el recorrido permite a través de un ejercicio de observación, un acercamiento vivencial con el territorio, comprender dentro del escenario barrial los ritmos de la cotidianidad, conocer la ubicación de cada obra del PUI y la dinámica social alrededor de estas. En suma fueron tres recorridos por los distintos barrios y zonas de influencia del proyecto.

Por su parte, la entrevista semi-estructura aporta mayor riqueza al dato pues el investigador se dedica a guiar la entrevista a partir de unas preguntas iniciales, permitiendo que surjan otros cuestionamientos a lo largo de la conversación que pueden reorientar la investigación. La interacción en este tipo de entrevista es más flexible, lo que permite que en un ambiente

de mayor empatía, el entrevistado pueda hablar con mayor libertad y de esa forma, aportar información inesperada en el proceso investigativo.

De ese modo, se llevaron a cabo 10 entrevistas semi-estructuradas, cuyos relatos quedaron depositados de manera textual a lo largo del trabajo, estos no se modificaron con el fin de transmitir las expresiones y sensaciones genuinas del entrevistado. Además, según las preguntas e hipótesis iniciales de la investigación, se establecieron tres perfiles que orientaron de manera diferenciada los cuestionamientos gruesos de cada entrevista:

1. Funcionario público de alto cargo con participación en la planeación y ejecución del Proyecto Urbano Integral.
2. Habitantes de los barrios impactados por el PUI Comuna 13 que no tuvieran vinculación con ningún tipo de organización ni desarrollaran actividad política, institucional o gremial.
3. Líderes comunitarios con más de 20 años de permanencia en la Comuna 13.

En cuanto a la revisión de fuentes bibliográficas, hubo una separación según el contexto histórico, lo teórico-conceptual y lo institucional. De ese modo, en la primera parte del trabajo se encuentran los aportes hallados en la búsqueda de fuentes contextuales, las cuales sirvieron para reconstruir brevemente la historia de la violencia en Medellín. Igualmente, en el tercer capítulo se señalaron elementos del pasado reciente que influyeron en las variaciones de la violencia durante la implementación del Proyecto Urbano Integral en la Comuna 13.

Para la construcción teórico- conceptual se revisaron autores centrados en el análisis crítico del urbanismo y la ciudad a partir de planteamientos marxistas reinterpretados por la geografía radical. Por su lado, la violencia se revisó desde la producción académica de autores que se han dedicado a su estudio desde la experiencia local, ya que resulta más preciso describirla a partir de los fenómenos propios que la han configurado.

Por último, en la pretensión de un análisis integral, se acudió a documentos institucionales que desde la posición de las distintas instituciones públicas y privadas involucradas, brindaron una visión clara y sólida sobre el origen, la definición, composición y aplicación del Urbanismo Social. Lo que desde la hipótesis inicial de una contradicción manifiesta,

permitió contrastar las fuentes de información contextual, experiencial (entrevistas-recorridos) y teóricas con los planteamientos institucionales.

CAPITULO I

Medellín enmarañada

Para abordar el desarrollo histórico de las dinámicas urbanas en Medellín, nos remitiremos a la década de los años 50 y 60, periodo clave para entender la configuración urbana de las décadas siguientes. Fue durante esos años donde la migración del campo a la ciudad se elevó de manera considerable, la población urbana total de Medellín pasó de 328.294 en 1951 a 717. 865 en 1964, con un incremento en el porcentaje de 551,90 a 1.306,63 en esa temporalidad, presentado el aumento más alto desde 1905 en la ciudad (Ramírez & León, 2013, pág. 35).

El acelerado crecimiento poblacional producto de las migraciones hacia Medellín, devino en la construcción de sus primeros grandes asentamientos informales, hecho que se convirtió en una de las principales problemáticas del momento, tanto, que al finalizar esta década la imagen de la ciudad empezó a transformarse, pasando de una armoniosa y homogénea a una caótica, desordenada y peligrosa. A partir de entonces, tomaría fuerza en el imaginario social que esos ‘otros’ que estaban llegando a la ciudad y se asentaban en las periferias, eran los portadores del desorden y la violencia (Villa & Naranjo, 1997, págs. 60-61).

La llegada masiva de personas a la ciudad vino acompañada de demandas sociales que desbordaron la capacidad institucional y que para la década de los 70 develó la insuficiencia en la cobertura estatal en materia de servicios públicos, vivienda, infraestructura vial y transporte, especialmente para los sectores populares que crecían cada vez más. Esta nueva realidad social desdibujó las posibles predicciones sobre el desarrollo urbano y la planeación en Medellín, dejando en evidencia la incapacidad estatal ante la magnitud de las complejas problemáticas que tomarían forma y fuerza en la ciudad (Villa & Naranjo, 1997, pág. 63).

Realidad social que contrastó con la consolidación que tuvo Medellín en los años 70 como centro económico e industrial del país (Ramírez & León, 2013, pág. 26), señalando así la disimilitud del desarrollo económico de una ciudad situada en el centro de la economía nacional y con un crecimiento presuroso de sectores marginados en su interior. Entre 1958 y 1972 el 50% de la población de Medellín estaba compuesto por habitantes residentes en núcleos informales (UNESCO, 1996, pág. 29), reforzando la visión de una ciudad dual, dividida entre lo legal e ilegal, esto último atribuido con fuerza a los sectores más pobres de Medellín.

Sin embargo, durante esta misma década se empezó a reconocer la dimensión sociopolítica de la marginalidad urbana, aunque seguía abordándose como una carga, un lastre o una molestia traída por otros, pues por un lado, surgieron nuevas problemáticas como el desempleo y la inseguridad, y por el otro, se daba una “*creciente formación de movimientos de protesta urbana, que cuestionaron las políticas adelantadas por el Estado y sus efectos sociales*” (Villa & Naranjo, 1997, pág. 64), lo que acrecentó la dimensión del problema e hizo más notoria la incapacidad del Estado para resolver todas las aristas que componían este nuevo panorama.

Ahora bien, a las problemáticas amasadas en las décadas anteriores, se sumaron múltiples formas de violencia de alcance nacional y con fuertes repercusiones en lo local-territorial durante los años 80. Estos años estuvieron cargados de momentos álgidos en todo el país; la participación política se mantuvo cerrada, la persecución estatal de líderes y militantes de izquierda fue una constante, surgió el paramilitarismo, emergió con fuerza el narcotráfico y se intensificó el conflicto armado nacional. Esos elementos constituyeron un escenario de constante agitación, en el que Medellín no fue la excepción de la regla, pues los brazos de la confrontación armada comenzaban a manifestarse de forma más contundente en la ciudad y a incidir de manera más estructurada en distintos barrios populares.

Pese a ello, muchos de los desplazados por el conflicto armado nacional y aquellos que veían en Medellín una posibilidad de progreso siguieron migrando hacia allí, expandiendo los asentamientos urbanos forjados por habitantes locales y de otras regiones que se encontraban marginados de las principales dinámicas económicas, sociales y políticas de la ciudad. Así, se organizaron como barrios populares de carácter informal y generaron una

planeación que surgió de la necesidad de pensarse los territorios como propios, convirtiéndose en una muestra contundente de las fracturas del sistema capitalista, donde se materializan las disparidades de un modelo económico basado en la concentración de la riqueza y el desarrollo.

De ese modo, la expansión de los asentamientos, sus carencias estructurales y los vacíos institucionales en materia de seguridad, implicaron la organización de los pobladores para la defensa de los pocos bienes que poseían en los barrios informales, ante el incremento de robos, otras acciones delictivas o autoritarias de grupos de combos y bandas que se asentaron en esos territorios.

A su vez, se gestaron redes urbanas de apoyo a los frentes guerrilleros del EPL y el ELN en Medellín, fortalecidos por el auge de movimientos sociales entre estudiantes, sindicalistas y los barrios informales, adquiriendo la ciudad mayor importancia para las guerrillas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, págs. 111, 114), las cuales prepararon estrategias para su incidencia en los sectores de mayor agitación.

Asimismo, a mediados de los años 80 los actores del narcotráfico también encontraron funcional la situación precaria de los barrios populares, pues allí dieron con grupos de jóvenes que desde las “bandas” engrosaron sus estructuras y se prestaron para la práctica del sicariato, a cambio de dinero rápido, la adquisición de cierto estatus social y la consolidación de poder territorial en los barriadas.

Tras enfrentarse violentamente, en varias comunas se gestó un equilibrio inestable, en el que coexistieron las milicias guerrilleras con bandas que trabajaban para los narcotraficantes. En ello sucedió que miembros de milicias pasaron a ser parte de las bandas, poniendo al servicio de estas sus aprendizajes militares, a la vez que adquirieron prácticas propias del accionar criminal; así mismo, algunos integrantes de las bandas pasaron a engrosar grupos de milicias. Este tipo de cruces y mixturas de los actores armados y su formación asociada a la aplicación de la violencia sería una constante en las décadas venideras en la ciudad.

En medio de la exaltación de la violencia armada y la creciente del narcotráfico en la ciudad, ocurrió la crisis de la industria textil debido a la poca diversificación productiva que

concentró el desarrollo económico en un solo sector, que resultó insuficiente para el mercado competitivo que se abrió paso con los procesos de globalización y con él, el desmonte del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que buscaba fortalecer la economía interna.

Iniciando la década de los 90, la crisis de la industria textil en Medellín se profundizó con la liberalización del mercado que se da en el país, en búsqueda de adherirse a un modelo global que comenzó a desplazar la generación de riqueza hacia la prestación de bienes y servicios (Sánchez, 2012, pág. 3).

La caída de la industria textil en Medellín afectó en parte la situación económica de familias pertenecientes a sectores populares que devengaban un salario de su trabajo en ese sector productivo. Como es lógico al ser la base de la economía urbana, la crisis de esta industria afectó el desarrollo de la economía y por tanto, de la vida en la ciudad, agregándose a las múltiples problemáticas que atravesaban a Medellín en ese momento.

En ese mismo periodo las milicias alcanzaron una expansión territorial considerable pese a la oposición de algunas bandas que decidieron enfrentarlas y que fueron derrotadas en el intento. Los insurgentes lograron afianzarse en algunos barrios como el Veinte de Julio y Las Independencias I, II y III en la comuna 13; el Picachito en la Zona Noroccidental o Santo Domingo en la Zona Nororiental (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pág. 127).

Por otro lado, la situación socioeconómica de muchos de los barrios populares en la ciudad continuó siendo precaria. Se estima que para 1992 existían en Medellín 70 barrios denominados institucionalmente como “subnormales”, pues no cumplían con las normas mínimas de urbanización, construcción y usos del suelo o presentaban condiciones precarias de hábitat, déficit de servicios públicos, viviendas en mal estado y sin título de propiedad (Municipio de Medellín; CORVIDE; PNUD; Consejería Presidencial, 1993). Como respuesta a esa situación, ese año se promovió la aplicación del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Subnormales -PRIMED- como *“una aceptación condicionada de los barrios clandestinos bajo el enfoque de ‘normalizar la subnormalidad’*

y se entiende que los procesos de formalización no sólo están en lo físico, sino también en lo social” (Velásquez C. A., 2013, pág. 141).

Ese proyecto representó un giro discursivo en la forma en que la institucionalidad asumió el carácter y la configuración de los barrios populares, y desde la acción, hizo que el Estado cambiara la intervención en algunos de estos territorios, pues pasó de la represión y la negación de ese fenómeno social a un intento de generar acompañamiento en procesos de mejora, especialmente en infraestructura, legalización y formalización de territorios que habían sido considerados por años ilegales e informales. Sin embargo, el programa se vio frustrado en el año 2001, al no estar integrado a los planes territoriales ni hacer parte de una política pública que apoyara su ejecución.

A ese panorama se sumó que desde finales de los años 90 se presentó el avance de grupos paramilitares en el país, siendo aguda su violencia en ciudades como Barrancabermeja y Medellín. Estos grupos hicieron presencia en los barrios, los actores mutaron, se disociaron o se articularon a las estructuras paramilitares; se encontró el conflicto político con la violencia delincuencia, el narcotráfico y las dificultades socioeconómicas en las que seguían insertos los habitantes de muchos de los barrios populares de Medellín.

Así el conflicto se agudizó debido a la arremetida de los paramilitares y a sus disputas por el control territorial con milicias guerrilleras consolidadas en comunas populares de la ciudad. De esta manera, hubo choques en los barrios La Cruz y La Honda de la comuna 3 Manrique, donde operaban las milicias bolivarianas de las FARC; en las comuna 13 San Javier y la 7 Robledo con influencia de milicias de FARC, ELN y los Comandos Armados del Pueblo –CAP– y en las comunas 8 Villa Hermosa y 9 Buenos Aires donde operaban las Milicias 6 y 7 de Noviembre y Milicias ligadas al ELN (Gil, 2009, pág. 80).

Fue lo que algunos académicos han denominado como la urbanización de la guerra, es decir, *“el despliegue de acciones de guerra en la ciudad relacionadas con el conflicto armado”* (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pág. 189), dado el tipo de actores en confrontación, las modalidades de victimización, las acciones bélicas llevadas a cabo en un escenario urbano y por su elevada intensidad.

Comuna 13: La convulsión de la guerra urbana

La Comuna 13 se encuentra ubicada en el Centro Occidente de Medellín, contiene 19 barrios que comenzaron a tomar forma de manera acelerada a partir del poblamiento que se dio en los años sesenta en el barrio Veinte de Julio, como extensión de San Javier, convirtiéndose en el primer barrio subnormal de la comuna (Aricapa, 2005, pág. 6). Muchos de los habitantes que llegaron a asentarse allí, lo hicieron por las pocas oportunidades presentes en los territorios rurales, como efecto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en otras regiones del país o el departamento, por el desplazamiento forzado intraurbano y también como parte de los procesos regulares de migración que se dieron en otras zonas de la ciudad.

Ahora bien, la manera errática y diferenciada en la que el Estado hizo presencia en esos territorios y las adversas condiciones socioeconómicas presentes en ellos, generaron un escenario de posibilidades para la conformación de grupos armados que buscaron ocupar los vacíos dejados por la institucionalidad. La exclusión y segregación de esta zona de la ciudad, se contrastó así con la centralidad que le dieron los actores armados a lo largo del tiempo por las características geoestratégicas y socioespaciales que la acompañan, dando como resultado disputas, confrontaciones y controles en los que la población civil fue la mayor afectada.

Los actores armados buscaron la permanencia y el control de la comuna, pero ¿Qué se disputaban? ¿Qué buscaban controlar? ¿Por qué la comuna 13 es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en la ciudad? Esos cuestionamientos nos llevan a mostrar las características que han hecho que milicias independientes, milicias guerrilleras, paramilitares y Fuerza Pública, hayan sido los protagonistas de una guerra de tal magnitud. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica:

Esta ubicación ha sido importante también para guerrillas y paramilitares al posibilitar la conexión con sus frentes de guerrilla o bloques de autodefensas en Urabá, el transporte de armas, su proyección hacia otras zonas del país y la explotación de recursos económicos provenientes de la extracción ilegal de gasolina,

dada la ubicación del oleoducto Sebastopol-Medellín en el corregimiento vecino de San Cristóbal (2011, pág. 51).

Por otro lado, características topográficas de la comuna como sus lomas empinadas y los rasgos propios de una suerte de planeación comunitaria manifiesta en callejones, calles y escaleras estrechas, la falta de vías y el reducido espacio público producto de la ocupación desmedida de viviendas por la necesidad de habitabilidad permanente, hicieron de la comuna 13 un territorio con una configuración espacial funcional para los actores armados, pues estos contaban con un conocimiento y una ubicación más precisa de la espacialidad y los trazados de la comuna.

La construcción de barrios de invasión por parte de migrantes y desplazados de la violencia y la densificación e irregularidad en el trazado que de allí se desprenden, hacen de este un territorio de difícil acceso y circulación. Este aspecto ha sido aprovechado por los grupos armados, quienes han tomado a la comuna como lugar de operaciones y corredor estratégico para el transporte de droga, el ingreso de armas, el traslado de integrantes de frentes rurales hacia la ciudad, el refugio de personas buscadas por la justicia y para mantener secuestrados, en muchos casos como antesala a su entrega a los frentes guerrilleros rurales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, pág. 51).

Los grupos armados que han hecho presencia en la comuna, se han transformado con el tiempo, las formas y las motivaciones del control también han variado, dándole matices y ritmos diferentes a la violencia armada que ha tenido lugar allí, presentando un territorio donde la violencia ha sido continua.

Desde mediados de los años 80 y hasta finales de los noventa, cuando inició la arremetida paramilitar, fueron las milicias las que controlaron la zona. Éstas contaron con una legitimidad otorgada por gran parte de la población civil, pues a medida que el número de habitantes crecía, surgieron problemas de convivencia y seguridad, lo que hizo que esto último se posicionara como uno de los servicios cruciales que el actor armado podía ofrecer al resto de la comunidad. En principio, muchos de los miembros de las milicias hacían parte de la misma población que vivía en la comuna, posteriormente son apoyados por grupos guerrilleros que luego impondrán su dominio.

Se puede decir entonces que ante la inexistente protección por parte del Estado como garante de seguridad, fueron los vecinos junto a la base social de la izquierda armada quienes se organizaron para acabar con los actos delincuenciales que se estaban presentando, pero con el paso del tiempo eso terminó generando abusos asociados a la “limpieza social”, lo que pese a su aceptación por gran parte de la población, que se sentía más segura con las medidas aplicadas por las milicias, también generó distancias y rupturas con otra parte de la comunidad que despreció y además padeció las violencias ejercidas por ellos:

Antes el barrio era muy pobrecito pues arriba, las Independencias eran ranchitos, prácticamente había muy poquita casita de material, prácticamente ranchitos y pues había mucho ladrón y mucho marihuanero. No sé la fecha, pero en ese tiempo llegaron las milicias [mediados de los 80] cierto día pues vimos que llegaron las milicias, dijeron que iban a limpiar el barrio, igual así lo hicieron, pues empezaron a acabar con todos esos ladrones, con todos los marihuaneros. Nosotros nos sentíamos contentos, porque pues a mí me daba mucho miedo que subía de trabajar y los marihuaneros y los ladrones también se metían a los ranchitos y robaban, entonces pues particularmente a mí me gustó cuando llegaron las milicias, porque ellas más que todo empezaron limpiando (Entrevista a doña Mery, Comuna 13, Medellín, 2017)

La “limpieza social” ejecutada por las milicias, consistió en el asesinato y expulsión de los delincuentes comunes, violadores y consumidores de droga. También realizaron actos de castigo público como hecho ejemplarizante para los demás pobladores y establecieron control territorial como muestra de su dominio en los barrios. Los CAP, por ejemplo, comenzaron a determinar el uso de espacios públicos como canchas, corredores o parques y restringieron el ingreso y salida de propios y foráneos a los barrios. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, pág. 67).

Por su parte, las guerrillas del ELN llegaron a la comuna primero que los CAP y las FARC-EP, éstas últimas se instalaron de manera contundente en los años 90 como principal apoyo insurgente en la guerra con los paramilitares. La confluencia de milicias y guerrilla resultó en disputas entre esos grupos por el principal dominio de la zona, lo que hizo necesaria la

imposición de lineamientos de orden y control por parte de la guerrilla que contaba con mayor capacidad militar.

Sin embargo, la presencia miliciana y guerrillera no se basó únicamente en el uso de la fuerza, estas también establecieron lazos de solidaridad con parte de la población, tuvieron fuerte influencia en la organización de algunas demandas sociales, incluso, miembros del ELN llevaron el servicio de energía de contrabando a los ranchos de la parte alta de la comuna y ayudaron a la toma de tierras para la construcción de casas para las familias que llegaban desplazadas del departamento del Chocó (Aricapa, 2005, págs. 44-45). También llevaron a cabo actividades de integración con la comunidad en búsqueda de legitimar su accionar y fortalecer su base social, generando escuelas de formación política con la pretensión de que dieran continuidad a su proyecto sociopolítico.

La importancia del barrio Las Independencias para las milicias

El barrio Las Independencias surge como el asentamiento informal más grande de la comuna 13 en los años 80, cuando cientos de familias comenzaron a levantar allí sus “ranchos” luego de adquirir un pedazo de tierra a través de la toma espontánea y el loteo pirata. A su llegada no había alcantarillado, agua potable o energía eléctrica ni existían vías de comunicación que facilitaran su acceso, y como suele suceder en las primeras etapas de los asentamientos informales, tampoco había presencia del Estado.

Una de las invasiones, la más densa y extendida, fue la que se desencadenó en las lomas de San Javier y el Veinte de julio y se regó por la cuenca de la quebrada La Salada. Tal avance produjo el nacimiento de cinco nuevos barrios: La Independencia I, La Independencia II, La Independencia III, Nuevos Conquistadores y buena parte de El Salado, donde en cosa de cinco años se acomodaron más de cinco mil familias, lo que en su momento le valió ser considerada la invasión más voraz de América Latina, ósea la más grande levantada en el menor tiempo posible: más voraz que los tugurios de Ciudad de México y más que las favelas de Sao Paulo (Aricapa, 2005, pág. 7)

Muchas de las familias que conformaron el asentamiento provenían de subregiones de Antioquia como el Occidente y el Urabá, también de otros barrios populares de Medellín. La proveniencia foránea de los nuevos habitantes de los barrios y su masividad conllevaron

a que los anteriores habitantes de la zona nos los recibieran con mayor agrado: *“Debido a las prácticas invasoras de apropiación del terreno, los nuevos vecinos fueron denominados por los residentes de los barrios existentes como ‘invasores y tugurianos’, calificativo que dificultó la integración entre los habitantes de la Comuna”* (Alcaldía de Medellín, 2009, pág. 12)

Los primeros conflictos surgieron cuando la administración municipal envió a la Policía a ejercer la violencia tumbando algunos de los ranchos de las familias que querían asentarse. Así, el Estado mostró su lado represivo, mientras se ocultó como garante de derechos fundamentales para comunidades en estado de vulnerabilidad, lo que dio vía a situaciones como el control del tubo madre del acueducto que surtía a los barrios Belencito y Villa Laura, en el que se emitió un cobro a los nuevos moradores de Las Independencias para que pudieran tener el recurso vital, pero como no siempre podían pagar por el agua, buscaron la manera de adquirirla sin que los cobradores se dieron cuenta, lo que dio paso a los primeros enfrentamientos entre vecinos con machete en mano (Aricapa, 2005, pág. 9).

Con la energía eléctrica ocurrió lo mismo *“la gente se pegaba de contrabando de las líneas principales y por cada pega tenían que pagarle un importe a los ‘caciques’.* Entonces el cielo se congestionó de cables en una maraña tan ilegal como riesgosa” (Aricapa, 2005, pág. 10). La prestación y distribución de servicios básicos no estuvo a cargo del Estado, dando paso a prácticas peligrosas e ilegales para su obtención.

En ese marco, se constituyó una historia de precariedad donde la ilegalidad se convirtió en un recurso de sobrevivencia ante la falta de prestación de servicios básicos, negados por el carácter informal de su construcción. Sin embargo, las necesidades comunes a todos también tejieron una historia de organización, al punto de conseguir la legalización y formalización de los barrios de la zona y el nacimiento de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Nuevos Conquistadores y Las Independencias, ya como barrios oficiales.

La emergencia de esos barrios estuvo fuertemente ligada a la conformación de las milicias en ese sector, pues la cantidad y el carácter popular de su población, el incremento de la inseguridad y la nula respuesta estatal a esto, junto al señalamiento que llevaban consigo, facilitaron la presencia e influencia de esos grupos en la zona.

La consolidación de las milicias en este sector fue fundamental no sólo por las características descritas y sus implicaciones, sino también porque Las Independencias conectan con el barrio El Corazón y este a su vez conecta con el corregimiento de Altavista, lo que resultó estratégico para el dominio de una de las entradas a la comuna con conexión rural, característica geoestratégica que tampoco pasó de largo para los paramilitares.

De esta manera, la incidencia de las milicias en Las Independencias y barrios aledaños hizo que la comuna 13 se convirtiera en el principal fortín de las insurgencias en la ciudad, lo que alimentó los señalamientos y la estigmatización al resto de sus habitantes, especialmente sobre sus jóvenes, lo que sería reforzado por medios de comunicación, instituciones políticas y Fuerza Pública, para justificar las futuras y reiteradas intervenciones militares que se llevaron a cabo en la comuna y que aplicaron toda su potencia bélica en los barrios Veinte de Julio, Las Independencias, Belencito, El Corazón, El Salado y Nuevos Conquistadores, dejándolos como los más afectados de todo ese territorio (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, págs. 84,103,123).

La incursión paramilitar

La llegada de los paramilitares a la ciudad hizo parte de su nueva estrategia de expansión iniciada en la región del Urabá, donde tuvieron que disputarse fuertemente el control territorial con la guerrilla de las FARC-EP (1995-1997). Luego de imponer su dominio, buscaron desde allí extender su proyecto a otras regiones y ciudades del país, por esta razón, surgen en 1997 bajo la orden de Carlos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- (GMH, 2013, pág. 60).

El control de Medellín, junto a otras ciudades como Barrancabermeja, fue parte de los objetivos centrales para la consolidación hegemónica de este grupo armado en el escenario urbano. Se trató entonces de una ofensiva nacional en donde no sólo el campo sintió las inclemencias de una guerra sucia, sino también algunos escenarios urbanos donde la población civil fue la más afectada.

El interés de los paramilitares por controlar la ciudad de Medellín, se basó en dos cuestiones fundamentales: la primera de orden geoestratégico y la segunda obedece a la

doctrina contrainsurgente, pues los paramilitares buscaron erradicar definitivamente la influencia guerrillera en la ciudad.

El dominio sobre Medellín fue un objetivo a lograr. Se trataba de la segunda ciudad del país que, para ese entonces, estaba localizada en un corredor territorial de dominio paramilitar que abarcaba el Chocó, el Norte de Antioquia, el bajo Cauca, el Sur de Córdoba y de Bolívar. La ciudad era además estratégica por su cercanía a la región del oriente antioqueño, zona en disputa con el ELN y con las FARC y escenario para poner freno a la creciente influencia de las guerrillas en zonas periféricas de Medellín. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, pág. 69).

Ahora bien, la pretensión que tenían los paramilitares de acabar con la influencia guerrillera en algunos barrios de la ciudad, fue apoyada por otros actores relacionados con el conflicto armado como los narcotraficantes, que ya habían consolidado su influencia en la ciudad. De esa manera, los paramilitares aprovecharon el terreno ya abonado en otras zonas de Medellín donde los ‘narcos’ contaban con ejércitos de hombres entrenados para el sicariato, en su mayoría jóvenes de barrios populares, armados y dispuestos a matar por dinero.

Fue así como el plan de la arremetida paramilitar, dio origen al Bloque Metro en Medellín, grupo armado que comenzó bajo el mando de Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, el cual tenía como fin central copar las zonas de control guerrillero en la ciudad, para ello, desplazó efectivos del frente que operaba en el Nordeste de Antioquia, estableció alianzas con algunas bandas de la ciudad y lanzó una ofensiva contra milicias del ELN en el barrio La Sierra, pero fracasa en ese intento (Jaramillo & Gil, 2014, pág. 139).

El fracaso de la ofensiva del Bloque Metro, supuso una suerte de errores que le endilgaron a Doble Cero un desconocimiento de la confrontación urbana en Medellín, lo que llevó a la dirección de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- a tomar la decisión de entregarle una franquicia a Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna” entonces jefe de la Oficina de Envigado, estructura criminal que ya contaba con poderío en distintos barrios de la ciudad:

“Una compleja estructura criminal asociada al narcotráfico y de la cual hacían parte bandas y ex milicianos que entraron a operar a nombre de las AUC. Así es como se conforma el Bloque Cacique Nutibara, el cual se consolidó entre los años 1998 y el 2000 como la principal organización paramilitar en la ciudad” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, pág. 71)

Con todo, bandas como Los Triana, La terraza y la banda de Frank, se opusieron a operar bajo el mando de esta nueva organización, por esta razón fueron declaradas objetivo militar del Bloque Cacique Nutibara, lo que desencadenó una confrontación que culminó con la derrota de dichas bandas (Jaramillo & Gil, 2014, pág. 141) Así, este grupo paramilitar logra consolidarse y se convirtió en la estructura armada que a finales de los años 90, entró a disputarse el dominio de la comuna 13 con los CAP, las FARC-EP y el ELN presentes en una cantidad considerable de barrios que componen ese territorio.

La llegada de los paramilitares signó una nueva etapa para el conflicto armado en la ciudad y sobretodo en esta comuna donde los actores armados desplegaron con fuerza su accionar bélico. La guerra se urbanizó, se intensificó y aumentó de manera desbordada los casos de victimización: Asesinatos selectivos, violencia sexual, masacres, desplazamiento y desaparición forzada.

Sin embargo, las guerrillas buscaron permanecer en el territorio, pues este se convirtió en una suerte de trinchera que además les brindaba beneficios económicos, no sólo por prácticas como el secuestro, sino también por el control sobre el corredor estratégico de enlace con los frentes rurales, que les permitía transportar con mayor facilidad recursos, armas y combatientes. De otro modo, por ser la comuna su principal fortificación de base social y dominio territorial, las guerrillas tenían la posibilidad de movilizarse sin restricción alguna, por lo que consideraron que podían resistir mejor a la ofensiva paramilitar desde allí. Por su parte, los paramilitares requerían conseguir el dominio de la comuna para la expansión de su proyecto criminal, económico y contrainsurgente, lo que significaría su posterior consolidación en la ciudad.

Operaciones militares en la comuna 13

Una de las principales causas que permitió la fijación, en principio de las milicias y posteriormente de las guerrillas en la comuna 13, así como el despliegue de fuerzas paramilitares a finales de los noventa en los que se agudizó la confrontación, fue la deficiente presencia estatal. El Estado no estuvo en un primer momento como prestador de servicios y bienes públicos ni como garante de derechos fundamentales, ni como garante de la seguridad, lo que dejó a la población civil vulnerable frente a cualquier actor armado que llegara a imponerse.

Pese a la endeble presencia del Estado y sus transformaciones a lo largo del tiempo, son las Fuerzas Militares quienes durante 2002 comienzan a ser su cara más visible en el territorio; cara que por demás, se convirtió en una de las más cruentas del conflicto armado en la comuna, pues durante ese año se realizaron cerca de 11 operaciones militares, en las que se cometieron violaciones de derechos humanos. Dichas operaciones se han justificado bajo un discurso relacionado con la erradicación de las guerrillas, ocultando los intereses económicos de dichas intervenciones militares, pues:

A partir de la década del 2000 el sector centro-occidental de Medellín, en el que se ubica la Comuna 13, adquiere mayor importancia en relación con el impulso a un modelo de desarrollo regional que propende por una articulación e integración territorial de Antioquia con el Valle de Aburra y Medellín. Bajo esta perspectiva, la Comuna 13 ofrece ventajas dada su cercanía a la carretera al Mar, una vía importante para la economía de Antioquia y del país al conectar a Medellín con el puerto de Urabá clave en la economía del Departamento y con el túnel de occidente que acorta las distancias entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, capital del Departamento en la época colonial e importante potencial turístico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, pág. 50)

En un conflicto desenfrenado instalado en la comuna con la irrupción paramilitar,-insuficiente para derrotar a las guerrillas-, junto a los interés económicos de por medio, se generó un momento crítico con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática, forjada con el mismo hierro contrainsurgente que adelantaban los paramilitares en las regiones y en la ciudad.

Dicho periodo presidencial coincidió con la Alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, quien en acuerdo con la Presidencia impulsó la realización de las once operaciones militares en la Comuna 13: Otoño I el 24 de febrero en la que se realizaron 42 detenciones arbitrarias; Contrafuego el 29 de febrero con un saldo de 63 allanamientos, 31 detenciones y la muerte de 5 personas presentadas como milicianos dados de baja en combate; Otoño II y Marfil en marzo; Águila en abril; Horizonte II en mayo; Mariscal el 21 de mayo con 9 civiles muertos, 37 heridos y 55 personas detenidas; Potestad el 15 de junio con una persona muerta; Antorcha el 20 de agosto con un saldo de 37 personas heridas; Saturno en septiembre y Orión en octubre. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pág. 108)

La Operación Orión fue liderada por el comandante del Ejército Nacional Carlos Alberto Ospina junto al entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, Mario Montoya y con el comandante en ese momento de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Leonardo Gallego. Estos actuaron conjuntamente con el DAS, el CTI, la Fiscalía, Fuerzas Especiales Antiterroristas y los grupos paramilitares asentados en la zona.

En cuanto a la potencia bélica, principalmente las operaciones Mariscal y Orión contaron con un pie de fuerza numeroso, de aproximadamente 1.500 hombres, haciendo uso de helicópteros y armamento de guerra como fusiles, ametralladoras M-60 y francotiradores, características que dejan ver la dimensión de la violencia ejercida en algunos barrios de esta comuna.

Por otra parte, la participación de los paramilitares fue crucial para la concreción de las operaciones militares, pues las instituciones policiales y militares culminaron con el trabajo de remoción de milicias que aquellos habían iniciado. Además, los paramilitares también hicieron parte de los trabajos de inteligencia. Esto lo reforzó alias “Don Berna” en declaraciones dadas en el marco de Justicia y Paz.

El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares [...] varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban

encapuchados, se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos (Audiencia de versión libre, Diego Fernando Murillo Bejarano, 2008)

En medio de la confrontación armada murieron 4 militares y 10 personas que fueron presentadas como integrantes de las milicias. Hubo 450 detenciones, algunos de los detenidos fueron torturados y otros desaparecidos.

Luego de efectuar la reseña del total de las 450 personas 170 fueron vinculadas formalmente a investigación como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo y porte ilegal de armas. De esta cifra tan solo a 82 personas se les definió situación jurídica imponiéndose medida de aseguramiento. Las demás recuperaron su libertad” (Corporación Jurídica Libertad, 2009)

No hay un registro oficial sobre las víctimas desaparecidas de manera posterior a la Operación Orión, sin embargo, algunas organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos como la Corporación Jurídica Libertad sostienen que son más de 100 los casos documentados de personas que fueron ocultadas en la escombrera (Verdad Abierta, 2015) los cuales continúan en total impunidad.

De esa manera, durante los operativos militares sucedieron hechos violentos en los que el Estado vulneró a la sociedad civil: helicópteros sobrevolaron la zona y dispararon de forma indiscriminada, se realizaron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y allanamientos ilegales y desapariciones forzadas, todo ello que connotó un excesivo uso de la fuerza.

Los resultados de la operación Orión fueron asumidos como exitosos por la Alcaldía de Luis Pérez y la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, no obstante, lo indiscriminado de los hechos victimizantes evidenciaron los abusos y extralimitaciones de las Fuerzas del Estado. Más bien, pareciera que las operaciones militares respaldaron el cumplimiento de los objetivos propuestos en 1997 bajo el mando de Carlos Castaño de expandir el proyecto paramilitar en la ciudad, pues fue el paramilitarismo quien copó los espacios que dejaron

las guerrillas derrotadas casi que en su totalidad, no la Fuerza Pública, lo que les permitió conseguir la expansión de su proyecto y el dominio de una zona estratégica como la comuna 13, San Javier.

La consolidación de ese actor armado en la comuna sucedió sin que se logaran erradicar manifestaciones propias del conflicto armado, pues los miembros de grupos paramilitares como el Bloque Cacique Nutibara o Héroes de Granada continuaron con las violaciones de derechos humanos, con acciones de intimidación contra la población y siguieron controlando territorios en los que hacían presencia. Por ello, se considera que no hubo una desmovilización en sentido estricto, lo que ocurrió en el año 2003 y que “culmina” en 2005 con la creación de la Ley de Justicia y Paz, sino que hubo una transformación de los actores, de sus prácticas y modalidades de violencia, pues el territorio pasa de ser uno en disputa a uno de control paramilitar.

Desmovilización parcial de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre del año 2003, con 868 excombatientes, 497 armas y 14 granadas entregadas. Por su parte, el Bloque Héroes de Granada lo hizo el 1 de agosto de 2005, con 2.033 excombatientes, 1.120 armas y 791 granadas entregadas. (Alto Comisionado para la Paz, 2006, págs. 14, 44). Ambos procesos de desmovilización se llevaron a cabo durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Este proceso de paz con los paramilitares tuvo serias inconsistencias que han puesto en duda la veracidad de una plena desmovilización. En primer lugar, sus etapas se desarrollaron de manera improvisada con una fuerte carencia de planeación, lo que desdibujó las orientaciones fundamentales que debía tener un proceso de desmovilización y reinserción con todos los bloques paramilitares en cuestión. Por otro lado, la mayoría de desmovilizaciones se hicieron sin un marco jurídico especial para el proceso, lo que contribuyó al ocultamiento de la verdad y la falta de reparación a las víctimas.

Durante los dos primeros años de la desmovilización el proceso fue altamente anárquico, pues se había dejado que cada bloque, de acuerdo con su conocimiento y poder de negociación, estableciera de forma bilateral con el gobierno la forma de

realizar el proceso de DDR. La mesa de diálogo sólo acogió a algunos dirigentes de las AUC (Mesa Unificada con los tres principales grupos) y excluyó a otros sectores que estaban interesados en participar en el proceso. Complementariamente, la desmovilización de un número significativo de bloques se desarrolló sin la existencia de un marco jurídico adecuado, pues la Ley de Justicia y Paz sólo pudo concretarse hasta el 30 de diciembre de 2005. (Alonso & Valencia, 2008, pág. 16)

En segundo lugar, el proceso de desmovilización paramilitar tampoco contó con presencia de organismos internacionales que pudieran hacer control y monitoreo, sólo hasta 2004 hizo presencia la Organización de Estados Americanos –OEA–. Además, no hubo productos de conocimiento público, no se supo cuál era el objetivo final del proceso, los únicos interlocutores fueron la iglesia católica y el Alto Comisionado para la Paz, relegando a los gobiernos municipales y departamentales a cumplir con el trámite de la entrega de armamento y la desmovilización. No existió un tránsito adecuado entre negociación, desmovilización y reincorporación, todo se hizo de manera rápida.

La mayoría de las desmovilizaciones se produjeron en lugares no aptos para ello y se hicieron de manera rápida, pues el interés del Gobierno Nacional era, en la mayoría de casos, reunir en un sitio a las tropas, hacer un acto de entrega de armas y de sus equipos militares y desmovilizarlos (Alonso & Valencia, 2008, pág. 17)

Como si fuera poco, los grupos paramilitares continuaron ejerciendo modalidades de violencia durante el proceso de negociación y desmovilización, lo que evidencia que nunca hubo una renuncia completa de las prácticas paramilitares ni del uso de las armas. “cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, indican que 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos de autodefensas durante el proceso de negociación y desmovilización, pese a que estuvo condicionado a un cese de hostilidades” (Verdad Abierta, 2015)

Así, todo indica que se trató de una desmovilización parcial, con una apuesta por mostrar resultados inmediatos y en donde se pensó poco en la reinserción y reincorporación de los combatientes y la reparación de sus víctimas. Incluso se afirma que hubo un aumento en la cifra real de desmovilizados y que en la entrega de armas hubo personas que se hicieron

pasar por paramilitares. Esta versión la reforzó Fredy Rendón, alias “Alemán” ex cabecilla del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC:

Los miembros de las Autodefensas sumaban 15.000 o 16.000, y al final se desmovilizaron 31.000, afirmó Fredy Rendón Herrera, alias el 'Alemán', en diálogo con Caracol radio, donde además aseguró que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, en el 2003, así como el elevado número de integrantes que entregaron las armas, se dio debido a la falta de resultados de un proceso anunciado desde el año 2002[...]. El exjefe paramilitar reveló en una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá que esa desmovilización, la primera de las AUC, había sido una 'farsa' porque la mitad de las personas que entregaron sus armas no eran paramilitares. 'Luis Pérez estaba a la cabeza y después recibió Fajardo. Esa desmovilización fue en Villa de la Esperanza y benefició a Sergio Fajardo y a Alonso Salazar, porque los niveles de violencia bajaron a cambio de dádivas', dijo Rendón Herrera a Caracol Radio (Revista Semana, 2011).

Esas inconsistencias fueron de gran relevancia, si se tiene en cuenta que se dieron en el marco del proceso que suponía la desmovilización de un actor clave dentro del conflicto armado en el país y en la ciudad de Medellín, como fueron los paramilitares. Solo en la desmovilización del Bloque Héroes de Granada, “más del 60% pertenecían a estructuras armadas delincuenciales que operaban en la ciudad de Medellín” (Personería de Medellín, 2005, pág. 14).

Por lo tanto, al no existir una voluntad real de la totalidad de los bloques y miembros para desistir de las armas, al no tener acompañamiento, monitoreo ni verificación y al no establecerse un proceso de reinserción con parámetros organizados y condicionantes serios que garantizaran la no repetición, lo más probable era la reincidencia de los desmovilizados en nuevos grupos armados o en las bandas de las que provenían antes de ser cooptados por el paramilitarismo.

“Los grupos derivados del paramilitarismo y asociados al narcotráfico comenzaron a desarrollar una intensa disputa en el ámbito rural, pero también en el plano urbano incluido los municipios del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí y Medellín, para la cooptación de los grupos ilegales existentes en los barrios, tales como combos y bandas” (Personería de Medellín, 2011, pág. 18)

De esta manera se sostuvo un cruce entre las prácticas del aprendizaje criminal con las prácticas propias del paramilitarismo para el control de micro-territorios en toda la ciudad.

Hubo un agrupamiento de fuerzas irregulares, hubo una marcación política o una enseñanza política hacia los jóvenes a los cuales los hacían apropiarse de los territorios para cuidarlos ellos mismos, pues que son grupos de micro-seguridad. Tengo entendido que son tendencias políticas de seguridad importadas por Luis Pérez y Álvaro Uribe Vélez, que son políticas de micro-seguridad importadas de las favelas de Brasil. Entonces lo que pasó fue que sacan personas que son milicianos entre comillas, pero lo que hacen es empezar a traer gente de otros territorios, generar esas acciones para generar miedo o crear terror entre la comunidad: el descuartizamiento, matar una o dos personas de marcado reconocimiento, generar desplazamiento y así como limpiar el barrio y que empiecen a cuidarlo los mismos jóvenes y esos jóvenes los van construyendo de política de ultraderecha paramilitar (Entrevista a hombre adulto, Comuna 13, Medellín, 2017)

Ese cambio en la dinámica territorial, trajo como efecto una disminución de las cifras de homicidios, pero otras violencias se mantuvieron y aumentaron, como la desaparición forzada y el desplazamiento forzado intraurbano, a la vez que permaneció en la ciudad la práctica de la extorsión con mucho más alcance territorial. De la misma manera, la violencia política permaneció bajo prácticas más selectivas y menos ruidosas como amenazas, señalamientos, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos de líderes representativos por fuera de sus territorios en hechos asociadas a la criminalidad común, pero *“muchos homicidios cometidos por bandas son realmente homicidios políticos por la articulación que tienen en su mayoría con grupos paramilitares”* (Moreno, 2003, pág. 230).

La Personería de Medellín informó a tan solo un año de terminarse la desmovilización paramilitar, que había recibido una cantidad considerable de denuncias sobre hechos victimizantes por parte de integrantes de grupos desmovilizados.

Nuestra oficina ha seguido recibiendo denuncias sobre prácticas criminales por parte de integrantes de grupos desmovilizados golpizas (las denominadas ‘pelas’), desplazamiento forzado intraurbano, la violación sexual de mujeres, en especial niñas

en los sectores de Santo Domingo Savio, Llanaditas (comuna 8) y el Corregimiento de Altavista, y todo tipo de actos de intimidación en ejercicio de su poder despótico e ilegal (Personería de Medellín , 2006, pág. 12).

Lo que demuestra la reincidencia y control territorial de los grupos desmovilizados en los barrios, enfrentándonos a un nuevo escenario de violencia armada en la ciudad, pues la guerra se ordenó tranzando entre Fuerza Pública y paramilitares en un terreno en el que el enemigo común había sido aniquilado. La pacificación de comunas como la 13 se tradujo entonces en la disminución de la confrontación armada abierta e indiscriminada, por tanto, en la reducción de homicidios, resultado de la derrota de las milicias y con ello el dominio de los grupos paramilitares en los barrios.

Sin embargo, producto del desbalance de las operaciones militares y el amorfo proceso de desmovilización de los paramilitares, la violencia asumió otras dimensiones y unos flujos de compleja aprehensión en una ciudad como Medellín, que continuamente reciclaba expresiones violentas, donde la inequidad social continuaba siendo una problemática histórica sin resolver, donde los sectores populares seguían concentrando la pobreza y los hechos violentos.

De esta manera pulularon desde entonces en la ciudad bandas y combos señalados de ejercer actos de intimidación contra la población y establecer un orden ilegal para el control territorial, el cual trastocó los procesos de la vida cotidiana de quienes habitan los barrios de su dominio armado. Continuaron las alianzas con grupos paramilitares de mayor poderío y se sostuvo el narcotráfico como fuente principal para el financiamiento de la violencia armada.

Así, el desarrollo urbano de Medellín nos indica que la ciudad y su crecimiento han estado atravesados por una serie de problemáticas sociales, económicas y políticas que dieron origen a múltiples y cruzadas violencias, asociadas en gran medida a la desmesurada desigualdad que sumió a Medellín en agudos contrastes socioeconómicos, que al no darles un tratamiento efectivo, extendieron cada vez más la brecha social, sentenciando por años a los habitantes de los barrios populares de incubar las manifestaciones de violencia que se esparcieron a toda la ciudad.

Bajo el dominio paramilitar y en el complejo entramado de la sentencia histórica del pobre como violento en la ciudad, surgieron nuevos discursos y prácticas estatales como el Urbanismo Social, que apuntaron a una nueva incidencia en los barrios marginados de Medellín, mismos escenarios donde no sólo las condiciones precarias se han agrupado, sino también los distintos actores armados y las acciones violentas que estos han llevado a cabo.

Referentes teóricos para el análisis crítico del urbanismo social y la violencia urbana en Medellín

En Medellín, la violencia urbana y el Urbanismo Social son dos expresiones únicas, con un desarrollo local y características puntuales que sólo son comprensibles en la inserción de procesos de larga duración o desde un ámbito empírico. Sin embargo, hay elementos teóricos que ayudan a desentrañar las conexiones sociales, económicas y políticas de alcance global que hay dentro de la práctica de uno y otro y a la vez sirven para el análisis crítico de las posibles relaciones o incidencias entre urbanismo social y violencia urbana, con los puntos de encuentro, contradicciones y efectos que surjan en ese relacionamiento.

Tanto el urbanismo como la violencia son dos conceptos de difícil aprehensión por las distintas interpretaciones que se han hecho de ambos. Sin embargo, la precisión del análisis en el escenario local exige excluir las definiciones que desborden los objetivos del trabajo y retomar aquellas que le den soporte y coherencia a la hipótesis inicial del mismo.

Por un lado, Florencio Zoido (2007, pág. 20) plantea que el ordenamiento del territorio contiene al urbanismo y que la práctica de este último desde su concepción tradicional, ha estado dedicada históricamente a inducir o controlar los procesos de construcción y urbanización, dotándolo de un carácter meramente técnico.

Esa manera de comprender al urbanismo concibe la espacialidad como inanimada y aislada de los procesos sociales, *“privilegiando una territorialidad zonal, definida por límites, en cuyo seno se ejerce un tipo de poderes -económico, político y técnico-“* (Madoery, 1999, pág. 8); así mismo, esa comprensión deja al margen a los territorios apropiados y habitados por las clases sociales más empobrecidas, evidenciando la influencia de las clases sociales dominantes y otros actores de poder en la configuración y distribución espacial de la ciudad, lo que contradice el purismo técnico atribuido a las prácticas urbanísticas.

La estrechez en la concepción y prácticas del urbanismo obligó a que en el ambiente de globalización de los años 80 se replanteara en algunos escenarios locales, pues más allá de ser una herramienta de la planeación que se materializa en el espacio y que hace tangible la presencia institucional del Estado, requiere incorporar elementos integrales que contemplen lo social y aspectos prioritarios relacionados con el cómo viven y se relacionan las comunidades en los territorios, para insertarlos en los flujos económicos del nuevo desarrollo urbano y en las asociaciones del sector público-privado que florecen con este modelo económico.

Ahora bien, las transformaciones en el urbanismo que trajo la apertura económica y los procesos de globalización son producto de la decadencia del modelo económico basado en la producción industrial, estrechamente relacionado con el crecimiento vertiginoso de la población y la extensión de las ciudades dentro del desarrollo urbano.

En ese sentido, el urbanismo abordado desde una visión crítica marxista, adoptada por la geografía radical, considera que las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente de capital y que por tanto, en el desarrollo urbano de las ciudades, el urbanismo se presenta como un instrumento de planeación hegemónico con una ideología que oculta una estrategia de la clase dominante capitalista, la cual presenta sus intereses como los de toda la sociedad (Fernández & García, 2014, pág. 1):

El capitalismo descansa, como nos explicaba Marx, sobre la búsqueda perpetua de plusvalor (beneficio), cuyo logro exige a los capitalistas producir un excedente, lo que significa que el capitalismo produce continuamente el excedente requerido por la urbanización. Pero también se cumple la relación inversa: el capitalismo necesita la urbanización para absorber el sobreproducto que genera continuamente. De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización.
(Harvey, 2012, pág. 22).

Por su parte, Lefebvre refuerza la idea de que el urbanismo no es sólo una práctica dotada de técnica, sino que también lo está de ideología, especialmente cuando dice estar absuelto de ella. “Declarar que la ciudad se define como red de circulación y comunicación, como centro de informaciones y decisiones, es una ideología absoluta; esta ideología procedente

de una reducción-extrapolación particularmente arbitraria y peligrosa se presenta como verdad total y dogma” (Lefebvre, 1978, pág. 69)

Al entender que es una práctica humana, este autor establece que hay distintas tendencias asociadas a la operatividad del urbanismo, así: El urbanismo de los hombres de buena voluntad, ligado a un humanismo clásico y liberal; el urbanismo de los administradores vinculados al sector público, en el que hay una creencia de cientificidad que descuida el factor humano; y por último, el urbanismo de los promotores que conciben y realizan para el mercado, venden urbanismo, convirtiéndolo así en valor de cambio.

Estas tendencias se cruzan y perfilan un urbanismo global de carácter totalizante, que declara a la ciudad como centro de información y decisión, construyendo de ese modo una ideología absoluta sobre la realidad urbana, neutralizando a los territorios que están por fuera de la idea totalizante de la ciudad, presentando las formas espaciales como inanimadas, valiéndose de la *“tesis dicotómica del espacio”* que lo concibe como algo aislado de la economía y la política (Echeverría & Rincón, 2000, pág. 14).

Dicha ideología se compone por un aspecto mental -que implica una teoría de la racionalidad y la organización- y por un aspecto social -en el que prima la noción de espacio-, olvidándose del tiempo y el devenir: *“El urbanismo como ideología formula todos los problemas de la sociedad en cuestiones de espacio y transpone en términos espaciales todo lo que viene de la historia, de la conciencia”* (Lefebvre, 1978, pág. 61), omitiendo los antagonismos y los contrastes presentes en la realidad urbana.

De este modo, el urbanismo se convierte en una doctrina *“en cuanto interpreta los conocimientos parciales, y justifica las aplicaciones, elevándolas (por extrapolación) a una totalidad mal fundada o mal legitimada”* (Lefebvre, El derecho a la ciudad , 1978, pág. 59), logrando ajustarse a las variaciones de territorios geográfica y socialmente disimiles, hasta fundirlos en una totalidad.

Es así como esta visión crítica el urbanismo considera que en la ciudad antigua y su realidad urbana, es decir, sus prácticas como sociedad urbana, revelaban un valor de uso en su configuración inicial, pues los procesos de creación resultaban siendo obra más que producto, asimismo las relaciones que rodeaban la hechura de la obra. La ciudad es en sí

misma una obra forjada a pesar de los violentos enfrentamientos y la opresión de unos pueblos, unas clases o unos actores de poder sobre otros, pues las construcciones urbanas son hechas para la habitabilidad y el desarrollo de la vida diaria, no para ser convertidas en mercancía.

Sin embargo, la ciudad ya sostiene una orientación hacia al dinero, el comercio y el cambio en la ciudad medieval, pero es a partir de los procesos de industrialización donde el valor de uso de la ciudad se convierte en valor de cambio, creando una generalización de la mercancía en el que tanto ciudad como realidad urbana se subordinan a ella (Lefebvre, 1978, pág. 20).

Se pasa de la opresión a la explotación como sistema económico, es decir, la dominación de una clase sobre otra pasa a centrarse en la obtención de ganancias por medio de la producción acelerada para la concentración de la riqueza. De esta forma se crean grandes concentraciones urbanas en torno a la industria y su producción en masa, es en la ciudad donde se agrupan los medios de producción, rompiendo con las viejas formas de relacionamiento urbano.

La industrialización se da de la mano de un crecimiento urbano vertiginoso, con una fragmentación espacial cada vez mayor que dividió a la ciudad según la producción social del trabajo, lo que significó un choque violento entre ambos desarrollos históricos atravesados por la dominación, generando así un relacionamiento dialéctico permanente.

Ahora, cuando los antagonismos entre clases se agudizaron con el modelo de producción económico industrial y las prácticas aceleradas de explotación se desbordaron, el modelo entró en crisis y en los países capitalistas se abrió paso el libre mercado, generando una reinención del capitalismo, pues este ya no sólo fijó y concentró la riqueza en espacios determinados, sino que comenzó a movilizarla, generando transmisiones y flujos de dinero que no requieren un respaldo material, amoldando así un capitalismo comercial y bancario dependiente de la especulación inmobiliaria, que se concretó con fuerza a finales de los 80 en los países donde el capitalismo estaba consolidado.

Pese a la crisis industrial, el mercado especulativo no dejó completamente de lado los procesos de industrialización, pues el objetivo era que una modalidad del capital acelerare

cuando la otra se retarda. Aun así, la descentralización de la industria que iniciaba en los años 70 en los países de capitalismo avanzado, generó el traslado de aquella a las áreas rurales cercanas a la ciudad (Zárate & Rubio, 2010, pág. 83). Esta descentralización industrial, se consolidó en la década siguiente, plantando en el centro de las ciudades a las entidades financieras y bancarias, a la vez que se posicionó un comercio basado en la innovación, la información, la tecnología y el ocio.

Ese capitalismo financiero y bancario, constituyó un modelo urbano basado en la oferta y la demanda de bienes y servicios sustentado en la especulación del suelo, transformando así los núcleos urbanos, especialmente aquellos antiguos o desgastados, en productos de consumo de alta calidad para extranjeros, turistas y propios con capacidad de gasto. El núcleo sobrevivió convirtiéndose en lugar de consumo y consumo de lugar (Lefebvre, 1978, pág. 27) adquiriendo un valor de cambio sin perder su valor de uso.

La ciudad se produce y reproduce como mercancía, ya no fue solo para habitarla y producir en ella, sino que pasó a ser en sí misma un producto que se vende. El Estado asumió un comportamiento empresarial en los países capitalistas consolidados, cimentado esencialmente en el mercado especulativo de acumulación de riqueza flexible (Lungo, 2005, pág. 49). Así, la urbanización se ocupa del uso y la apropiación de espacios para la producción de capital.

Este modelo de urbanización es un producto de la convergencia de intereses característicos del actual capitalismo globalizado: capital financiero volante y perseguidor de un lucro cortoplacista articulado con el sistema financiero local, legislación favorable a la urbanización difusa y al boom inmobiliario y propiedad privada del suelo con apropiación por parte de los agentes privados de las plusvalías resultantes del proceso especulativo (Borja, 2011, pág. 40)

Esta visión de ciudad intensifica la centralidad del poder, allí donde se concentran la formación y la información, las instituciones económicas y políticas y las decisiones que nacen en ellas, lo que contrasta agudamente con una periferia al margen de esos procesos. Todas estas convulsiones y dinámicas que atraviesan al escenario urbano están mediadas por la acción voluntaria de clases cuyos intereses y necesidades chocan constantemente.

No obstante, este desarrollo económico y urbano tuvo su propia experiencia en las ciudades latinoamericanas, en donde el proceso de industrialización fue más lento e incipiente que en los países de capitalismo avanzado, igualmente su desmonte, y con ello, el paso a la apertura económica impulsada por los procesos de globalización.

Además, los masivos flujos del campo a la ciudad en Latinoamérica no solo estuvieron asociados a los procesos educativos, comerciales e industriales que se instalaron en la urbe, sino que también estuvieron atravesados por hechos violentos asociados al despojo histórico de campesinos de sus tierras, que como en el caso colombiano, dio paso a un conflicto armado de larga duración.

Podemos decir entonces que el surgimiento de las ciudades colombianas también se ha dado por una concentración social y geográfica del excedente de capital planteado por la geografía radical, donde la concentración de riqueza ha sido permanente, excesiva y exclusiva de algunos grupos sociales, políticos y/o económicos, profundizando la desigualdad e inequidad en el campo y que en los masivos desplazamientos asociados al empobrecimiento rural y al conflicto armado, engrosó los cinturones de miseria de las ciudades.

Las precarias condiciones, la informalidad de los nuevos barrios que en su mayoría estaban conformados por desplazados, el rechazo institucional y social hacia ellos, hicieron que los procesos de configuración de las ciudades hayan estado mediados fuertemente por hechos violentos (Moreno, 2003, pág. 202), desde las marcas del conflicto armado hasta los atropellos a la nueva configuración urbana que sugerían las barriadas populares con la autoconstrucción e informalidad. Así, la violencia se reinventó con el paso del tiempo por las conmociones y disputas propias del escenario urbano como centralidad del desarrollo.

En todo este entramado, Medellín representa un caso icónico en cuanto a la recepción de desplazados, la formación de barrios populares, la reinención de la violencia y la centralidad económica, pues si bien los procesos de industrialización fueron tardíos y menos desarrollados que en países con un capitalismo avanzado, la crisis del modelo industrial y la apertura económica la impactó de manera directa en los años 80.

Cuando Medellín dejó de ser centro de desarrollo industrial textil por la crisis dada en los ochenta, su orientación económica inició una transformación, que a finales de los noventa generó un tránsito hacia un capitalismo financiero y bancario en el que trasladó la base de su economía hacia la prestación de bienes y servicios, dirigida a *“la generación de conocimiento apalancado en la innovación y la tecnología en sectores económicos en los cuales la ciudad tiene un importante potencial productivo, tales como los sectores de energía, construcción, turismo, telecomunicaciones y, lógicamente, el textil”* (Sánchez, 2012, pág. 188).

Este nuevo *cluster* económico en Medellín, coincidió con la reinención capitalista que apuntó a un mercado especulativo, en el que la espacialidad de la ciudad es en sí misma el centro de la especulación, con la particularidad local de un panorama en el que ocurrían y confluían múltiples facetas de la violencia urbana, las cuales impedían la aplicación de grandes proyectos de ciudad que ayudaran a la consolidación de una imagen totalitaria de la vida urbana, promovida por el fenómeno de la globalización y el neoliberalismo.

El neoliberalismo también ha creado nuevos sistemas de governance que integran los intereses del Estado y de las empresas, y que, mediante el uso del poder del dinero, han asegurado que la utilización del excedente a través de la Administración Pública favorezca al capital corporativo y a las clases dominantes a la hora de conformar el proceso urbano. (Harvey, 2008, pág. 36)

La adopción de esta nueva estrategia mercantil y su incidencia desde los procesos urbanísticos globales sobre el plano local, logró consolidar su aplicación luego de la desmovilización paramilitar en la ciudad dada a inicios del nuevo siglo, lo cual encajó con la necesidad estatal de invertir en territorios históricamente marginados para la renovación de espacios que posicionaran a Medellín, ya no como una ciudad violenta e insegura, sino como una innovadora, donde los procesos de transformación urbana logran cambiar la vida de sus habitantes.

Esto hizo que a través de los planteamientos del *marketing urbano*, el modelo de urbanismo en Medellín se nombrara como Urbanismo Social, con el fin de atribuirle, desde la concepción de sus promotores, una condición más integral, propia del ordenamiento del

territorio, con elementos que conectaran lo social, lo institucional y lo físico y con una visión multidisciplinar en todas sus fases.

Con el marketing urbano se pretende diseñar y proyectar una imagen de la ciudad y sus atributos, teniendo siempre presente las necesidades, expectativas e intereses de los potenciales compradores. [...] Las ciudades, al competir por atraer inversiones, visitantes y turistas, han pasado a convertirse en una mercancía, un producto que debe ser vendido en aquellos mercados en los cuales tiene opciones, es decir, en donde puede ofrecer ventajas comparativas, en términos de infraestructuras, de telecomunicaciones, de costos de instalación, atractivos turísticos o de oferta cultural y de entretenimiento. La existencia de cualidades de este tipo o las posibilidades de desarrollarlas y potenciarlas determinan el mercado en el cual pueden ser vendidas las ciudades. (Duque, 2011, págs. 30-31).

La composición de una imagen que integrara factores antes separados y opuestos, en esta renovada forma de definir y aplicar el urbanismo en una lógica global, comenzó a asumirse también como un instrumento de pacificación en los barrios populares de Medellín (Velásquez, 2011, pág. 75) caracterizados por presentar altos índices de violencia. Sin embargo, por medio del marketing urbano se elabora una idea de la ciudad que solo considera aspectos positivos y atractivos para inversionistas, visitantes y nuevos habitantes, ocultando aspectos negativos que contradicen esa hiper-realidad creada, es decir:

“la construcción de la idea de una acción, más que la acción misma en la realidad vivida. La elaboración de un montaje, cuidado y supervisado al detalle, con el fin de ser agradable a los sentidos sin esto significar que deja de ser ficticio [...] en satisfacción de las demandas neoliberales de competencia, eficacia y eficiencia en el mercado” (Sierra, 2016, pág. 128).

Así, el Estado asociado con el sector privado distribuyó y renovó el espacio según las exigencias del sistema capitalista financiero. Valiéndose de valores democráticos en el escenario público como la convivencia y la participación, abarcaron territorios donde en el pasado su intervención fue escasa y donde fueron los actores ilegales quienes de forma dominante ejercieron el control socio-espacial.

Suponemos entonces que pese a que el Urbanismo Social interviene las comunas de Medellín donde la desigualdad es más profunda, la dualidad que éstas y el centro representan es sistémica y estructural, lo que hace que se sostenga la configuración centro-periferia dentro de un modelo tendiente a la concentración del poder económico y político que se revela como *“un fenómeno de explotación, despojo, desigualdad, exclusión y discriminación cuyas dimensiones espaciales son claramente visibles: ciudades duales, de lujo y miseria, vecinas y amuralladas, miles de inmuebles vacíos y miles de personas sin un lugar decente donde vivir”* (Zárate L. , El derecho a la ciudad: luchas urbanas por el buen vivir, 2014, pág. 6).

Esta forma de producirse la ciudad ha instrumentalizado al urbanismo, estableciendo intervenciones a gran escala que incluye a los barrios marginales y espacios olvidados. De esa manera, se crean nuevas redes institucionales, se generan más empleos rápidos de mano de obra barata, en donde se brinda una ilusión de inclusión que influyen en el tipo de vida y actividades de la cotidianidad asociadas al consumo de bienes y servicios.

La intervención urbana se circunscribe entonces a un urbanismo global que moldea ciudades para y por el capital, desviando el foco de las desigualdades e inequidades que allí persisten. Este nuevo artificio sobre la realidad urbana surge de la constante necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital, lo que supone inevitablemente la desposesión y el desplazamiento de población para la acumulación (Harvey, 2012, pág. 39) Por tanto, derechos como la vivienda, que implican la ocupación de suelo, se asumen como mercancía en donde la posibilidad de adquisición de un techo digno se basa en un impulso individual que no supera el ámbito de lo privado.

En ese sentido, los planteamientos esbozados con anterioridad nos llevan a considerar que las formas espaciales no se limitan a una dimensión física, pues estas contienen procesos sociales y de la misma manera, los procesos sociales resultan ser espaciales (Harvey, 1977, pág. 3) Allí se establecen relaciones, transferencias, dominios, sublevaciones, rupturas y continuidades, se trata de una composición dinámica en todas sus formas.

Bajo ese planteamiento podemos señalar una primera relación entre la violencia urbana y el Urbanismo Social en Medellín, pues nos encontramos frente a una ciudad en la que de

manera prolongada, los procesos sociales han estado marcados de una u otra forma por una violencia presentada en múltiples formas, dimensiones y ritmos, todas contenidas en el espacio social. Lo que nos lleva a acoger el concepto de urbanismo relacional propuesto por Harvey, esto es, que si el urbanismo interviene en el espacio, influye también en las relaciones sociales y viceversa, es una influencia que produce una retroalimentación fluctuante. (1977, pág. 9)

Es así como los proyectos urbanísticos van a dirigirse a la absorción del excedente, haciendo más visible un desarrollo geográfico desigual, generando una suerte de diferenciación positiva en los territorios históricamente marginados. Con todo, la ciudad se concreta como un lugar de privación, pues el espacio se reproduce mediado por la propiedad privada y la concentración de capital, las cuales se apropian del uso del suelo urbano (Alessandri, 2014, pág. 2), haciendo que se rijan por una lógica de rentabilidad, lo que genera el cambio y expulsión de población, la segregación por zonas que excluye a unos de las dinámicas formales y refuerza la idea de seguridad en otros que se aíslan de los excluidos por ser portadores del peligro (Carrasco, 2005, pág. 7) o por su condición de empobrecimiento.

Tendiendo puentes

Ahora, si bien se ha dado relevancia a los enfoques estructuralistas, que contemplan determinantes históricas, políticas y económicas, ello no implica dejar de lado enfoques culturales que reconocen procesos cotidianos y de identidad territorial, pues se entiende que estos coexisten: *“la acumulación capitalista organizada espacialmente a escala mundial tiende a penetrar y transformar los ámbitos territoriales, locales de vida y la reproducción social”* (Echeverría & Rincón, 2000, pág. 14). Esa reproducción social en Medellín ha tenido un vínculo fuerte con la violencia, por tanto, en este caso la reproducción capitalista del espacio se enfoca en territorios donde la violencia se ha concentrado y que a la vez resultan claves para la consolidación del modelo de transformación urbana implantado en la ciudad.

El territorio, en este caso encarnado en las comunas, nos presenta el ámbito de lo concreto en la lectura estructural y nos desafía a entender la conexión *“entre la lógica espacial de*

los intereses y las fuerzas económicas globales y la lógica territorial de los grupos regionales, las identidades e identificaciones culturales y los procesos sociales” (Echeverría & Rincón, 2000, pág. 14). Y puesto que el urbanismo global amplió la escala de intervención entendiendo a la ciudad como un todo que se conecta a través de enclaves, ello implicó un conocimiento más detallado sobre territorios específicos, de manera especial en Medellín, sobre aquellos en los que históricamente la inversión del Estado fue deficiente en materia social.

Así la relación entre urbanismo y violencia urbana, parece mostrarse con más precisión cuando se parte de una mirada territorial. Según Echavarría y Rincón (2000, pág. 13) *“Los conflictos, poderes, subversiones y resistencias entran a ser propios de toda construcción territorial”*, por tanto, territorio y conflicto social no son cuestiones separadas, el conflicto social se encarna siempre en el territorio (Zibechi, 2008, pág. 82)

En ese sentido podemos decir que *“el conflicto por el espacio tiene una historia propia en la ciudad de Medellín”* (Moreno, 2003, pág. 218), de hecho, esta conflictividad ha sido el centro tanto de su expansión urbana como de su configuración de ciudad dual con las distintas antinomias que surgen de esa división: Legal- ilegal, formal-informal, rica- pobre.

La cuestión está en que esos conflictos que se han dado por el espacio (social) y por el territorio han estado signados por la violencia, tanto en los años 60, cuando se incrementa la llegada de los “otros” a la ciudad y se dan las primeras respuestas institucionales, en los 80 con la influencia miliciana, a finales de los 90 con la arremetida paramilitar, la extensión y crecimiento en el tiempo de la presencia de bandas y combos, aún en el marco del Urbanismo Social.

En medio de esos hitos históricos que han tenido lugar en la ciudad, se erigen abordajes conceptuales sobre los fenómenos de violencia dados a lo largo del tiempo. Elsa Blair cuestiona la tesis que plantea lo que varios académicos han llamado “urbanización de la guerra”, pues según ella, más que una guerra urbana local, con manifestaciones del conflicto armado nacional, hay que tener en cuenta que *“Medellín ha vivido insertada en una multiplicidad de conflictos que se articulan de maneras específicas y que involucran aspectos bastante más subjetivos, presentes en dinámicas barriales pre- existentes a la*

«guerra», que justo por eso preferimos llamar *conflictividades urbanas*” (Blair, 2009, pág. 30)

Si bien son ciertos los conflictos pre-existentes, podemos disentir de la posición de Blair si asumimos que la guerra es una *“forma de conflicto intenso y extenso que enfrenta a bandos organizados que se perciben como enemigos y que tiene en el centro de sus motivaciones por lo menos formalmente, aunque no necesaria ni exclusivamente el orden político”* (Vélez, 2001, pág. 63), caracterización que no había estado presente en los conflictos que antecedieron al enfrentamiento armado entre paramilitares y guerrilla.

Podemos hablar entonces de guerra urbana en Medellín, en la que se enfrentaron paramilitares y Ejército regular contra las guerrillas, todos, actores del conflicto armado nacional que combatieron con intensidad en territorios específicos de la ciudad desplegando todo un repertorio de violencia para ejercer control y dominio; composición bélica sin antecedentes en un escenario urbano, en el que, efectivamente se cruzan otros conflictos que ya pre-existían, pero donde es necesario hacer hincapié en la distinción temporal y los comportamientos belicosos de la violencia en ese momento por las profundas implicaciones de su desarrollo.

La agudización de ese conflicto armado y su carácter beligerante culminan con la derrota de las milicias y la desmovilización paramilitar, es así como después de ese proceso la confrontación armada y los hechos violentos asociados a ella, van a entenderse como violencia urbana. En cuanto a esa violencia se ha precisado que es más social que política, que debido a los escenarios cambiantes en el que convergen distintas conflictividades, esta violencia se torna difusa (Restrepo, Pérez, & Vélez, 2012)

Ello es notorio en que si bien la violencia homicida se redujo notablemente luego de la desmovilización paramilitar, otras manifestaciones de la criminalidad se dispararon y con ella la captación de nuevas rentas ilegales (Giraldo, 2014, págs. 23, 24) convergiendo prácticas victimizantes como la desaparición y el desplazamiento forzado, en un escenario donde no terminaron las amenazas e intimidaciones en los barrios ni tampoco los brotes de violencia política, lo que revela que el resultado de las operaciones militares y la desmovilización paramilitar no fue homogéneo.

Asimismo, autores como Jorge Giraldo hablan de “violencias”, planteando que en la ciudad de Medellín hay una confluencia de expresiones del conflicto armado con expresiones violentas de la criminalidad organizada, sumado a manifestaciones típicas de una violencia difusa y a los excesos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades legales (2008, pág. 100). Así, las distintas apreciaciones encontradas sobre la violencia urbana en Medellín apuntan a que en ella pueden confluir (o no, según el caso) distintos tipos de violencia que actúan conjuntamente o por separado, que se articulan con el territorio y con la idea de orden de los distintos actores que intervienen en él, particularmente de aquellos que logran imponerse.

De esta manera, a la entropía social manifiesta en la configuración espacial, se adhirió la presencia predominante del orden ilegal junto a la endeble –aunque renovada- presencia institucional. Condición histórica en la mayoría de los barrios populares de Medellín que no fueron planeados por la Administración Municipal, donde el desorden que insinúa su configuración espacial indica una idea de orden social, dada a partir de las necesidades de quienes llegaban a ocupar de manera informal, hasta convertirse en grandes barriadas, como ocurrió en la Zona Nororiental o en la Comuna 13.

Es en esos barrios en los que a partir de 2004, con el Urbanismo Social, entró a mezclarse una nueva forma de orden sobre el territorio popular y el reducido espacio público existente allí, pues debido a que este es un “*elemento inmanente de toda morfología urbana*” (Delgado & Malet, El espacio público como ideología, 2007, pág. 1), donde se han cruzado múltiples violencias y donde se devela el accionar de los actores armados, se convirtió en el objeto de la nueva intervención urbanística, acompañada de un discurso “ciudadanista”, que atribuye al espacio público un efecto de igualdad, pacificación y neutralidad.

Sin embargo, esta nueva forma de intervención y ordenamiento estatal, necesariamente dio paso a nuevas interacciones con la violencia armada que permaneció en los lugares objeto de su intervención, pues estos también han centrado su gestión y prácticas de control en el espacio público, al que por tanto, adjudicamos un carácter social y político por ser el escenario en el que se manifiesta de forma más poderosa la contradicción.

Allí se instalaron entonces unos órdenes alternos dominados por las denominadas bandas y combos, que se contrapusieron ante las Instituciones del Estado a la imagen y a la idea de otro oficial-legal. En esa medida, no existe un “*poder exclusivo, inclusivo y universal*” (Vélez & Alonso, 1998, pág. 50) en la ciudad y sus barrios, pues los distintos órdenes coexisten en los territorios con funciones e influencias diferenciadas.

Ocurre entonces que la diferenciación que genera la contraposición al ideal de Estado basada en la existencia de un orden alterno, termina por encontrarse en el sentido de ordenación que se le quiere dar al territorio, pues la disposición de ordenar está atravesada por los objetivos que busca ese orden, los valores atribuidos a determinada forma de poner orden y las características físicas y sociales del espacio a ordenar, elementos que pueden potenciar, condicionar o limitar el ordenamiento deseado (Zoido, 2007, pág. 21).

En ese sentido, si desde el ideal de Estado se presenta una contradicción, en la práctica la composición y orientación del nuevo actor violento dominante en la escena, permite que se fundan las distintas formas de ordenar, que logren conectarse y que resulten complementarias en la consecución de un territorio funcional a los diversos intereses que se tienen sobre el mismo.

Intentando desanudar

Entendemos entonces que toda configuración territorial está atravesada por conflictividades, que se dan en y por el espacio y que sus distintas expresiones pueden ocurrir de manera simultánea. Esas convulsiones territoriales en los barrios populares de Medellín han estado mediadas por una violencia que sólo es posible comprender siguiendo procesos de larga duración y que en los últimos años nos enfrentan a una violencia armada difusa, donde las prácticas paramilitares se entrecruzaron con prácticas criminales.

Por otro lado, el paso de guerra urbana a violencia urbana que resulta de las operaciones militares y la consolidación de un actor armado paramilitar, que posteriormente inicia un proceso de desmovilización de conocida irregularidad, coincide con la ejecución de nuevos procesos de renovación urbana en la ciudad, inscritos en una lógica global de urbanismo mercantil que incide en territorios antes olvidados donde tanto la pobreza como la violencia presentan altos niveles.

Sin embargo, el Urbanismo Social es presentado como una posibilidad de atenuar las contradicciones latentes en esos territorios, pero según los presupuestos teóricos expuestos, su intervención apunta a una agudización de la contradicción, sosteniendo una ciudad desigual e inequitativa, pues entendemos que es una estrategia de clase donde el desarrollo urbano sigue estando signado por los flujos del mercado (Fernández & García, 2014, pág. 2). De esta manera el Estado interviene en el espacio social donde las asimetrías sociales propias de la violencia estructural y sistémica siguen siendo manifiestas, coexistiendo en los barrios bajo distintas lógicas de orden impuestas por los actores armados ilegales.

En ese sentido, nos enfocaremos en desentramar las relaciones existentes entre la violencia urbana y el Urbanismo Social en el territorio de la comuna 13, con las complejidades, fragmentaciones, relaciones, sentidos y órdenes que las componen. Esto, bajo el supuesto de una ciudad producida por y para el capital, intentando, a través de una postura crítica de la visión hegemónica de la vida urbana que subsume las contradicciones, evidenciar que en los barrios de Medellín aún persisten realidades agudas que discrepan con tal visión, sostenida y reforzada por los discursos institucionales desde la última década.

CAPÍTULO II

La voz institucional del Urbanismo social en Medellín

En Medellín, una serie de tres hechos serían de gran relevancia para la ciudad: La desmovilización paramilitar del Bloque Cacique Nutibara en el año 2003, el inicio de un nuevo modelo de intervención urbana desde el 2004 y la desmovilización del bloque Héroes de Granada en el 2005. Sucedió entonces un cierre de la aguda confrontación bélica, cambiaron las manifestaciones de la violencia, hubo variados reacomodos del accionar criminal y paramilitar en la ciudad, a la vez que se abrió paso a una nueva forma de intervención del Estado en territorios históricamente marginados.

La idea de crear un Urbanismo Social en Medellín surge de investigaciones que se adelantaban en la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EAFIT, encabezadas por el arquitecto Alejandro Echeverri, en búsqueda de alternativas de consolidación asociadas a la movilidad en la ciudad. Ese impulso académico quiso generar una idea de urbanismo mucho más integral, en la que el componente social tuviera un papel

protagónico en territorios marginales y donde su intervención no estuviera limitada únicamente a la construcción del metrocable.

El enfoque urbanístico de este nuevo modelo de intervención estaba orientado principalmente a las particularidades y exigencias de la realidad local (Martin, 2012, pág. 471) en donde lo social se asumió como parte fundamental de la práctica urbanística. El arquitecto Oscar Santana, quien hizo parte de este proyecto, así lo asegura:

¿Por qué lo social? Todo urbanismo es social, hay que entender eso. Yo pienso que hablar de urbanismo social es casi como hacer redundante intencionalmente un componente que por lo general se olvida. El urbanismo es medioambiental; el urbanismo es técnico, tiene muchas profesiones técnicas asociadas, pero nunca el componente social había sido atendido como se atendió en este proyecto. Entonces yo creo que se saca un poco de las dimensiones de lo que es el urbanismo y se deja explícito en el título [...] Entonces yo creo que es una redundancia explícita que se hace intencional en un componente que por lo general había sido olvidado en el urbanismo y que siempre había sido diseñado en el escritorio. Pasamos un poco del escritorio al territorio (Entrevista arquitecto PUI, Medellín, 2017).

Este giro en la forma de intervenir espacial, física y socialmente los territorios tuvo influencia de otras experiencias nacionales e internacionales, como la intervención de barrios marginales en Barcelona, el programa *Favela-Bairro* en Rio de Janeiro y para el caso local, el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales de Medellín-PRIMED-¹. No obstante, se buscó superar la reducida escala de intervención de este último, la cual no pasaba de cuadras o manzanas, para así lograr generar un impacto mucho más amplio, abarcando barrios y comunas enteras.

Si bien se contaba en la ciudad con un acumulado de intentos de intervención no sólo físico-espaciales, sino también sociales, el concepto de “lo social” en el urbanismo no estaba incluido inicialmente en el Plan de Desarrollo 2004-2007 “Medellín, compromiso de toda la ciudadanía”. Este se incluyó a medida que comenzó a tomar fuerza como elemento aglutinador de esas acciones pasadas y futuras, por lo que se enlazó con los objetivos de la

¹ El cual, sentó en dos sentidos las bases de los proyectos que vendrían con el Urbanismo Social: la recuperación de confianza de la comunidad en el Estado y la intervención integral en territorios informales.

línea 2, “Medellín social e incluyente”, contenida en ese Plan de Desarrollo, que estaba centrada principalmente en la inversión de los sectores de menor desarrollo de la ciudad, los mismos a los que apuntaría la intervención del Urbanismo Social.

Es así como el Urbanismo Social se centró en promover el desarrollo humano integral para los habitantes de Medellín, “*lo cual significa impactar problemas como la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia, la falta de crecimiento económico y la baja gobernabilidad democrática a través de proyectos y programas interinstitucionales localizados en las zonas más marginales de la ciudad*” (Alcaldía de Medellín, 2012-2015, pág. 44)

De esta manera, se admitió por primera vez la ausencia del componente social en el urbanismo, una disciplina ligada por muchos años a intereses económicos de grupos minoritarios que terminaron por concentrar el desarrollo desde el centro hacia el sur de la ciudad y cargaron de pobreza a la zona norte y barrios populares periféricos², contribuyendo a la intensificación de los conflictos en estos territorios.

El Urbanismo concebido y practicado de esta manera, ha contribuido a agudizar los conflictos y las tensiones sociales, debido al aumento de la marginalidad de amplios sectores de población urbana. El apelativo ‘social’ quiere introducir el retorno del urbanismo a su esencia: el urbanismo como instrumento de inclusión espacial y construcción de equidad en el acceso a las posibilidades que ofrece la ciudad para el desarrollo humano. De esta manera, el urbanismo social es en largo plazo, un agente contributivo de la paz y la prosperidad de los grupos humanos que habitan la ciudad, particularmente de los sectores sociales tradicionalmente marginados (Alcaldía de Medellín, 2012-2015, pág. 45).

En ese sentido se reconoce a la desigualdad social como una de las causas estructurales de la violencia, el subdesarrollo y la pobreza, lo que posicionó al Urbanismo Social como un

² Cuando se habla de barrio periférico, se hace desde los planteamientos de la teoría centro-periferia, donde la periferia no es un concepto que se reduce a lo físico-espacial, sino que también considera lo cultural, lo económico, lo social, lo estético y lo político. Territorios que se encuentran al margen y que se presentan como la contradicción de la concentración de poder que ocurre en el centro. Por ejemplo, en el caso de Medellín, barrios como La Iguañá, Moravia y La Trinidad (Barrio Antioquia) son periferias céntricas, pues aunque no se encuentran ubicados en la periferia, son barrios con múltiples problemáticas sociales, que han sido excluidos de diversas dinámicas de progreso y desarrollo en la ciudad.

medio para combatir esas problemáticas sociales, ya que se pensó que generando una inversión en infraestructura, planes sociales y articulación interinstitucional de manera simultánea en territorios antes excluidos, existía la posibilidad de generar mayores oportunidades para sus habitantes, reflejadas en una mayor equidad e inclusión, lo que a su vez, podía crear un impacto que disminuyera las cifras de violencia homicida.

Proyecto Urbano Integral: Reconocimiento de una deuda histórica

Los Proyectos Urbano Integrales –PUI– surgen durante la Alcaldía de Sergio Fajardo en el marco de su Plan de Desarrollo “Medellín compromiso de toda la ciudadanía” y comienzan con el plan piloto en la comuna 1 Popular y 2 Santa Cruz, de la Zona Nororiental de Medellín. Ya para el año 2006 se definió desde la Administración Municipal su implementación del proyecto en la comuna 13 y en el año 2008, con la llegada de Alonso Salazar a la alcaldía, se incluyeron los PUI en el Plan de Desarrollo 2008-2011 “Medellín es solidaria y competitiva”, proyectando una intervención en las comunas 8 y 9 de la Zona Centro Oriental y las comunas 5 y 6 de la Noroccidental. Los proyectos estaban definidos para cuatro periodos de gobierno. Sin embargo, para el gobierno 2012-2015 la iniciativa fue frenada por el Alcalde Aníbal Gaviria, impidiendo la continuidad de las obras restantes.

Estos proyectos fueron declarados como una metodología de intervención urbana que abarcaría tres dimensiones de manera simultánea: la física, la social y la institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas en un territorio definido. En ese marco se entendió por lo social a la participación activa y el involucramiento de la comunidad en cada una de las etapas del proceso a través de recorridos conjuntos, mesas barriales, talleres de imaginarios, etcétera; por lo institucional se comprendió la coordinación integral de las dependencias del municipio en el territorio definido; y por lo físico se comprendió la transformación y mejoramiento de espacios públicos, asimismo, la construcción de equipamiento institucional y recuperación del medio ambiente.

La metodología cuenta con 7 líneas estratégicas. La línea 1 es sobre Promoción, divulgación y prensa, para garantizar el acceso a comunicación legible, oportuna y precisa a la ciudadanía; línea 2 de Socialización, trató de promover espacios de integración comunitaria que ayudaran al empoderamiento del proyecto; línea 3 de Formación, para la realización de procesos formativos de comunicación; línea 4 sobre Comunicación

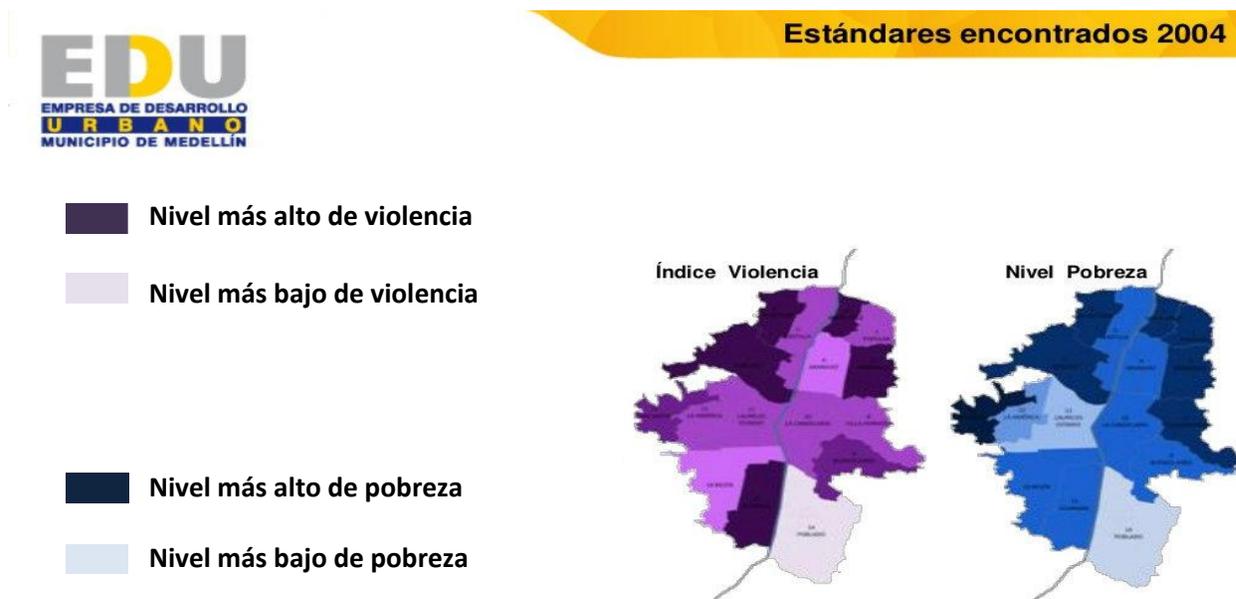
interinstitucional con el fin de generar una comunicación constante entre instituciones y PUI; línea 5 de Participación comunitaria, buscó fortalecer a comunidad organizada para lograr que se comprometiera con la planeación, ejecución y sostenimiento de las obras; línea 6 Política de generación de empleo, buscó generar oportunidades de empleo para la comunidad que residía en el área de intervención y Línea 7 Reasentamiento de población, para garantizar a los habitantes afectados de manera directa por las obras, un acompañamiento en su reubicación (Empresa de Desarrollo Urbano, 2011, págs. 14-15).

Además de las líneas estratégicas, los PUI contaron con 4 etapas que contuvieron un número de fases que dependían del proceso. La primera etapa es la de Planificación previa, sus fases: estudio y reconocimiento, delimitación del PUI, identificación de componentes, identificación de acciones municipales, definición del modelo de gerencia y contratos interadministrativos. La segunda etapa es de Diagnóstico y formulación PUI con la fase de diagnóstico físico espacial y la fase de formulación del plan maestro. Por su parte, la etapa 3 es de Desarrollo de proyectos PUI con las fases de diseño, ejecución y animación, y por último, la etapa 4 de Entrega PUI, con las fases de entrega de insumos a planes de desarrollo local o zonal, entrega de proyectos a entes responsables y continuidad de programas desde la municipalidad.

La información publicada señala que también se llevaron a cabo estrategias de cultura ciudadana y convivencia social con el objetivo de generar una *“cultura del respeto, del diálogo y la tolerancia por la diferencia y por todo aquello que constituye lo público y el bien común”* (Empresa de Desarrollo Urbano, 2011, pág. 16). Para lograrlo, contactaron a organizaciones y líderes claves y se desarrollaron varias actividades que incluían a la comunidad. En suma, los PUI resumen sus objetivos en un reconocimiento del área de intervención, divulgación de las estrategias de intervención y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad que habita el territorio a intervenir.

Por otro lado, los territorios de intervención se definieron a partir de una mapificación en la que se revisó en todo el área metropolitana el índice de desarrollo humano, el nivel de pobreza, el índice de calidad de vida y el índice de violencia, es decir, las cifras de homicidios por comuna. Dicha revisión, señaló a la comuna 1 Popular y la 2 Santa Cruz como las comunas con más alto nivel de pobreza, más bajos índices de desarrollo humano y

de calidad de vida y como dos de las comunas con mayor número de homicidios. Mostró además que las comunas con más altos niveles de pobreza eran: Popular- comuna 1, Santa Cruz- comuna 2, Manrique- comuna 3, 12 de octubre- comuna 6, Robledo- comuna 7 y San Javier- comuna 13. La pobreza se concentraba entonces en la Zona Nororiental de la ciudad, abarcando 3 de sus 4 comunas, lo que priorizó su intervención.



Mapa 1. Índices de violencia homicida y nivel de pobreza por comunas de Medellín 2004. Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano del municipio de Medellín.

De otro modo, el mapeo hecho en 2004 evidenció que donde los niveles de pobreza eran altos, también las cifras de homicidio eran altas, por lo que se estableció una relación proporcional entre pobreza y violencia. Se reconoció también que los territorios que cumplían con esa proporcionalidad, eran territorios que habían padecido un abandono prolongado del Estado en términos de inversión. Así lo sostuvo el Gerente de los PUI desde 2004 hasta 2011:

Ahí encontramos que es directamente proporcional, ósea, a mayor pobreza, mayor violencia, entonces eso es directo. Lo documentamos y dijimos 'claro', eso en teoría se sabe, pero no, vuélvalo a la práctica. Sí, es claro, pero también evidenciamos algo, que es que a mayor pobreza es indirectamente proporcional a la inversión del Estado, clarito. Entonces todos los fenómenos que son directamente proporcionales son por la

ausencia neta del Estado, ósea el Estado ahí pecó por su ausencia, desde la misma planeación, las comunas 1 y 2 no fueron planeadas, solamente la parte inferior.
(Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Además de la incidencia de los PUI basada en los indicadores aplicados, se tenía conocimiento de la estigmatización a la Zona Nororiental, sostenida durante años de segregación social y violencia, por lo que se consideró que la inversión en esa nueva metodología de intervención urbana tenía la posibilidad de romper con ese estigma y cambiar así la imagen de sus barrios. Los PUI asociaron que los señalamientos negativos a estos territorios estaban relacionados con las condiciones de violencia y pobreza, las cuales se encontraban estrechamente relacionadas con la informalidad.

Los sectores informales de una ciudad tienden por lo general a coincidir con las áreas generadoras de crimen y violencia, como consecuencia del alto grado de inequidad social que los distingue de la ciudad formal (ONU- Hábitat, 2006). Desde las favelas de Rio, a los slums de Nairobi, pasando por los katchi abadis de Karachi, son muchos los casos que testimonian cómo en estos sectores se concentran y proliferan grupos armados ilegales que, dedicados a actividades ilícitas como narcotráfico, secuestros, robos, etc., terminan ampliando su radio de acción a la ciudad entera. (Echeverri & Orsini, 2010, pág. 14)

Sin embargo, las manifestaciones violentas en Medellín han cobijado a toda la ciudad, aunque los hechos violentos se hayan concentrado en ciertos territorios. Asimismo la participación diferenciada en las organizaciones criminales que hacen presencia y ejercen control en Medellín incluye a los sectores donde habitan las clases medias y altas, lo que contraría esa postura que suele “*criminalizar la pobreza*” (Zibechi, Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas, 2008, pág. 24) a como dé lugar. El barrio popular se constriñe entonces a sus condiciones de precariedad y a la violencia que converge en sus calles, ocultando la magnitud de las redes, niveles y estructuras que sostienen dichas condiciones de pobreza, las cuales coinciden, no de manera fortuita, con la concentración de la violencia.

Por otro lado, se esperaba la concreción de una de las propuestas políticas más relevantes para la ciudad de Medellín en términos de movilidad durante el periodo de gobierno de

Sergio Fajardo: La terminación del metrocable para la Zona Nororiental, que se asumió como “proyecto palanca” para la realización de obras complementarias enmarcadas en el Proyecto Urbano Integral.

Los índices de calidad de vida y de desarrollo humano mostraban a la comuna 1 y 2 como las más bajas, la 13 de segunda, la 8 y 9 de tercero, la 5 y 6 de cuarto y La Iguaná de quinto. Es decir, la incidencia del desarrollo de los PUI se fue haciendo también de una manera progresiva en función de esos índices, y claro, había una estigmatización muy fuerte también a nivel social sobre la Nororiental, claramente había que de una vez hacer eso. Por otro lado, había lo que llamamos un proyecto palanca que jalaba y era que se estaba construyendo un metrocable muy desde la óptica de la movilidad y de la demanda de pasajeros y digamos que se encontró una oportunidad muy interesante para una propuesta urbana. (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Los PUI implicaron en principio el reconocimiento de una deuda histórica que se tenía con la Zona Nororiental de la ciudad, donde si bien existían antecedentes de intervenciones estatales como las acciones llevadas a cabo con el PRIMED o el Instituto de Crédito Territorial -ICT-, siempre fueron incipientes, se concentraron en pequeñas zonas, no se constituyeron como política pública o estaban relacionadas con campañas electorales, relaciones clientelares y prebendas.

Desafortunadamente, históricamente nunca se habían atendido [los territorios de intervención] de una manera académica, técnica, sino que siempre se habían atendido por compromisos previos a las elecciones. Si tú eres de San Antonio de Prado y me ayudas a conseguir votos yo te hago un colegio y ya el colegio se hacía allá, así el colegio no lo necesitaran en San Antonio de Prado; así el colegio lo necesitaran más en Altavista. (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Por otro lado, si bien las obras de intervención en las comunas 1 Popular y 2 Santa Cruz, se pensaron inicialmente en relación a la línea K del metrocable, la experiencia en la comuna 13 San Javier estuvo mediada por otras variables que reorientaron la intervención del PUI.

Proyecto Urbano Integral en la Comuna 13

Luego de iniciar el plan piloto de la Zona Nororiental, la comuna 13 fue la siguiente en el escalafón de pobreza hallado por técnicos y académicos de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- que hacían parte del proyecto. En esa comuna también se cumplía con la condición de proporcionalidad directa de las comunas 1 y 2: A mayor nivel de pobreza, más altos índices de violencia. Igualmente, esta comuna contaba con una fuerte estigmatización debido a la presencia histórica de diversos actores armados, la fuerte confrontación bélica que culminó con la Operación Orión en el año 2002 y la violencia que continuaría en adelante. Es así como basados en los resultados del mapeo y con un esquema metodológico listo, ya había una razón suficiente para intervenir la comuna en el año 2006 por orden de la Administración Municipal.

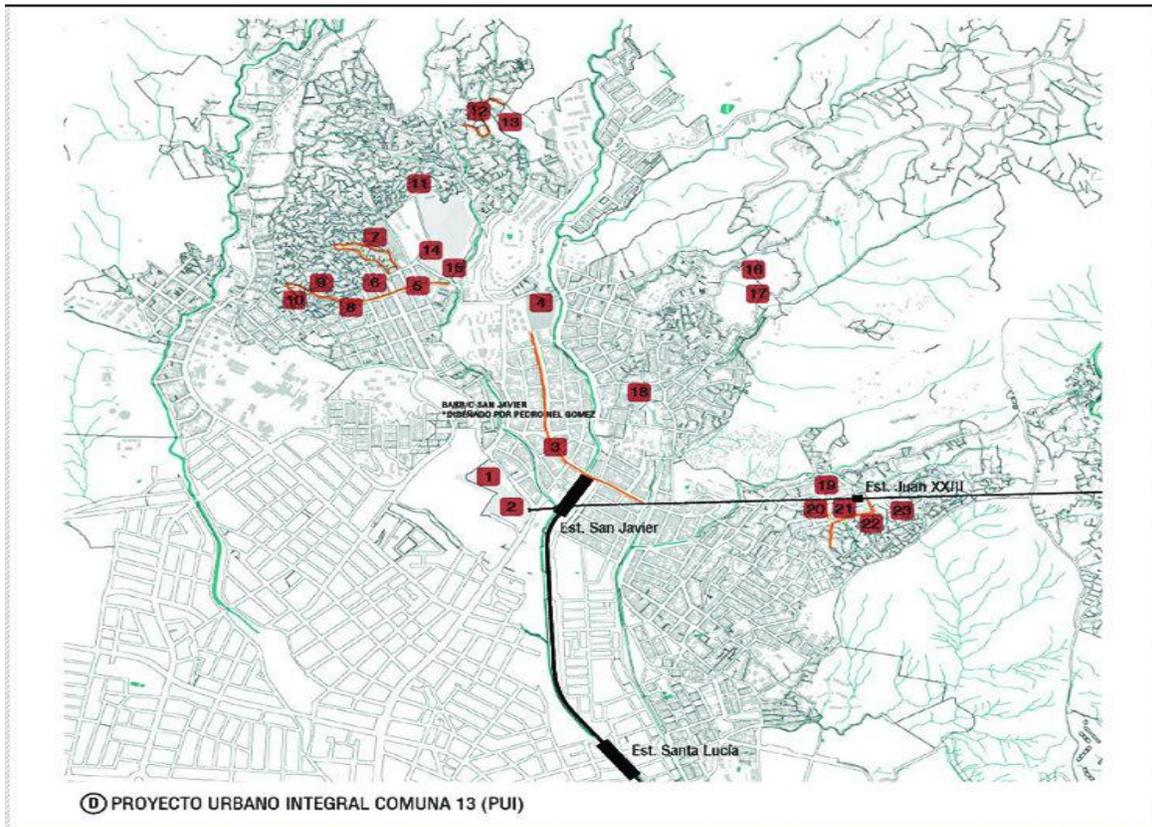
La segunda razón fue similar a la de la Zona Nororiental: la construcción del sistema metrocable, esta vez para el sector de Juan XXIII, con una marcada influencia hacia el sector de Pajarito. Sin embargo, se presentaron disputas al interior del proyecto, puesto que al no tratarse del mismo territorio, se manifestó que había que pensarse otras estrategias de intervención, lo que amplió de manera significativa las zonas o barrios de influencia del PUI comuna 13.

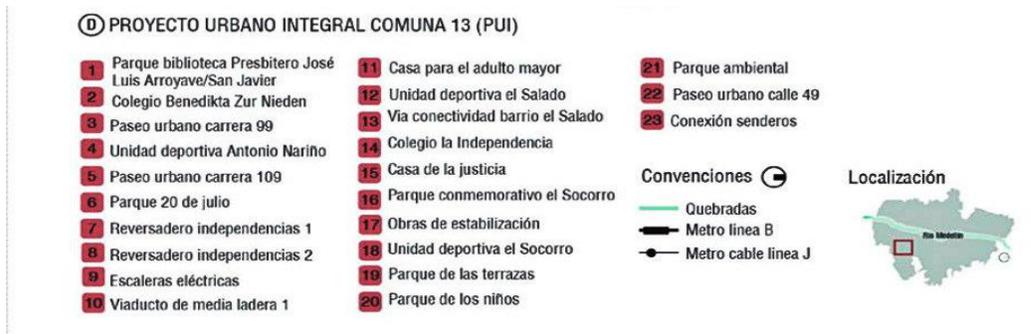
Al cambiar de territorio tú no puedes escoger las mismas estrategias y cuando entonces empieza a desarrollarse los proyectos alrededor del metrocable que claramente fue diseñado más para una incidencia hacia Pajarito, empezó a verse que Las Independencias era el sector que, si nos poníamos a analizar esa flor que es la comuna 13, era el que más rojo estaba, era el que más dificultades tenía, más carencia de espacio público, más déficit en todos los aspectos y el proyecto se fue reorientando hacia esa zona de intervención, y a partir de la centralidad de Las Independencias, se empezó a tejer un poco los proyectos de espacio público, movilidad, escaleras eléctricas, equipamientos, etc. (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Se contemplaron entonces otros factores para la intervención, ya no sólo asociados a la movilidad, sino también a la seguridad. Cuestión que puso el foco en el barrio Las Independencias, como otra centralidad urbana dentro del proyecto.

Las Independencias tenía una problemática de seguridad muy brava y se pensó como hipótesis, que si en gran medida se mejoraba todo el espacio público, la movilidad y todas las cosas, pues obviamente mejoraba también los componentes de seguridad, que digamos que en la Nororiental pues fue más asociado a armar una secuencia urbana cotidiana para las estaciones del metrocable y el problema era más la movilidad, aquí [en la 13] de pronto era más la seguridad. (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

De esta forma, el PUI comuna 13 terminó generando 23 puntos de intervención, 3 cercanos a la estación San Javier del metro, 5 asociados a la construcción del metrocable línea J en Juan XXIII y el resto de obras se concentran en Independencias y barrios aledaños como muestra el siguiente mapa.





Mapa N°2. Proyecto Urbano Integral –PUI- Comuna 13. Fuente: Urbam- Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Universidad EAFIT

La ubicación barrial de cada proyecto según la numeración es la siguiente:

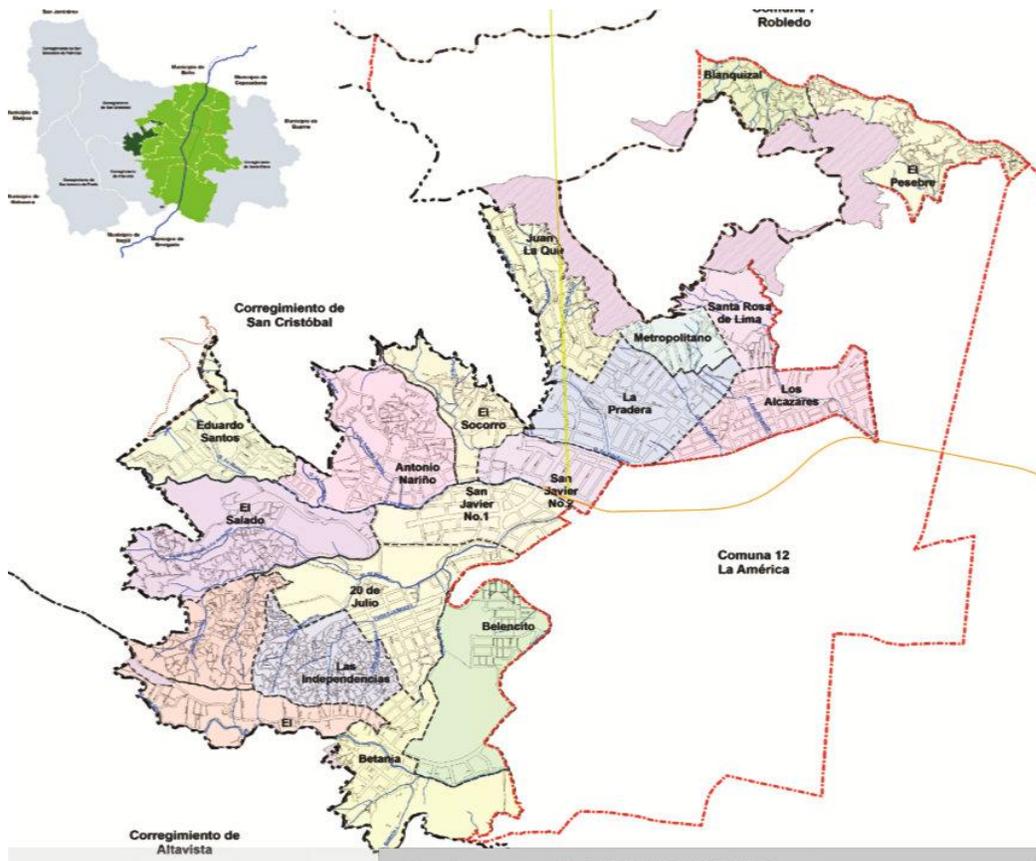
1. Parque biblioteca, según la división administrativa hace parte de la comuna 12 (no corresponde a la comuna 13)
2. Colegio Benedikta Zur Nieden en barrio Campo Alegre, comuna 12 La América (no corresponde a la comuna 13)
3. Paseo Urbano Carrera 69 en barrio San Javier
4. Unidad Deportiva en barrio Antonio Nariño (Acción de mejoramiento)
5. Paseo Urbano Carrera 109 en sector Independencias
6. Parque de la Paz en barrio Veinte de julio
7. Reversadero Independencias I (El reversadero es la zona de ingreso a escaleras eléctricas)
8. Reversadero Independencias II.
9. Escaleras eléctricas en barrio Independencias I
10. Viaducto media ladera tramo 1. Entre barrios independencias I y II (solo es peatonal)
11. Casa adulto mayor en Las Independencias
12. Unidad deportiva en barrio El Salado
13. Vía conectividad en barrio El salado
14. Colegio La Independencia en Las Independencias
15. Casa de la Justicia ubicada entre barrios Veinte de julio e Independencias
16. Parque conmemorativo en barrio El socorro
17. Obras de estabilización en barrio El socorro (Mitigación de riesgo)
18. Unidad deportiva de barrio El socorro
19. Parque de las terrazas en barrio Juan XXIII
20. Parque de los niños en barrio Juan XXIII
21. Parque ambiental en barrio Juan XXIII
22. Paseo urbano calle 49 en barrio Juan XXIII
23. Conexión senderos en barrio Juan XXIII

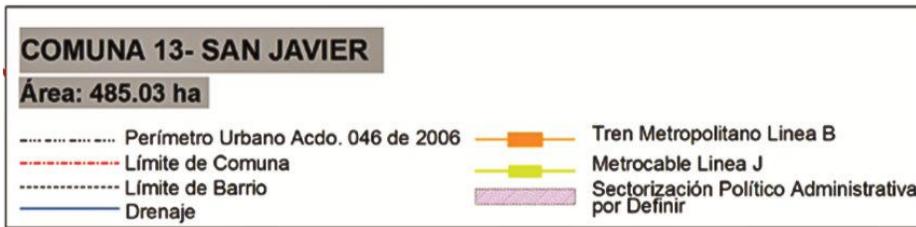
Ahora bien, según el Acuerdo Municipal 346 del 2000, la comuna 13 está compuesta por 19 barrios oficiales: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII, Antonio Nariño, San Javier N°1, San Javier N°2,

El Salado, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Corazón, Belencito, Betania, Eduardo Santos, El Socorro y Veinte de Julio.

Sin embargo, con el fin de facilitar la asignación de recursos a sectores declarados informales, a través de Presupuesto Participativo se han acogido como barrios a La Gabriela, Guadarrama y Luz del mundo, pese a no estar reconocidos como tal por la Administración Municipal (Alcaldía de Medellín, 2009, pág. 13).

La Comuna 13 limita al Norte con la comuna 7 Robledo, al Sur con el barrio Belén Aguas Frías del corregimiento de Altavista, al Oriente con la comuna 12 La América y al Occidente con la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal, que a su vez genera conexión con el Urabá antioqueño.





Mapa N°3. Comuna 13- San Javier. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación -DAP- Subdirección de información 2004

Es así como la ubicación de las obras del Proyecto Urbano Integral, refleja una concentración de estos en determinadas zonas, así: Las Independencias, Veinte de julio, El Socorro, El Salado y Juan XXIII. Mientras que barrios como Antonio Nariño y San Javier presentan solo una obra por cada uno. Además que por su cercanía, algunos barrios aledaños como Belencito, El Corazón y Nuevos Conquistadores, se vieron impactados. En suma, son 7 los barrios intervenidos de manera directa.

Una comuna fragmentada

Sin embargo, es importante comprender las dinámicas propias de la vivencia barrial en la que se han creado divisiones territoriales distintas a las establecidas por la administración municipal. Hay barrios como Las Independencias que han sido divididos en tres sectores y dónde se ha entendido cada sector como un barrio, en tal caso, como Independencias I, Independencias II e Independencias III. Igualmente el barrio El Salado, compuesto por parte alta, parte baja y San Michel; el barrio Veinte de julio cuenta con tres divisiones sectoriales: La Colina, El Chispero y Veinte de julio, de la misma manera el barrio El Corazón con Betania, Villa Laura y El Corazón. Por su parte, el barrio El Socorro está compuesto por El Socorro La América y El Socorro Los Ángeles; el barrio Nuevos Conquistadores con parte alta y parte baja; Santa Rosa de Lima en un sector con su nombre y otro conocido como El Coco y el barrio Antonio Nariño con otro sector conocido como Quintas de San Javier; Blanquizal con el sector de Altos de Calasanz y por último el barrio El Pesebre con Armerito, Búcaros, El Paraíso y Sapotieso. (Alcaldía de Medellín, 2015, pág. 33).

Por otro lado, los barrios de la comuna 13 se organizan o se juntan bajo uno nodos territoriales que obedecen a una dinámica de fragmentación social y espacial “*producto de*

años de conflicto armado, enfrentamientos violentos y establecimiento de fronteras invisibles que ha segmentado la participación y la sectoriza de una manera tal, que el encuentro ciudadano se vuelve complejo” (Alcaldía de Medellín, 2015, pág. 158). De esta manera, el trabajo organizativo no supera las divisiones barriales o zonales y el territorio se fracciona impidiendo una agrupación comunal. Los nodos se componen de la siguiente manera:

Nodos territoriales de la comuna 13 San Javier						
Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Nodo 5	Nodo 6	Nodo 7
Asomadera Belencito Betania El Corazón Villa Laura	Nuevos Conquistadores Independencias I, II Y III Veinte de Julio	Nuevos Conquistadores parte alta Eduardo Santos Guadarrama Quintas de San Javier El salado	Altos de la Virgen Antonio Nariño San Javier 1 y 2 El Socorro El Socorro- Los ángeles	Juan XXIII La Divisa Luz del Mundo La Quiebra Pradera parte alta	Alcázares Metropolitano Pradera parte baja Santa Rosa de Lima	Blanquizal Mirador de Calasanz Paraíso Pesebre

Tabla1 N° 1. Nodos territoriales Comuna 13 Fuente: Revisión y ajuste al Plan de Desarrollo Local comuna 13 San Javier, 2015

Otra de las divisiones identificadas también está relacionada con la historia del conflicto armado que tuvo lugar en la comuna. Desde la mirada de quien habita la comuna, hay otra fragmentación que persiste y que impide el trabajo organizativo en determinados barrios, encumbrada en la distinción de las zonas y barrios donde las milicias tuvieron influencia y las zonas y barrios con presencia de bandas criminales que fueron cooptadas por el paramilitarismo a su llegada.

La comuna se divide como en dos, la 13. Ósea, la parte que queda El Socorro, Nariño, Las Peñitas, La Pradera ¿Cierto? En ese lugar era un lugar más consolidado para grupos de delincuencia común, ósea, mientras existían las CAP también existía la delincuencia común; todo el tema de delincuencia común muy cerca al tema del sicariato, el tema de unos hurtos grandes, se lograron juntar con el paramilitarismo, ese fue el que reclutó el paramilitarismo. Entonces la zona que reclutó el paramilitarismo fuerte fue: San Cristóbal que entraron por la 80- hay un sector que se

llama la 80- y en San Cristóbal los combatientes rasos que venían del Urabá, La Loma en el guamo y en Guadarrama y desde ahí ya se bajaron hacia Nariño, Socorro y demás, aliando algunas estructuras que eran más del tema delincencial, pero que tenían poder también en el territorio. Y la otra mitad que obedece a las Independencias, El Salado, Belencito, El Corazón y toda esta zona del lado de allá tenía más presencia de las CAP que luego se aliaron con FARC y ELN para limitar la estrategia armada del paramilitarismo, pero que a la par era también un lugar estratégico porque linda con Altavista que sale hacia al otro lado y comparten la misma montaña, entonces ahí había como una doble mirada. (Entrevista a líder juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

Teniendo en cuenta estas divisiones territoriales, la centralidad urbana de las Independencias termina ubicándose en sector de Independencias I y el barrio Veinte de Julio, zona donde las milicias guerrilleras tuvieron gran influencia y donde, por tanto, se concentró su accionar. Allí también se consolidó todo el equipamiento institucional con la Casa de Justicia, la Casa del Adulto Mayor, el colegio Las Independencias y el Jardín Infantil. Sin embargo, la centralidad del PUI comuna 13 se pensó con un efecto radial que impactara a la población de barrios cercanos, con el fin de ampliar la incidencia del proyecto, mejorar la seguridad y romper con las divisiones espaciales y sociales reforzadas por las dinámicas del conflicto armado.

Hace centralidad de manera radial, ósea, San Michel, El Salado, Nuevos Conquistadores, Independencias 3, 2, 1, 20 de julio ¡Maravilloso! Entonces en ese concepto, ya venimos nosotros los técnicos y decimos ‘Ahí podemos considerar el efecto de la mano’. En temas urbanos hay un concepto en planeación que uno puede generar una centralidad con unas conexiones para otras poblaciones [...] Entonces nosotros dijimos porque no implementamos esa centralidad ahí y cargamos todos los servicios allá, ahí fue cuando se hizo la Casa de la Justicia de la Comuna 13, el jardín infantil, la centralidad del adulto mayor, el colegio Independencias” (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

La conexión de esos barrios inició con el paseo urbano de la 109, que llega hasta el Parque de la Paz, ubicado en el barrio Veinte de Julio y que conecta con el barrio las Independencias I en los sectores El Reversadero, escaleras, viaducto media ladera (tramo 1)

y Plan del Che en la parte alta, de ahí se pensó en conectar con Independencias II y III, Nuevos Conquistadores, El Salado y dar la vuelta hasta San Michel. Podemos decir que la idea de conectar los barrios a través de las obras se hizo en una lógica de integración de toda esa zona, no obstante, algunas dinámicas enraizadas en el conflicto armado continuaban presentes en la comuna, entre ellas la fragmentación territorial dada según el dominio del grupo ilegal presente en cada barrio.

Lo que las divisiones y el fraccionamiento de la comuna evidencian, es la escasa relevancia que tienen los límites político-administrativos en las construcciones territoriales. Nos encontramos frente a espacios que han sido creados y recreados por la misma comunidad como efecto y potenciación de sus luchas por sobrevivir, aunque éstas hayan estado mediadas por hechos violentos y los mismos carguen de otros sentidos esa configuración espacial. *“Ha sido precisamente el haber mantenido o re-creado espacios bajo su control y posesión lo que ha permitido a los sectores populares resistir los embates del sistema”* (Zibechi, 2008, pág. 22).

Estrategias múltiples: lo social y lo securitivo. La otra pacificación de la comuna 13

Los Proyectos Urbanos Integrales además de aceptar la deuda histórica que se tenía con ciertos sectores de la ciudad en términos de inversión estatal para lo social, también consideraron desde un inicio la elevada violencia que confluía en esa marginalidad. El entonces Alcalde Sergio Fajardo señaló a modo de analogía, que la violencia y la deuda social crecieron como árboles gemelos con raíces extensas, y que por tanto, cortar uno u otro árbol, incluso ambos, no iba a ocuparse de solucionar las problemáticas de fondo que aquejaban a estos territorios y que por ello, para que la reducción de homicidios que se venía dando fuese sostenible, se tenía que mejorar las condiciones físicas y sociales de los sectores más críticos (Martin, 2012, pág. 473)

En ese sentido, la intervención además de contemplar una estrategia social con la cual poder generar un relacionamiento apacible con una comunidad, que sostenía una desconfianza profunda por el Estado, también tuvo en cuenta una estrategia de seguridad que incluyó el reconocimiento de diversos grupos ilegales en el territorio, muchos de los cuales surgieron de manera posterior a la desmovilización paramilitar y que ejercieron, y ejercen, múltiples modalidades de control en la comuna 13, San Javier.

Entonces en la medida que nosotros, el PUI llega, llega con estrategia, la estrategia social, pero también la estrategia de seguridad, porque indiscutiblemente si vos colocabas la capa debajo de las bandas de la comuna 13, eso eran bastantes: El de la colinita, el del Che, el de yo no sé quién, el de los, ¡No eso era! Yo cogía ese mapa y yo decía ¡miércoles! Bueno ¿Aquí quién está?: Fulano. ¿Aquí?: Mengano. ¿Aquí?: Sutano ¡Aggg! Pero también al mismo tiempo uno decía, que pesar que una comunidad esté sometida a eso, ósea, que entre mi casa y mi transporte pal trabajo yo tenga que pasar por una selva de cemento pero con actores armados (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

En ese sentido, tanto la desconfianza generalizada de la comunidad hacia el Estado, como la fuerte presencia de grupos ilegales en todo el territorio, se constituyeron en serias problemáticas que podrían impedir la realización plena de los proyectos.

El primer problema, que es general a todos los Proyectos Urbanos Integrales, es la falta de confianza por el Estado, ‘Otra vez vienen, otra vez con lo mismo’ ósea, hay una desconfianza grande en el Estado, por eso estos proyectos se deben estructurar para permitir victorias tempranas, es decir, proyectos de fácil implementación y rápida para romper un poco esa desconfianza que existe en proyectos de muy largo plazo que se pueden tomar una administración del alcalde. Lo otro, todavía fronteras y fenómenos asociados a la violencia, ‘usted para donde va’, eh, si bien nos respetaron y nunca tuvimos ningún incidente que lamentar, se hace tenso por la manera de ocupar los territorios algunos grupos ¡Que uno sabe pues! Cuando están los chicos campaneros, las pandillitas, todas las cosas. Entonces en temas de seguridad, creo que eso siempre va a ser un riesgo (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

De esta manera, la intención de integrar los barrios intervenidos directamente junto a los barrios cercanos por medio de un circuito de conectividad, tenía también una estrategia de seguridad con un objetivo concreto: disminuir los niveles de violencia homicida. La estrategia se enfocó, por un lado, en fortalecer la participación y aceptación de los habitantes en el proyecto para asegurar su continuidad, y por el otro, en generar centralidades cargadas de equipamientos institucionales que al crear puntos de conectividad entre las obras, iban a lograr circulaciones e intercambios sociales masivos que terminarían por desbordar la capacidad de acción de los grupos delincuenciales.

La gente se empezó a empoderar de las obras, cuando vieron la 99 tan positiva, la misma biblioteca de San Javier, donde podían bajar allá y no había problema con el combo de acá. Uno de los temas que hacen los PUI es hacer una acupuntura urbana que promueve las transferencias sociales en masa. Ósea ¿Quién no quiere ir a ver las escaleras eléctricas? ¿Quién no las quiere ir a ver? Propios, extraños, extranjeros, locales, nacionales, todo el mundo, entonces esa misma lógica, fue la que nosotros inclusive hallamos en la comuna 1 y 2. Los proyectos de la comuna 1 y 2 y todos los PUI generan unas centralidades con lo mejor: una buena unidad deportiva, un buen colegio, una buena biblioteca, unas buenas escaleras, para poder lograr esto: que hayan transferencias sociales de por ir a conocer, que cuando se vuelve eso en masa, las estructuras delincuenciales son incapaces de contener. (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Además de la conclusión acertada de los flujos e intercambios sociales en masa, algunas de las obras cuentan con una ubicación estratégica. Una de las más representativas son las escaleras eléctricas situadas entre el barrio Veinte de Julio e Independencias I. Aunque inicialmente su proyección se pensó para formar un “abanico” que subiera por Independencias I, llegara hasta el viaducto media ladera tramo I, II y II para luego generar otras escaleras eléctricas en Independencias II que bajaran hasta el reversadero N°2.

Con todo, durante los 7 años que duró el PUI comuna 13 no se alcanzó a realizar el tramo de escaleras en Independencias II, pero se logró la consolidación en Independencias I, la constante circulación en el sector, especialmente de extranjeros y visitantes, y una suerte de conexión con Independencias II por medio del viaducto media ladera tramo 1.

El proyecto escaleras eléctricas era un abanico entre Independencias I, subía al viaducto y bajar a Independencias II o viceversa, porque Independencias 2 y 1 no se la van, pues había guerra frontal, entonces con esos dos proyectos ¿Qué guerra ya va a haber? Si en Independencias I por ejemplo, ahí en las escaleras eléctricas hace muchos años no matan a una persona, cuando antes eso era día por medio que mataban a una persona (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Ahora, menguar la confrontación y con ello las cifras de homicidio, también estuvo asociado a la ruptura con ciertas configuraciones espaciales de la comuna como los callejones, terrazas y pasadizos que facilitaban la movilización de los grupos ilegales. La

observación previa en los territorios le mostró al equipo del PUI de la comuna 13 que esas formaciones propias de los barrios iniciados de manera informal, resultaban funcionales al sostenimiento de estructuras criminales: *“La forma morfológica de la zona nos dio pistas muy grandes de los campos de batalla de las bandas en la comuna. Nuestra tarea era romper los pasadizos, porque de esa forma sabíamos que romperíamos los guetos”* (Kienyke, 2013).

En ese sentido, se buscó un impacto en escala, pues según las personas entrevistadas que representaron al Estado en ese proyecto, la transformación de ciertos espacios significó una ruptura con los “guetos urbanos” que se servían de la configuración espacial allí existente, lo que redujo los niveles de confrontación y a su vez, dio como resultado una reducción en las cifras de homicidios. Al mismo tiempo, la intervención en el territorio implicó un quiebre en la composición social de los habitantes, pues se consideró que los pobladores de la comuna 13 habían crecido con los imaginarios de los actores armados y que incluso su origen venía de las estructuras delincuenciales con las que siempre estuvieron relacionados.

Le decían a uno que el Pos-Orión fue una cosa muy tesa, allá la gente, es que usted no se imagina las cicatrices de la operación Orión, pues para nosotros como ciudadanos, pero también entendiendo de que el mismo origen de las personas, vienen de estructuras delincuenciales, las primeras familias que llegaron allá fueron familias del ELN, del M-19, de las FARC, ósea eran familiares o células urbanas de esas estructuras, entonces uno decía, bueno están afligidos, pero sostienen... siempre hubo una relación con los actores armados. (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Afirmaciones como esta fueron las que justificaron la acción conjunta de exterminio llevada a cabo entre el Estado y los paramilitares. Las mismas, resultan polémicas si se tiene en cuenta la magnitud en las cifras de hechos victimizantes ejecutados por todos los actores armados que han hecho presencia y ejercido control en los barrios de esta comuna y que han sido padecidos por sus habitantes en distintos niveles, especialmente durante las desmedidas operaciones militares.

Con todo, la suma de diversos factores estratégicos de seguridad le atribuyó a los Proyectos Urbanos Integrales un elemento pacificador como metodología de intervención

urbana. Lo cual se reforzó con el discurso de la ciudadanía desde una visión clásica de sus componentes más representativos como la cultura, el respeto, la convivencia y la igualdad en el espacio público entendido como escenario por excelencia de la coexistencia pacífica del habitar la ciudad.

Yo creo que los PUI ahí ganaron mucha confianza, han desarrollado proyectos que han pacificado la comuna 13, ósea, el bulevar de la 99 en San Javier, pacificó San Javier, entendiendo que allá hay otras dinámicas oscuras, eso pues yo aquí, yo no digo que los PUI son la aspirina pa' todo, no, allá uno combate sobretodo la convivencia, el sentido de ciudadano, que yo puedo estar aquí y que no estoy amenazado porque me van a matar, porque estoy aquí al lado de una frontera imaginaria x, no, vuelve la estructura del espacio público, los equipamientos como parte de la ciudad, la gente se siente conforme y se siente cómoda como ciudad y conectada a la ciudad, pero también hay temas de fondo pues allá, el microtráfico, el tema de la oficina ahí en San Javier, bueno, eso tiene un montón de temas ahí. (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Esto es, un despliegue ideológico que pese a la existencia de otras problemáticas latentes en el territorio, crea la ilusión de neutralidad en el espacio público, logrando así generar un marco de representación en el que gran parte de las clases populares se ha integrado sin mayor oposición a una propuesta hegemónica del proyecto de ciudad (Fernández & García, XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control, 2014, pág. 3).

La realidad urbana en la que interviene el urbanismo se presenta entonces como objetiva, neutral, compacta, despolitizada, espacios y lugares donde todos somos iguales, anulación de la diferencia, donde priman los intereses comunes. Esto termina por dirigir las miradas a los cambios infraestructurales y las motivaciones superfluas de las intervenciones espaciales que aquel produce, aunque se sostenga una realidad desigual con condiciones diametralmente opuestas entre los habitantes de una misma ciudad en la que persisten hechos violentos como los homicidios, aún concentrados en los barrios populares de Medellín.

CAPÍTULO III

¿Una ciudad segura?

A partir del año 2004, las cifras de los homicidios se redujeron en toda la ciudad, impactando de manera positiva la imagen que Medellín proyectaba en el mundo. Sin embargo, si se ubicara ese índice como el principal medidor de la violencia en las comunas, tal como lo hizo el Urbanismo Social, resultaría insuficiente para describir las transformaciones ocurridas en el mundo criminal a partir de la desmovilización irregular de los paramilitares, pues el comportamiento de los actores violentos en los barrios ha estado supeditado a las dinámicas de relacionamiento entre mandos altos y medios que controlan la criminalidad en la ciudad, cuyas asociaciones, a su vez, están subordinadas a estructuras paramilitares de alcance nacional.

Por tanto, atribuir ese cambio en la violencia homicida a la intervención hecha por la Administración Local a través de los PUI, reduce la complejidad del accionar de los actores armados en los territorios, a la vez que genera un ocultamiento de otras formas de victimización que ponen en vilo la pretensión de una ciudad segura, donde son los actores armados ilegales quienes sostienen o quiebran la frágil estabilidad que se implantó con la transformación de los grupos armados pos-desmovilización en Medellín.

Así ocurrió durante el 2008, año en el que la ciudad presenció un cambio significativo en el comportamiento de los homicidios, con un aumento considerable en las cifras de asesinatos, el cual rompió con el descenso sostenido de los cinco años anteriores. Este hecho se atribuyó principalmente a la extradición del entonces jefe de la Oficina de Envigado, Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, ocurrida en mayo de ese año, lo que obligó a una reestructuración y reacomodamiento de los grupos armados ilegales:

Las principales explicaciones sobre este ascenso se ubican en el impacto del debilitamiento de la denominada Oficina de Envigado, la cual ha sufrido una importante pérdida de poder debido a la extradición de su jefe Diego Fernando Murillo, la captura y persecución a sus líderes por parte del Estado Colombiano y el enfrentamiento a muerte con otros grupos criminales, lo que ha generado una inestabilidad en el mundo criminal y un caótico proceso de reorganización de los territorios y competencias de los grupos armados ilegales que operan en la ciudad, lo

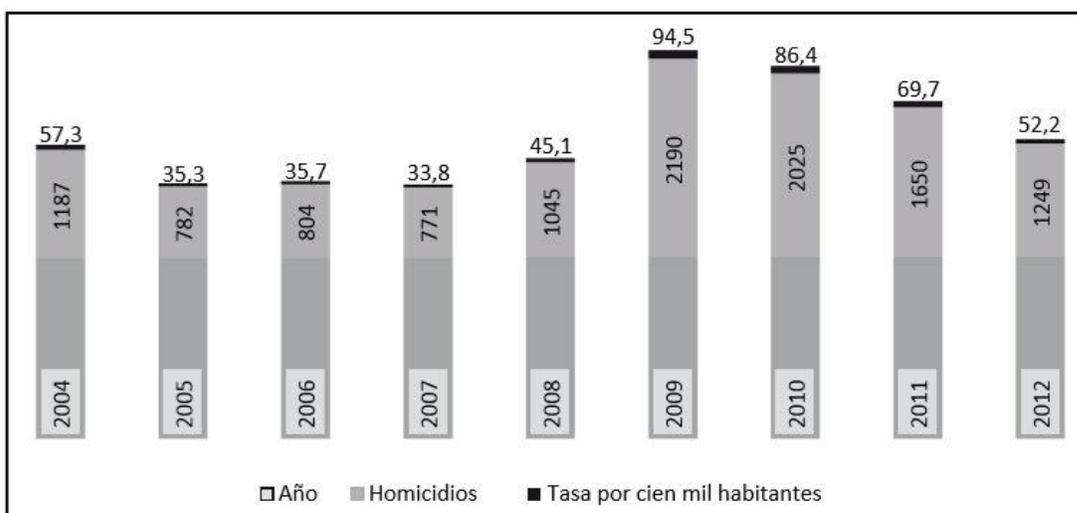
que ha incidido en el asesinato de una gran cantidad de personas en el marco de este proceso de ajuste de cuentas (Personería de Medellín, 2008, pág. 6).

De esta manera, el crecimiento progresivo en los homicidios desde 2008 y el recrudecimiento de la confrontación estuvieron fuertemente ligados a la disputa por la sucesión del mando que ocupaba Diego Murillo en la Oficina de Envigado. Dentro de la estructura jerárquica de la organización, seguían en la lista Ericson Vargas, alias “Sebastián” y Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”. El primero era el jefe de sicarios de la Oficina y el segundo era el hijo de crianza y el principal hombre de confianza de alias “Don Berna”.

La disputa inició porque tanto “Sebastián” como “Valenciano” querían quedarse con la comandancia de la Oficina de Envigado (El Espectador, 2013), dando paso a una nueva oleada de violencia homicida en la ciudad por el enfrentamiento entre bandas asociadas a una facción u otra y por las alianzas que los dos cabecillas en conflicto tenían con grupos paramilitares:

“Desde 2008 hasta mediados de junio de 2011, los grupos al servicio de la facción de alias ‘Valenciano’ recibieron apoyo de la agrupación derivada del paramilitarismo ‘Los Urabeños’ o ‘Gaitanistas’, al mando de alias ‘Mi Sangre’, y las agrupaciones de la facción de alias ‘Sebastián’ y alias ‘Beto’ el respaldo de ‘Los Paisas’ y ‘Rastrojos’” (Personería de Medellín, 2011, pág. 18)

De esa manera, para el año 2009 las cifras de los homicidios se dispararon apuntando a una tendencia de crecimiento en las muertes violentas en la ciudad. El desorden que ocasionó la extradición de alias “Don Berna” continuó y recrudeció las disputas por el control territorial y por el principal mandato de la criminalidad en Medellín. Las cifras de homicidios se duplicaron en comparación con el año anterior, generando el pico más alto de violencia homicida de los últimos cinco años.



Gráfica N°1. Homicidios 2004-2012 Medellín por cada cien mil habitantes. Fuente: SISC-concertación INML- SIJIN- CTI en el informe de la Personería de Medellín 2012, pág.16

La concentración de la confrontación armada sufrió ciertas modificaciones trasladándose en varias comunas populares de la ciudad, entre ellas la comuna 13, en donde los asesinatos se incrementaron durante el 2010:

Los homicidios se incrementaron en casi todas las zonas y comunas de la ciudad de manera progresiva a partir del mes de marzo [...] Teniendo en cuenta la variación de homicidios durante este periodo, se evidencia un traslado o rotación de la confrontación armada, que si bien durante todo el año 2009 estuvo concentrada en las comunas 1, 3, 6, 7 y Corregimiento de San Antonio de Prado, durante este periodo de 2010 se ha escalado en las comunas 2, 5, 8, 9 y 13 y Corregimientos de San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista. (Personería de Medellín, 2010, pág. 6).

En ese mismo año la confrontación presentó un segundo momento con “*el progresivo debilitamiento de los grupos de alias ‘Valenciano’ a partir del segundo semestre*” (Personería de Medellín, 2011, pág. 18) lo que del otro lado de la contienda, generó una consolidación y expansión de los grupos de alias “Sebastián”. Finalmente, con la derrota de “Valenciano”, los grupos a su mando que aún permanecían en pie comenzaron a ser cooptados directamente por “Los Urabeños” y por los grupos fortalecidos de la facción de “Sebastián”, el cual logró robustecer su estructura y afianzar su control territorial en la ciudad.

Ese viraje en el enfrentamiento armado encajó con el leve descenso de homicidios que inició en el 2011 en la ciudad, pero el intento de “Los Urabeños” de cooptar a los grupos restantes que seguían a “Valenciano” tuvo resistencia por parte de algunos grupos que no querían operar bajo su mando, lo que suscitó reacomodos en el mundo criminal e hizo pensar que sucedería una nueva oleada de asesinatos en Medellín. Sin embargo, en el año 2012 continuó la tendencia al descenso en las cifras de los homicidios, con una disminución del 24.3%, pasando de 1650 casos en 2011 a 1249 en 2012 (Personería de Medellín, 2012, pág. 15).

Los patrones de la guerra y la paz: el pacto del fusil

La leve reducción de homicidios en Medellín contrastó con la fuerte presencia de organizaciones “neoparamilitares” heredadas de las Autodefensas Unidas de Colombia tras su regular desmovilización; “La Oficina de Envigado”, “Los Urabeños”, “Los Rastrojos” y “Los Pesebreros”, que como los bloques paramilitares, continuaron actuando en el ámbito urbano por medio de la agrupación de bandas y combos, que han coexistido bajo constantes disputas territoriales. Con todo, el año 2013 marcaría un nuevo ciclo para la manifestación de la violencia homicida en la ciudad, logrando una reducción significativa de las muertes violentas.

En ese contexto tuvo lugar el pacto del fusil, acuerdo criminal con un fuerte impacto en la ciudad de Medellín, sellado desde la clandestinidad por los altos mandos de los grupos armados ilegales, que envió a los barrios la orden de no agresión entre combos, tras la noticia, el ruido y los festejos no se hicieron esperar. Sin embargo, como era de esperarse, el pacto no significó el fin de las estructuras paramilitares, sino la instauración de una tensa paz en la ciudad.

Los grupos de la “Oficina”, “Los Urabeños”, “Los Pesebreros” y “Los Rastrojos”, estructuras con incidencia no solo local, sino regional y nacional, han estado enfrentados desde finales del 2007 hasta mediados del 2013, protagonizando un ciclo de cruenta disputa armada por el control de los municipios del Valle de Aburrá durante seis años. Dicho ciclo parece concluir con la tregua o pacto realizado entre las estructuras mencionadas a inicios del segundo semestre del 2013, lo cual repercute

en la disminución de enfrentamientos armados y el número de homicidios, pero no significa el desmonte de los grupos armados ilegales ni el fin de sus diferentes formas de control territorial que siguen cobrando un alto número de víctimas en la ciudad (Personería de Medellín, 2012, pág. 32).

El pacto de no agresión trajo consigo la disolución de las denominadas “fronteras invisibles”, pues las áreas de control e influencia habían quedado bien demarcadas en lo acordado, lo que permitió que los habitantes de las comunas pudieran transitar con cierta tranquilidad entre sectores antes prohibidos. La demarcación consistió también en la repartición de finanzas, dividiéndose el cobro de vacunas y extorsiones, fijando los cobros solo una vez al día y en manos del mismo combo, dependiendo del sector de influencia.

Nuevamente se evidenció que los actores ilegales fueron quienes forjaron el escenario de seguridad en la ciudad, demostrando su poderío en la ordenación de la violencia, pues el incremento o la disminución de los homicidios dependió del estado de las relaciones tranzadas por actores criminales y paramilitares, cuyos líderes pueden mandar una confrontación a muerte en toda la ciudad o establecer una frágil paz entre los combos si es necesario para mantener su dominio.

Todo, todos los barrios son calientes. Qué es lo que uno se da cuenta, que hay un liderazgo, hay unas cabezas grandes en la ciudad de Medellín, que si los tipos dicen ‘hay guerra’ hay guerra, si dicen ‘no hay guerra’ no hay guerra. Entonces la orden es para todos los barrios y si no hay guerra en ningún barrio, no hay guerra, pero si los manes dice ‘Ah, vamos a reventarnos entre tal barrio y tal barrio’ se prende en cualquier momento (Entrevista a hombre adulto, Comuna 13, Medellín, 2017)

A pesar de la tregua, el 2013 mantuvo en su orden a la comuna 10- Candelaria, comuna 13- San Javier, comuna 7- Robledo, Comuna 8- Villa Hermosa, Comuna 4- Aranjuez y comuna 16- Belén, como las más afectadas por violencia homicida. Lo que quiere decir que aunque hubo una reducción de los asesinatos gracias al pacto del fusil, se conservaron los focos de violencia homicida (Personería de Medellín, 2013, pág. 34). Por tanto, las decisiones de pactar o no, pueden influir más en un sector que en otro y eso puede depender de la dinámica barrial, la cantidad de divisiones presentes en el territorio, la importancia de lo

que se disputan, la pertenencia a distintas estructuras paramilitares, el nivel de la rivalidad entre los combos o la ubicación geoestratégica, como en el caso de la comuna 13.

Estados paralelos en la Comuna 13

En el año 2006, la llegada del Proyecto Urbano Integral a la comuna 13 implicó un conocimiento detallado del territorio y sus actores clave, esto a su vez, llevo al reconocimiento de los grupos ilegales que hacían presencia en el territorio. La cantidad y expansión de esos grupos, sumado al control territorial que ejercían, difícilmente pudo pasar desapercibido en un proyecto estatal que buscaba incidir en distintos barrios de la comuna.

La magnitud de su presencia y expansión era tal, que la cantidad de combos existentes durante el tiempo que duró la intervención del PUI, superó el número de barrios oficiales de la comuna, es decir, habían más de 19 combos haciendo presencia y operando en la zona. Un seguimiento de prensa realizado por la Corporación Región, evidencia que después de la desmovilización paramilitar hay un incremento vertiginoso de bandas y combos en la Comuna 13.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Los Cuquitas	Comandos Armados del Pueblo – CAP	ELN (Carlos Alirio Buitrago)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Cuquitas	Los Cuquitas	Los Cuquitas
Comandos Armados del Pueblo – CAP	Bloque Metro	Bloque Metro	Jose Luis Zuluaga (Autodefensas Magdalena Medio)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Chinos	El Salado
Los colchoneros	Bloque Cacique Nutibara	FARC			Desmovilizados autodefensas	La Torre
ELN (Carlos Alirio Buitrago)					Los Victorinos	Combo de Goyo
Los Paras					El Combo	Combo del Gordo
Los Cobres						Roman
Los Zaros						Renacer (desmovilizados de las FARC)
El socorro						El Gordo
Autodefensa de Córdoba y Urabá						Combo de Roque
						Los Lecheros

Ese incremento acelerado es muestra del reacomodo de las organizaciones paramilitares en la ciudad, su capacidad de expansión y de control territorial en los barrios de la Comuna 13.

2008	2009	2010	2011	2012	2013
Los Cuquitas	Las Cuquitas	Las Cuquitas	Los Cuquitas	Los Urabeños	El Coco
El Salado	La Torre	Los Urabeños	Los Colchoneros	El Salado	
La Torre	El Pesebre	El Salado	Los Urabeños	ODIN La Quiebra	
Combo de Goyo	Las Peñitas	La Torre	La Torre	El Pesebre	
El Pesebre	La 115	Combo de Goyo	Combo de Goyo	Las Peñitas	
Roman	La 39	ODIN Pradera	ODIN Pradera	La 115	
El Reversadero	La Arenera	ODIN San Javier	ODIN San Javier	Los Conejos	
Las Peñitas	Cuatro Esquinas	ODIN La Quiebra	ODIN La Quiebra	El Coco	
La Arenera	La Pedro J	El Pesebre	El Pesebre	La Agonía	
Cuatro Esquinas		El reversadero	El reversadero	La seis	
La Sexta		Los Conejos	Las Peñitas	Los Picuas	
La Agonía		La Arenera	Los Conejos	La Divisa	
20 de Julio		Cuatro Esquinas	La 39		
El Depósito		La sexta	El Coco		
El Hoyo		La Agonía	La Sexta		
El Volao		20 de julio	La Agonía		
Los Pinguinos		El Depósito	20 de Julio		
El Alto		El Hoyo	El socorro		
La Chinga		Los Pinguinos	Los Triana		
Quicorroña		El Alto	La América		
Las Escaleras		La Chinga	Los Pecueca		
Combos de las Independencias 1, 2 y 3		La Quicorroña	El Corazón		
		Las Escaleras	El Dos		
		Combos de las Independencias 1, 2 y 3	La Gabriela		
		La Luz del Mundo	El combo de cristobal		
		La Urba	La Oficina		
		La Placha	Los Picuas		
		El Kilo	La Loma		
		Los Pirusos	Eduardo Santos		
		La Divisa	Bellavista		
			Guadarrama		
			Barrio Nuevo		
			El Plan del Che		
			La banda del viejo		
			Travesías		
			Los Paracos		
			Los del uno		
			La Divisa		
			La Asomadera		

Tabla N°2 Combos y bandas Comuna 13 Fuente: El Mundo, El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación.

Ahora bien, el rastreo señala la aparición en prensa de bandas y combos por año, por lo tanto, la desaparición de alguno de estos grupos en las noticias de los periódicos locales, como se observa en 2013, no implicó necesariamente su desaparición en el territorio, pues

para el año 2014, un periódico local realizó un listado en el que se reconocieron 34 combos afianzados en el territorio, unos con más capacidad expansiva y cantidad de miembros que otros, pero todos con incidencia territorial: Peñitas, La Loma, San Pedro, La Agonía, Los Paracos del Morro, La Torre, Reversadero del Dos, La Sexta, Los del Seis o Los del Hoyo, La Quiebra o Juan XXIII, La Divisa, El Pesebre, Cuatro Esquinas, Plan del Che, Curvitas, Combo de La Boa o La 115, La Luz del Mundo, Altos de San Juan, Altos de la Virgen, La Gabriela, La Pradera parte alta, Santa Rosa de Lima, La Pradera, Metropolitano, Eduardo Santos, Los Conejos, Los Picúas (reducto), El Salado, Los del Uno, El Chispero del 20, Betania, Guadarrama, Plan de Foronda, Los Pirusos (El Colombiano, 2014).

El accionar de esos grupos dependió entonces de los lineamientos que dieran las estructuras paramilitares o macrocriminales a las que estuvieran ligadas, así como a las relaciones de las agrupaciones más pequeñas en el territorio. Por ejemplo, en el sector de Independencias II no cobraban vacuna, pero en el barrio Veinte de Julio sí, se trata de combos enemigos que actúan en un barrio o sector establecido bajo sus propias dinámicas. Otro de los puntos de unificación entre combos se ciñe por relaciones familiares, como en el caso de “Los Pirusos”, conformados por los combos de El Chispero, La Colina y el Veinte de Julio, lo que reitera la influencia que ha tenido la violencia en las divisiones sectoriales y barriales de la comuna:

“Los Pirusos son unidos, es una familia que está regada por todo esto de acá, unos son los que viven por la casa de marucha y los otros son los que viven por acá en el chispero. Son los mismos y justamente por eso es que son estos tres barrios unidos, porque entre familia no se matan” (Entrevista mujer joven N°1, Comuna 13, Medellín, 2017)

Así mismo, el surgimiento acelerado de combos y bandas tras la desmovilización a medias del paramilitarismo, trajo consigo un incremento de puntos de expendio de droga en los barrios. Las entrevistas realizadas muestran que en cada barrio hay por lo menos tres puntos de venta, que a su vez se relacionan con el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos. El microtráfico hace parte de las redes de economía ilegal entre combos, bandas y organizaciones paramilitares que conforman una compleja estructura que ha terminado por permear la vida cotidiana de la comuna.

Sin embargo, esta no es la única fuente de financiación de los combos, también el monopolio criminal de economías barriales que implica participar “*activamente en la cadena de producción, distribución y comercialización de algunos productos básicos de la canasta familiar*” como arepas, huevos y leche (Giraldo, 2014, pág. 64). Igualmente las extorsiones a tiendas, pequeños negocios y transportadores, generan un ingreso diario para esos grupos, que pese a su carácter ilegal, han sabido mezclarse con sectores de la economía legal.

Por otro lado, se supone que la demarcación territorial hecha con el pacto de fusil eliminaría las fronteras para los habitantes de la comuna, pero no fue así con los miembros de los combos ni con los hombres jóvenes o adolescentes que habitan la comuna 13, quienes siguen caracterizados como sujetos peligrosos, cuestión que es reiterativa entre las respuestas de los hombres entrevistados, aunque también entre las de mujeres, que aseguran no verse afectadas por las fronteras sólo por el hecho de ser mujeres.

Anteriormente habían muertos donde fuera, ya no, ya no porque ya las fronteras son marcadísimas, alguien que no es del sector que tenga 14, 15, 16, 17 años no puede entrar a un barrio desconocido porque lo van a matar, porque lo van a jalar, le van a preguntar ‘usted quién es’, ‘de donde es’, ‘usted qué hace por acá’, ‘usted por qué es tan extraño’, ‘usted a quién conoce’. Si usted no conoce a nadie lo van a matar sí o sí y eso no se veía antes. Entonces, por ejemplo una persona de 50 años puede ir y pararse normalmente en El Salado y no lo van a ver extraño si lo ven bien vestido, normal, no va a haber problema (Entrevista a hombre adulto, Comuna 13, Medellín, 2017)

Ese trato diferenciado se debe a que los hombres jóvenes, especialmente si son menores de edad, son señalados de tener más probabilidades de pertenecer a un combo de la comuna o de otros barrios de la ciudad. Esa caracterización ha restringido su movilidad y libre expresión, aunque no estén relacionados con los combos o bandas, pero también a los que sí lo están, poniendo en el ojo del huracán a una juventud volcada a la violencia, muchas veces por engaños o vinculados de manera forzada a través de amenazas y maltratos.

En cuanto a los conflictos vecinales, son los miembros de los combos quienes disuelven las pugnas, sea de manera violenta o por medio de sanciones económicas, tienen sus propias

formas de resolución de conflictos que aplican rápidamente a los problemas que surgen entre vecinos. La ley que rige en los barrios es la que dictan los grupos ilegales, legitimados además porque las personas acuden a ellos por la ineficacia de las instituciones oficiales o por el miedo a denunciar. Su influencia es tal, que según relatos de los habitantes, los combos implementaron en algunos barrios multas que rondan los 200.000 pesos a quien inicie una pelea, haciendo cumplir efectivamente la sensación.

Estaban diciendo que por acá el que peleara esa gente los multaba, los pelaos, que por cada... Ósea si eran tres personas 250 cada uno y dicen pues que tienen una parte pa [inaudible] pero por acá la gente cogió miedo porque como que al principio si les cobraban, se ponían a pelear, entonces el que empieza a pelear es el que paga por los otros dos, entonces por eso yo digo también que la gente...No, no, no esas peleaderas no. Imagínese, quién va a pagar 750 por estar peleando ahí con otros dos. (Entrevista a Magaly, Comuna 13, Medellín, 2017)

Surgen entonces interrogantes sobre el éxito en la ejecución del Proyecto Urbano Integral en la comuna 13 en lo que se refiere a la seguridad y la violencia urbana, lo que hace necesario comprender cómo fue posible la puesta en escena de funcionarios públicos, múltiples obras y planes sociales, sí en el territorio hacían presencia aproximadamente 40 grupos ilegales anexos al paramilitarismo, que con lo dicho, tal y como asegura el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, ejercían tres tipos de control: social y político, económico y territorial, en el que hacen uso de variados repertorios de violencia e intimidación para mantener su dominio (2012, pág. 50).

Reencuentro entre Estados

La presencia desbordada de combos y bandas que ejercen control en los barrios devela una contradicción con la idea de un Estado omnipotente, legítimo y soberano que sostiene el monopolio de la fuerza. Tal contradicción da lugar a la desviación del ideal de Estado planteada por Joel Migdal (2011), pues las prácticas del Estado han estado condicionadas por la existencia y el dominio de grupos ilegales en el territorio.

“El Estado es un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de violencia y conformado por 1) La imagen de una organización dominante coherente en un territorio que es una representación de las personas que pertenecen a ese territorio. 2)

Las prácticas reales de sus múltiples partes. Los Estados reales están determinados por dos elementos, imágenes y prácticas. Estas pueden estar sobrepuestas y reforzarse entre sí o pueden ser contradictorias y mutuamente destructivas” (pág. 34)

En ese sentido, la reforzada presencia institucional posterior al desmonte de las milicias, no fue equiparable a su capacidad de incidencia, control ni legitimidad en los barrios. De hecho, distintas manifestaciones del Estado contribuyeron a la intensificación y continuidad de la violencia, pues el panorama en el que coexisten distintos poderes en diferenciados niveles en un mismo territorio, necesariamente es dinámico y de constante interacción.

En ese sentido, el nuevo encuentro entre grupos ilegales y el Estado parece no haber repetido el patrón de fuerza que se aplicó con las milicias que antes incidían en la zona. Esta vez, la nueva forma en que el Estado hizo presencia acudió al uso del diálogo, los pactos y las transacciones con los armados ilegalmente, reconociéndolos como un par válido con incidencia en los puntos de impacto:

Inicialmente muchas personas de estos grupos a veces iban a las reuniones o personas que participaron en estos grupos iban a las reuniones. Lo otro es también que las obras de ejecución pública no son exentas a estos procesos de vacuna, de ‘venga yo le apoyo, yo le ayudo pero usted me ayuda y yo le mantengo la seguridad’. Muchas personas que se vinculaban a mano de obra no calificada pertenecían a estos grupos, pero se les daba la oportunidad de que participaran. Un poco dejarnos mover libremente por el territorio, no es que les pidiéramos permiso, pero de alguna manera si uno tiene que suscribir ciertos pactos de convivencia en una zona que no se va a limpiar de grupos al margen de la ley y que no por el hecho de que hagamos los proyectos pues también se vayan a erradicar, posiblemente se desplacen, se muevan, porque es una situación que trasciende las intervenciones físico-espaciales. Eh, pero yo lo que siento es que también (silencio) posiblemente con ciertas generaciones pues uno no tenga remedio y posiblemente no puede reparar (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Esto es, que los miembros de los combos hicieron parte de los procesos de participación, lo que los mantuvo informados de cada paso a seguir, obtuvieron trabajo con paga en las obras y además realizaron extorsiones a un proyecto cuyo objetivo era menguar los niveles de

pobreza, generar oportunidades para la equidad y el desarrollo y así lograr una disminución de la violencia.

Con todo lo que eso representó, el papel de los grupos ilegales no paró ahí, los líderes de los combos hicieron las veces de esquema de seguridad en las obras, castigando si robaban materiales o maquinaria, alertando si había una confrontación para que los funcionarios públicos no fueran y avisando cuando todo había pasado para que pudieran volver, esto lo hicieron a través de las personas encargadas de relacionarse con ellos.

El equipo social se encargaba como de ese relacionamiento con ellos también, hubo diálogo, hubo acuerdos como de no agresión, aunque eso era muy volátil pues. [...]Esas personas empezaron a cuidarnos, porque ellos se sentían que nosotros éramos parte ya de la comunidad. Entonces, por ejemplo, a la monita, la llamaban 'Hey monita, dígame a los ingenieros que no suban por aquí hoy, que eso está muy maluco y ya tenemos orden de que nos vamos a enfrentar a las 11' Nosotros al principio disque '¿En serio?' Cuando a las 11 ¡Ta, ta, ta, ta! Y llamaban después de que se enfrentaban 'Monita, ya pueden subir' (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Esa marcada participación e interacción contrasta con el poco o nulo conocimiento de la comunidad sobre lo que ocurrió con las obras, pues ninguna de las personas entrevistadas tuvo información o participó de manera alguna en el proyecto. Y eso, según lo hallado, obedece a varias cuestiones: La primera es la fragmentación espacial y social de la comuna, la segunda tiene que ver con la cooptación de espacios de participación comunitaria por parte de miembros de los combos y la tercera, por las prebendas e intereses individuales que reciben las personas u organizaciones que sí tienen participación.

Por otro lado, la relación de los grupos armados ilegales también se manifestó en el despliegue de su violencia de manera amalgamada con la presencia policiva que tuvo lugar después de las operaciones militares, pues la eliminación de las milicias no sólo permitió la consolidación de los paramilitares en la ciudad, sino que también posibilitó la presencia permanente de Policía y Ejército en barrios donde su presencia antes era escasa, convirtiendo a la comuna 13 en el territorio urbano más militarizado del país (Soycomuna13, 2017):

Tanto la política de Seguridad Democrática como los programas de la Alcaldía parecían suficientemente robustos para desmontar nuevas amenazas. La guerrilla estaba alejada de la ciudad y muy golpeada por la fuerza pública. El pie de fuerza policivo se había incrementado de 4.500 a 5.500 hombres y mujeres (2002-2008) aun cuando estaba lejos de los 10.000 reclamados por Fajardo (Martin, Medellín Tragedia y Resurrección. Mafia, ciudad y Estado. 1975- 2012, 2012, pág. 507).

El aumento de pie de fuerza no incidió en la desconcentración de los homicidios ni generó una reducción de las múltiples violencias que siguieron sacudiendo a la comuna 13, que paradójicamente, se convirtió en uno de los ejemplos más representativo del modelo de transformación urbana de la ciudad. Esa situación sugiere un solapamiento de otras formas de operar de la Fuerza Pública en el territorio, tejidas al parecer, con los mismos hilos permisivos y omisivos del pasado.

La presencia policiva se redujo entonces a actividades secundarias, pues quienes han gestionado la seguridad y la justicia han sido los miembros de los combos y bandas; fueron ellos los que permitieron que se hayan llevado a cabo las transformaciones urbanísticas acaecidas en la comuna. Las instituciones del Estado saben eso, la policía hace presencia, realiza rondas, hacen requisas, pero la idea de orden que ha regido en los barrios de la comuna 13 la han establecido los “muchachos” de los combos, autoridad reconocida tanto por habitantes como por miembros de la policía.

Pues la policía es muy buena pa' desaparecerse, cuando se necesita ya sabe. Pues está, es un visaje, tienen que dar ciertas rondas, tienen que voltiar, tal cosa, pero no sé, pues siempre como cogen a los... pues también ellos tienen que dar positivos, ellos saben, si hay un tema de homicidio en el barrio, al primero que cojan del combo se los achacan, pues se le montan porque ya saben que hay que pasar... y lo presentan como el comandante, pero de ahí pues igual la presencia institucional pues es uno de los sectores más militarizados, vos si vas a ver motos, policía, patrullas al cien, pero nada (Entrevista a líder juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

Los policías se han regido por el dejar hacer y luego “llegar a recoger el muerto”, pero su relación con los combos es mucho más trascendental. Algunos habitantes señalaron que actúan conjuntamente, repartiéndose vacunas para dejar operar a los ilegales y mantener

activas las plazas de vicio, vendiéndoles armas y haciéndoles favores, entre otras situaciones que dejan ver negocios, pactos y alianzas.

Los he visto como llegan a decirle 'Vea, ese man está en tal hospital, vaya que le damos luz verde' y les pagan vacunas... y cosas que nos cuentan, que uno se da cuenta en el barrio, que uno no las ve, pero igual si se mueven, que les venden fierros, que les dan luz verde para ir a matar a un man. Es que incluso son tan ratas que trabajan con todos los combos, entonces a cada uno le sacan jugo (Entrevista a líder cultural, Comuna 13, Medellín, 2017)

Así, se mantuvieron fuertes los combos y bandas, pues continuaron operando en los barrios sin mayores obstáculos para llevar a cabo las distintas acciones que dan continuidad a la violencia en la ciudad, pues no solo la omisión, sino la permisividad y la participación activa del Estado en la consecución de los objetivos trazados por las estructuras criminales, contribuyó a su robustecimiento y permanencia territorial.

De ese modo, el discurso institucional y las diferentes posturas de todos los sectores que defienden la idea de una transformación positiva en las comunas populares de Medellín a raíz del fortalecimiento del Estado en lo local y la implementación del Urbanismo Social, resulta más superficial que profunda. Con ello se refuerza la idea de un Estado magnánimo y renovado, con una nueva mirada sobre los territorios empobrecidos, mientras que las disimilitudes en los barrios señalan que las raíces de la violencia permanecen robustas en medio de una pacificación incierta y volátil.

Las violencias soterradas en la comuna 13

Las estrategias de seguridad implementadas en la comuna 13 han fluctuado y se han transformado con el paso del tiempo, pues después de las severas operaciones militares, se han extendido en el territorio otras formas más flexibles de intervención estatal a través del denominado Urbanismo Social. Pese a los cambios ocurridos, los discursos que han justificado el accionar del Estado en la comuna, han estado enfocados en la reducción de homicidios sin que las medidas aplicadas hayan sido efectivas en la consecución de la abolición o la reducción de ese tipo de hechos.

A ello se suma la ocurrencia de otras modalidades de violencia que mantuvieron su intensidad y que han sido omitidas en su consideración para medir el comportamiento de

los grupos armados en esa parte de Medellín. Así se encuentran la omisión sistemática de desplazamientos forzados intraurbanos, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los combos y bandas que operan en la zona, la desaparición forzada de personas, las amenazas a líderes sociales y las agresiones físicas. El ocultamiento de esa realidad genera una revictimización de quienes padecen esos flagelos y desdibuja la profundidad de las problemáticas que perviven en la comuna.

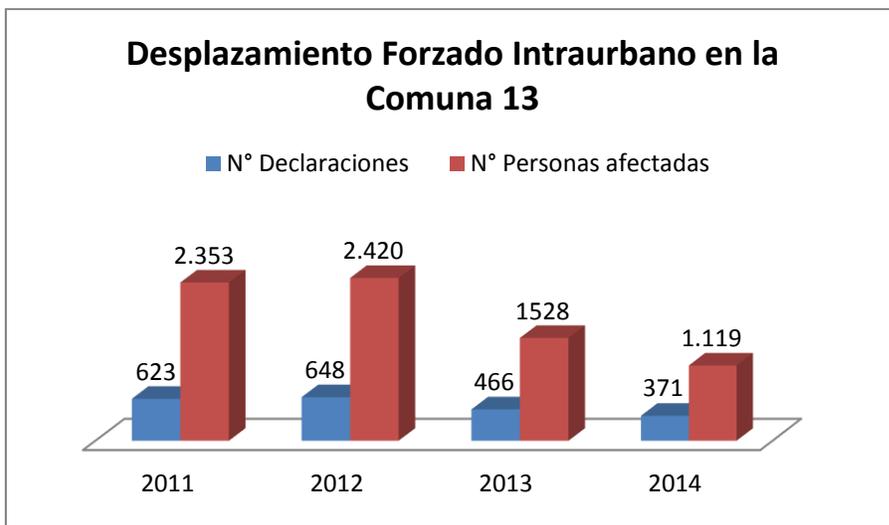
En primer lugar, la comuna 13 adquirió entre los años 2004 y 2014 un papel protagónico en los desplazamientos forzados intraurbanos, siendo en esos años la mayor expulsora de habitantes en toda la ciudad. Los Informes de Personería de Medellín muestran como, año tras año, ese fenómeno tuvo lugar en la comuna, sin contar con una cifra exacta de los masivos desplazamientos durante y después de las operaciones militares, especialmente con Mariscal y Orión.

Se estima que para 2004, dos de cada tres personas registradas como desplazadas intraurbanas en Medellín lo eran por hechos violentos que habían tenido lugar en la comuna 13 (Personería de Medellín, 2004, pág. 12). En 2006 fueron desplazadas 65 familias del Barrio El Salado y para ese año entre los barrios de toda la ciudad con mayor número de desplazamientos, se encontraban los barrios San Javier 1, San Javier 2 y Veinte de julio (Personería de Medellín, 2006, págs. 22-23).

Durante el 2008 ese comportamiento se elevó, las comunas 13, 1, 8 y 3, que fueron expulsoras del 50% de la población que declaró el desplazamiento forzado en la Unidad Permanente de Derechos Humanos (Personería de Medellín, 2008, pág. 26); y en el año 2009, con el aumento de homicidios por la confrontación entre facciones de la Oficina de Envigado, aumentaron aún más los casos de desplazamiento forzado en la ciudad, donde las comunas 1, 13, 3, 9 y 8, en ese orden, fueron las principales expulsoras (Personería de Medellín, 2009, pág. 18).

Esa tendencia se mantuvo en los 5 años siguientes, pues en 2010 la comuna 13 continuó como la más expulsora de población victimizada en Medellín, con el 21% del total de casos en toda la ciudad (Personería de Medellín, 2010, pág. 15), igualmente ocurrió durante los

años 2011, 2012, 2013 y 2014³, en donde más de 7.000 personas fueron desplazadas de este territorio.



Gráfica N°2 DFI en la Comuna 13 2011-2014 Elaboración propia con datos de la Personería de Medellín

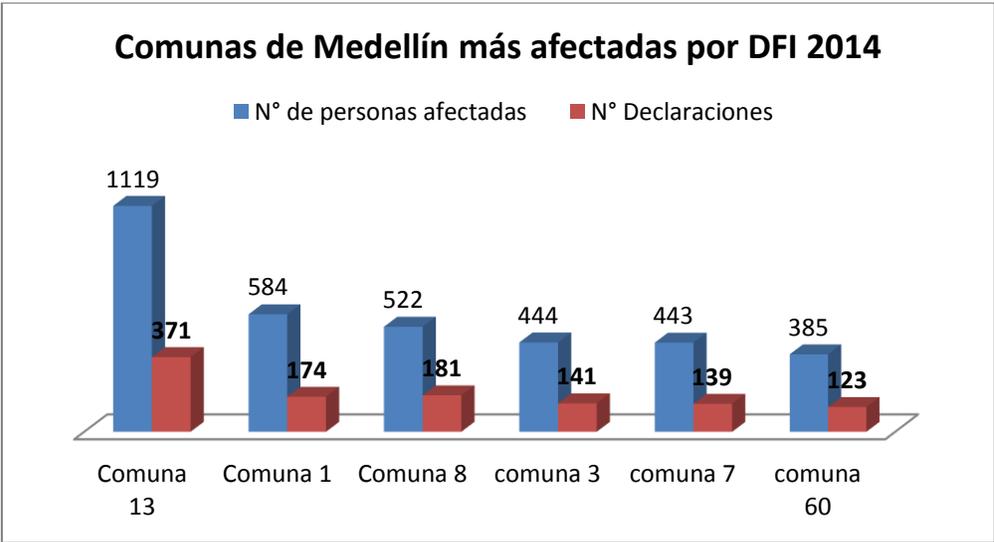
El comportamiento estadístico de los desplazamientos forzados en la comuna 13 constata la estrecha relación entre su aumento o descenso y el de la violencia homicida, así como la ubicación de esas formas de victimización en determinados territorios, notándose una leve reducción desde el año 2013, aunque manteniéndose la focalización territorial de los crímenes.

Esa sincronía es susceptible de explicarse en la Comuna 13 por la cantidad de organizaciones armadas ilegales que hacen presencia allí, ya que si bien todos tienen orientación paramilitar, también es cierto que pertenecen a estructuras diferentes y operan de forma diferenciada en el territorio, en ese sentido, cuando las disputas florecen y se rompen los pactos, la confrontación letal retorna con fuerza, igual que otros hechos victimizantes como los desplazamientos forzados dados en el marco de un ejercicio de control e imposición de poderes.

³ En 2011 se registraron 623 declaraciones por Desplazamiento Forzado Intraurbano con 2.353 personas afectadas. Ver Informe 2011 de la Personería de Medellín, pág. 44; En 2012 hubo 648 declaraciones que involucraban a 2.420 personas y en 2013 se registraron 466 declaraciones con 1528 personas afectadas. Ver Informe 2013 de la Personería de Medellín, pág. 150; En 2014 hubo registro de 371 declaraciones con 1.119 personas afectadas.

Es por esto que a partir de 2013, cuando se establece en la ciudad el pacto del fusil, disminuyeron levemente los homicidios y los desplazamientos forzados en la Comuna 13, pues los combos coexistieron bajo una tensa paz que modificó los objetivos de su accionar, ya que en la medida en que todo estuvo definido y ordenado por los altos mandos, no era necesario que en la dinámica barrial de los grupos se ejerciera un control marcado sobre la población ni que se presionara el gatillo contra los miembros de otros combos.

Con todo, las cifras de Desplazamiento Forzado Intraurbano en la Comuna 13 continuaron siendo alarmantes un año después de establecido el pacto, estando muy por encima de las otras comunas afectadas por este hecho victimizante.



Gráfica N°3. Comunas de Medellín más afectadas por DFI 2014. Elaboración propia con datos de Personería de Medellín.

Los informes de la Personería de Medellín también señalan una ocurrencia importante de Desplazamientos Forzados Intraurbanos en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista, territorios colindantes con la comuna 13 que han sido estratégicos para todos los actores armados por sus conexiones rurales con esa parte de la ciudad. *“El lindero con La Loma es el lugar con mayor control territorial en la zona, donde coexisten las alianzas paramilitares, no ha cambiado eso”* (Entrevista a líder juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

De ese modo, las cifras parecen corresponderse con un relacionamiento de esos corregimientos con la conflictividad persistente en la comuna, así lo refuerzan los relatos de las distintas entrevistas donde identifican estos dos corregimientos como puntos clave de la confrontación y las disputas en la comuna:

Sí, lo que es el barrio El Salado y Veinte de Julio porque es la conexión con Belén Altavista. En las partes altas en lo que es La Quiebra, lo que es La Loma [San Cristóbal]; La Loma porque es el corredor donde llega desde allá del Urabá todo, entonces ahí es la más caliente, ahí es donde se baja todo para toda la comuna. (Entrevista a líder cultural, Comuna 13, Medellín, 2017)

Evidencian que la conexión barrio-corregimiento es una constante asociada a la confrontación y a un control territorial mucho más fuerte. “*Lo que es el Veinte de Julio, La Torre, Independencias I, II y III y La Loma. Porque siempre surgen las guerras es porque se meten o por La Loma o por Belencito*” (Entrevista a Jhon, Comuna 13, Medellín, 2017). Y es que dentro de los intereses de los grupos armados ilegales resulta fundamental el control espacial del territorio, especialmente de los sectores que contienen características geoestratégicas para la estabilidad y continuidad de la hegemonía armada, para lo que se despliegan mecanismos de intimidación y control que involucran amenazas y desplazamiento forzado de población.

Eso además explica porque los desplazamientos masivos que sucedieron en el año 2011 en Medellín se ubicaron en estos territorios, uno en la vereda Bella Vista parte alta del corregimiento de San Cristóbal, otro en el barrio Las Flores del mismo corregimiento y uno más en el barrio Las Independencias de la comuna 13. Del mismo modo, entre los hechos más destacados en los años siguientes se encuentran la expulsión masiva de 22 familias de los barrios El Salado y Nuevos Conquistadores en 2012. También en 2013 ocurrieron tres desplazamientos masivos en la ciudad, todos involucraban a la comuna 13 y las zonas colindantes, pues dos de ellos ocurrieron en La Loma (San Cristóbal) y uno en Nuevos Conquistadores con 122 familias afectadas y un total de 416 personas involucradas⁴.

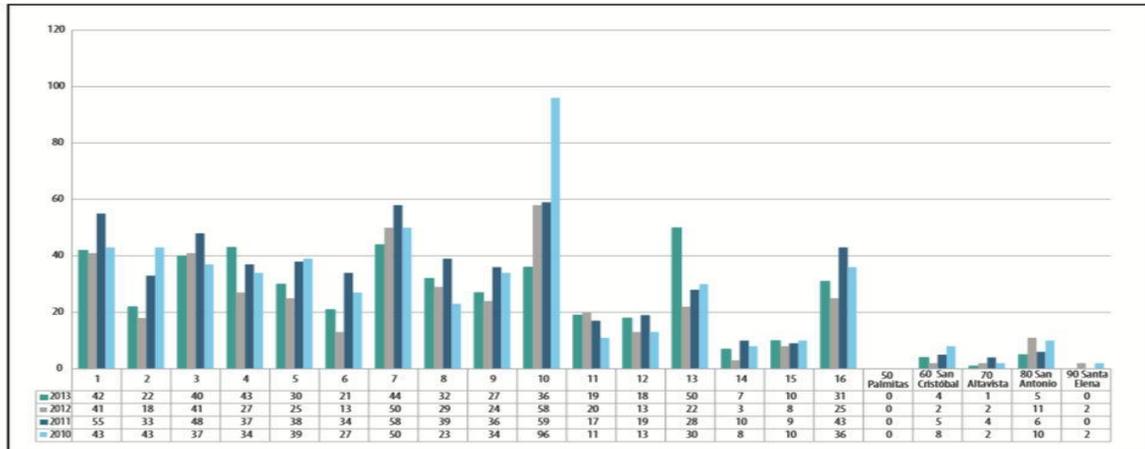
⁴ Para más información sobre estos desplazamientos masivos ir a los Informes de la Personería de Medellín de los años 2012, pág. 88 y 2013, pág. 152

En la perpetración de los desplazamientos forzados se encuentra que estas fueron el resultado de la implementación de otras modalidades de victimización, como amenazas⁵, intentos de reclutamiento forzado, agresiones físicas, violencia sexual y hasta homicidios ejecutados por los grupos ilegales.

Sobre la responsabilidad de los crímenes, en las declaraciones de los Desplazamientos Forzados Intraurbanos perpetrados en el año 2011, las víctimas señalaron como victimarios al grupo armado del barrio, combos y bandas como La Agonía, grupos paramilitares, grupos de autodefensa, desmovilizados y reinsertados (Personería de Medellín, 2011, pág. 44) lo que da muestras claras de la continuidad del accionar violento de los grupos que hicieron parte del proceso de desmovilización, poniendo en entredicho la eficacia del mismo y el divulgado renacer de la ciudad.

Por su parte, el drama de la desaparición forzada en la comuna 13 continuó como práctica de los grupos ilegales sin que se generara un esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido con las víctimas directas de esos hechos. Aunque en comparación con comunas de la zona norte de la ciudad, las cifras de desaparición forzada menguaron durante los años de confrontación entre las facciones de la Oficina de Envigado, el flagelo continuó siendo perpetrado en el año 2013, cuando allí se presentaron 50 reportes de personas desaparecidas.

⁵ En lo que se refiere a las amenazas cometidas en la comuna 13, ese territorio también se sostiene durante varios años como el lugar en donde tuvo mayor recurrencia esa forma de victimización. En el año 2011, son amenazados 11 líderes comunitarios en cercanía a los corregimientos vecinos, 2 de ellos en San Cristóbal y 5 en Altavista (Personería de Medellín, 2011, pág. 24) En 2013 es la comuna con mayor número de amenazas en los barrios San Javier N.º 2, El Salado, Nuevos Conquistadores, Veinte de Julio, Independencias, Juan XXIII y Belencito. (Personería de Medellín, 2013, pág. 18)



Personas reportadas como desaparecidas por comunas y corregimientos en Medellín, 2010 a 2103

Gráfica N°4. Personas reportadas como desaparecidas 2010-2013 Fuente: Informe Personería de Medellín 2012, pág.26

En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2013, 130 personas fueron reportadas como desaparecidas en la comuna 13, cifra que continua siendo alarmante, máxime cuando no ha habido respuestas por las desapariciones ocurridas durante y después de las operaciones militares.

Por otro lado, un informe sobre reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes realizado por la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señala a la comuna 13, junto a las comunas 1 Popular y 8 Villa Hermosa, como los territorios que representan un mayor riesgo de reclusión, utilización y vinculación de dicha población a los combos y bandas que operan allí, lo que está estrechamente asociado con las amenazas y la expulsión del territorio cuando se niegan a hacer parte de los grupos ilegales que hacen presencia. (2015, pág. 70).

Ahora bien, esta problemática concentrada en la comuna 13 no puede reducirse a la cuantiosa presencia de combos y bandas existentes en cada barrio, pues si bien allí se agrupan los victimarios, el control territorial que ellos ejercen es solo uno de los factores de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el informe mencionado presenta algunos factores que potencian su vinculación, utilización y reclutamiento en grupos al margen de la ley, así:

- Factor cultural: El sistema de valores dominantes en una sociedad en la que portar un arma está asociado con masculinidad y poder, puede despertar el deseo de pertenecer a un grupo armado.
- Factor de desprotección y abandono: No contar con protección frente a las amenazas y acoso de los grupos que ejercen control, los impulsa a hacer parte de grupos armados de oposición para protegerse.
- Factor económico y social: Vincularse a grupos ilegales se presenta como una opción de sobrevivencia y un medio para suplir las necesidades de su entorno familiar.
- Factor de abuso y maltrato: Buscando huir de situaciones de maltrato y violencia intrafamiliar, terminan por encontrar en los grupos ilegales una posibilidad de escape al sufrimiento que viven en sus casas.
- Factor de género: El reclutamiento, la vinculación y utilización de niñas para el conflicto es cada vez más recurrente, no sólo con fines de explotación sexual, también para el transporte de armas, droga, para realizar asesinatos y seducir al enemigo. (pág. 20-22).

De ese modo las condiciones del entorno de las víctimas y su situación familiar inciden fuertemente en la continuidad de este hecho victimizante en la comuna, pero su permanencia obedece a falencias de orden estructural donde se vulneran de forma sistemática los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin que se lleven a cabo acciones eficaces por parte del Estado para evitarlo de manera más efectiva.

Pese a que los hechos señalan un deficiente cubrimiento estatal de las condiciones que transgreden la integridad de esta población, el PUI sostuvo que su acción iba dirigida a las generaciones futuras, sin considerar la dinámica cíclica de la violencia en los barrios y la sucesión de mando predispuesta en los grupos ilegales. *“son pelaos de máximo 18 años y no son uno solo, son por ahí 5 o 6 que manda por si cogen a uno queda el otro y así sucesivamente”* (Entrevista a Jhon, Comuna 13, Medellín, 2017)

En ese ciclo violento se aplican modalidades victimizantes como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, con el fin de engrosar las estructuras al margen de la ley y

prolongar su accionar; renovación constante que desencadena otra serie de hechos violentos que ocurren de manera simultánea en un mismo territorio, dando continuidad indefinida a la marcada, pero profusa violencia de los últimos tiempos.

Un PUI es hecho para las generaciones que vienen, no para estas, ósea nuestro target yo creo que no es esa población que está pues ya metida por historia y por herencia en grupos delictivos y que roban y que toda la cosa, sino que está más orientado hacia otros, pero con ellos sí ha tocado hacer pacto (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

De esta forma es evidente que la complejidad del reclutamiento forzado y de las múltiples violencias desatadas en la comuna 13 se acorta hasta el punto de invisibilizarlas y ubicarlas como comportamientos delictivos adquiridos por herencia. No hubo un dimensionamiento real de todas las aristas que forman la violencia, esencialmente de aquellas estructurales como la desigualdad y la pobreza que desencadenan otras conflictividades en los entornos familiares y recrean constantemente ambientes hostiles donde los mayores afectados son los niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el proyecto de estos grupos, además de requerir crecimiento y expansión a partir de la incorporación forzada de población vulnerable y de establecer un dominio territorial y poblacional a través de variados repertorios de violencia, también debe fortalecerse económicamente, para generar rentabilidad en el ejercicio violento un interés que no está absuelto de disputas entre los diferentes grupos que se encuentran atomizados en el territorio. *“Los combos vacunan, pues hay combos que piden vacunas, pero entonces ellos tienen sus sectores, bueno y por eso es que aparecen por ahí peleando, porque unos se quieren pasar pa’l sector de los otros por ganar las vacunas”* (Entrevista a doña Mery, Comuna 13, Medellín, 2017)

Entre las diversas formas que han implementado los combos y las bandas para asegurar millonarios ingresos diarios, se encuentran las extorsiones a tiendas, pequeños negocios y transportadores, delito que también implica el uso de formas de intimidación y de violencia directa a quien se niegue a pagar la cuota requerida por los combos.

Las bandas estudian el nivel de ingresos de los comerciantes, establecen cuotas de acuerdo a la actividad económica, determinan quiénes van a pagar, cuándo y a quién. A diferencia de lo que sucede con los impuestos del Gobierno, donde las sanciones por morosidad las determina la Ley, en las comunas de la capital antioqueña quien no paga pone en riesgo su vida. (Instituto Popular de Capacitación, 2010).

Sin embargo, no todo ha sido silencio frente a estos hechos, los transportadores de la comuna 13 han salido a paro en reiteradas ocasiones, como ocurrió en el año 2013, por el riesgo permanente que corrían en su trabajo, esperando que las extorsiones pararan y así poder conseguir garantías de seguridad. Algunos habitantes también se han atrevido a denunciar, pero no se obtienen resultados efectivos, incluso esta práctica ocurrió en presencia de los funcionarios del PUI y de la Policía, sin repercusiones negativas para estos grupos ilegales, lo que obstruye cualquier vía de auxilio para quienes se ven obligados a pagar las cuotas extorsivas, además de develar omisión y permisividad por parte del Estado frente a las extorsiones en los barrios.

Mira, en ese mismo proceso cuando vos vas también de la mano con las comunidades y de los líderes, indiscutiblemente, las vacunas son una realidad, porque son las fuentes de ellos y uno estando allá, uno ve cuando pasa el man con un fajo de 2.000 pesos, ¡Pero fajos, son fajos! De coger los 2.000 pesos de todas las tiendas, todos los días, tienen que dar 2.000 todos los días y uno miraba eso y uno decía ‘Ay dios mío ¿Qué es esto?’ (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

En ese sentido, la existencia de un accionar conjunto, explica la sistematicidad de hechos violentos junto a la concentración de homicidios y desplazamiento forzado, pues la inoperatividad del Estado frente a estos flagelos esta demarcada por las alianzas establecidas en los territorios con los combos y bandas que actúan de forma diferenciada en la comuna.

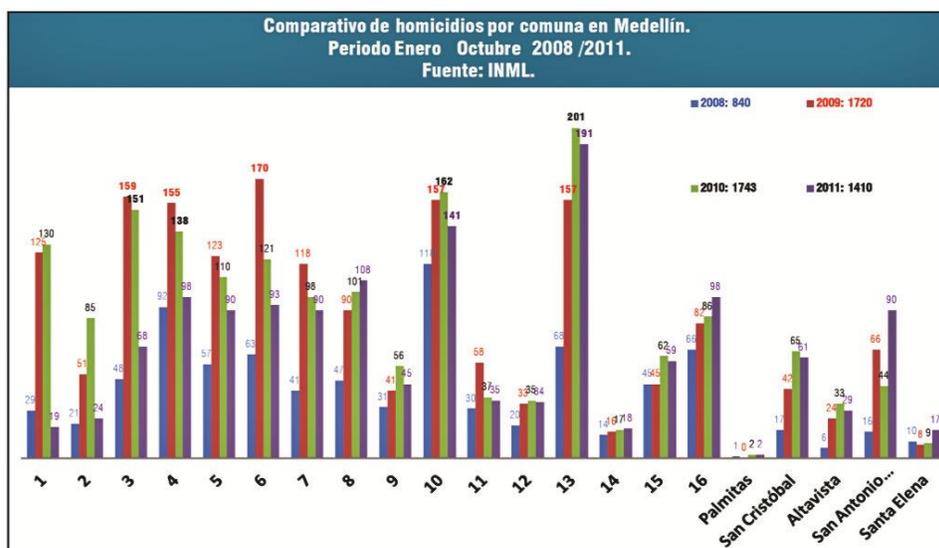
Hay cosas como muy temerosas frente al tema institucional, ósea hay que camellar muy duro, pues ellos conocen donde es que están las estructuras, qué generan, quienes son o demás, ¿Sí? pero coexisten, creo que hace falta mucha vuelta de parte de la institucionalidad para que eso suceda; mucha vuelta como pa’ que uno diga ‘no esto está una chimba’ eso es mentira. Vea por ejemplo el caso mío, ósea cómo que yo viviendo, soy del territorio, no puedo ir a mi casa ¿Sí? O cómo mucha gente viviendo

en el territorio no puede ir a otros barrios. Ósea aquí puede viajar, sí, pero si es turista, pero si es del territorio no. (Entrevista a líder juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

De ese modo, el aumento de presencia policiva y la aplicación de dispositivos de seguridad brindan la ilusión de un ambiente seguro para el visitante y el turista, sin embargo, los habitantes de la comuna permanecen en un estado de vulnerabilidad y desprotección frente al actor armado ilegal, especialmente aquellas personas que promueven relaciones comunitarias por fuera de los intereses turísticos que demarcan la utilización del espacio público.

El Proyecto Urbano Integral y la violencia homicida en la comuna 13

Paradójicamente, mientras en la comuna 13 se desarrollaba la mayor parte de las obras del PUI (2008-2011) a las que se le ha atribuido gran parte de las transformaciones barriales en materia de seguridad y desarrollo, las cifras de asesinatos aumentaron, convirtiéndose en 2010 y 2011 en la comuna con más altos índices de homicidios en toda la ciudad. Mientras el Estado aplicaba una nueva metodología de intervención en los territorios, los grupos ilegales demostraban su poderío territorial, pues el incremento de homicidios no sólo se evidenció en la cifra total de la ciudad, sino también en sectores y barrios de la comuna donde por años se han concentrado hechos violentos.



Gráfica N° 5. Comparativo de homicidios por comuna 2008-2011. Fuente: Informe Personería de Medellín 2011, pág. 18

Si partimos de una mirada micro-territorial, el seguimiento en las cifras de homicidio en cada barrio de la comuna 13 con influencia del Proyecto Urbano Integral, señala un incremento que coincide con las transformaciones a nivel ciudad en la violencia homicida, atribuidas a la extradición de “Don Berna” y la fragmentación de la Oficina de Envigado y la confrontación entre las facciones de alias “Sebastián” y alias “Valenciano”, lo que demuestra el nivel de alcance de los mandos paramilitares en la dinámica criminal urbana, su capacidad de incidencia territorial y el poderío que aún sostienen en los barrios populares de Medellín.

Ahora bien, las obras que hacen parte del Proyecto Urbano Integral en la comuna 13 inician en el año 2006 y culminan a finales del 2011, un periodo de seis años en el que sólo en el barrio Las Independencias se presentaron 115 homicidios. Las estructuras ubicadas estratégicamente y las transformaciones espaciales que iban llegando con ellas año tras año, no impidieron la ocurrencia de hechos violentos.

De este modo, los barrios Las Independencias y Veinte de julio, donde se concentran los principales equipamientos institucionales del PUI, así como los barrios que se conectan a ese núcleo urbano, presentaron una contradicción con el presupuesto de pacificación atribuido con vehemencia en los últimos años a las intervenciones territoriales del Urbanismo Social, disminuyendo así las continuidades de una violencia con profusas variaciones en toda la ciudad, pues mientras el Estado ponía su sello con cada obra, los barrios seguían marcados por la muerte, desintegrando así la justificación de su nueva intervención.

Barrio Las Independencias											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	7	8	<u>7</u>	<u>13</u>	<u>18</u>	<u>16</u>	<u>31</u>	<u>30</u>	23	4	10

Barrio Veinte de julio											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	3	5	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>11</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	10	20	6

Tablas N° 3 y 4 Homicidios en Independencias y Veinte de Julio. Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

De la misma forma sucedió con los barrios Nuevos Conquistadores y El Salado, que fueron impactados por el “efecto de la mano” de los PUI, que según el movimiento radial en donde el centro es el barrio Las Independencias. Estos muestran la misma tendencia ascendente en los homicidios desde 2009 hasta 2013, con un total de 52 homicidios en El Salado y 65 en Nuevos Conquistadores durante el periodo de tiempo (2006-2011) en que se desarrolló el PUI en la comuna.

Barrio El Salado											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	1	1	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>19</u>	25	13	9

Barrio Nuevos Conquistadores											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	1	1	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	<u>16</u>	<u>20</u>	<u>12</u>	9	13	4

Tabla N° 5 y 6 Homicidios en El Salado y Nuevos Conquistadores. Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia –SISC-

El fenómeno se repite con los otros barrios de intervención, es decir, barrios como Juan XXIII, donde se concentra gran parte de las obras asociadas al metrocable, y barrios como El Socorro y Antonio Nariño donde la intervención fue menor. No obstante, la intensidad es más baja en el sector de Juan XXIII y El Socorro, a diferencia de Antonio Nariño que es un barrio más grande, ubicado cerca de la zona de la centralidad urbana, es decir, de Independencias y Veinte de Julio y el cual cuenta con una historia de influencia de bandas y grupos paramilitares

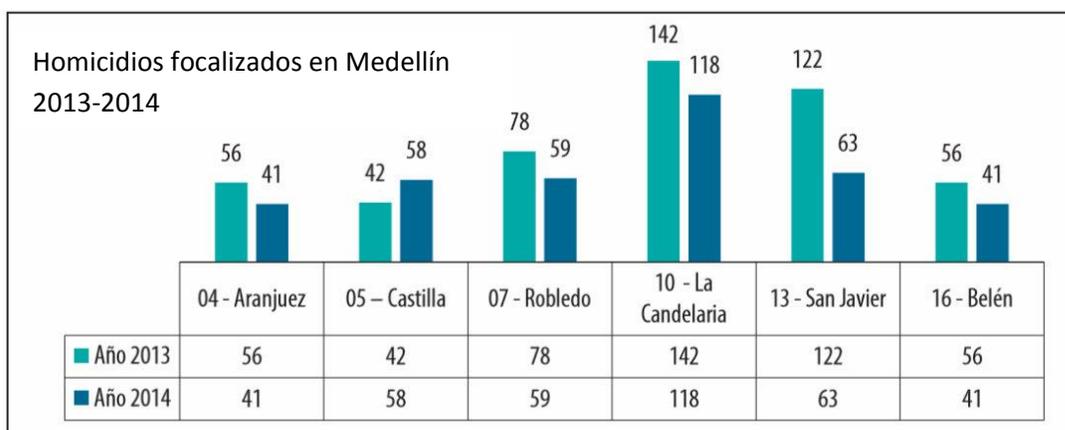
Barrio Juan XXIII											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	2	3	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	14	5	6

Barrio El Socorro								
Año	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013
N° Homicidios	2	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	9	6

Barrio Antonio Nariño											
Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N° Homicidios	5	2	3	4	11	23	19	19	15	10	4

Tablas N° 7, 8 y 9 Homicidios Juan XXIII, El Socorro, Antonio Nariño. Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia- SISC-

Por otra parte, el pacto del fusil ocurrido en 2013, sí representó un descenso considerable de homicidios en la comuna, pero este sólo fue categórico a partir del año 2014.



Gráfica N° 6 Homicidios focalizados en Medellín 2013-2014. Datos del INMLCF
Fuente: Informe Personería de Medellín 2014, pág. 34

Con todo, esta comuna se mantuvo como la segunda con más altos índices de violencia homicida en esos dos años, lo que evidencia que a pesar de las fuertes operaciones militares, la nueva intervención estatal en el territorio y los pactos criminales, la concentración de muertes violentas no se modifica.

De esta manera, la desviación institucional desenmascara la estrategia de seguridad inserta en el Proyecto Urbano Integral y presenta las causas subrepticias de su inherente debilidad, por tanto, esta no pudo contener dinámicas violentas fuertemente arraigadas, más bien, el posicionamiento discursivo de su efectividad contribuyó al ocultamiento de las muertes violentas.

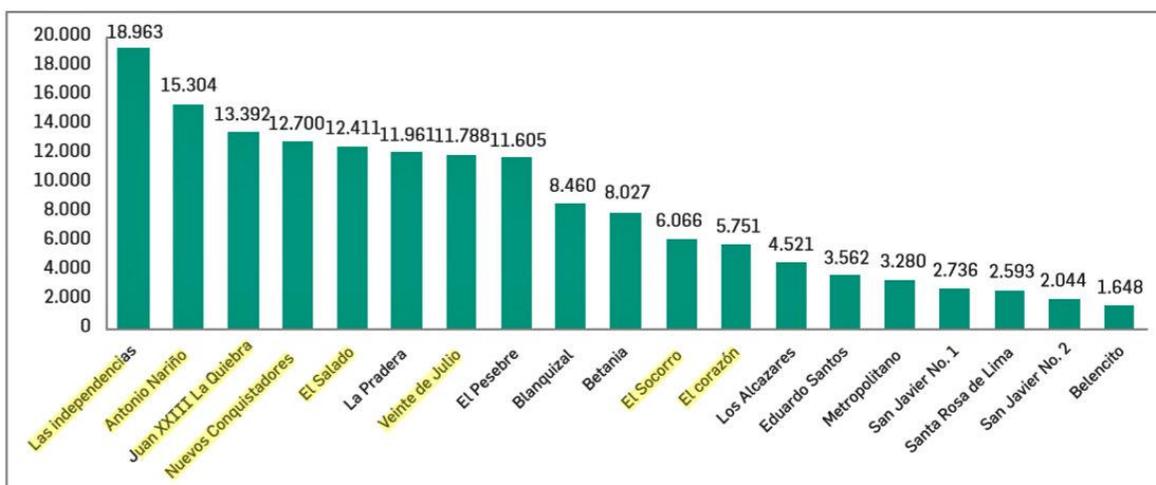
La centralidad urbana y la concentración de la violencia

Pese a que la comuna 13 concentró gran parte de las muertes violentas en la ciudad, las expresiones de violencia no se manifestaron de forma homogénea en sus barrios, lo que revela las particularidades propias de la trama barrial y la necesidad de profundizar en ellas para comprender la centralidad que los distintos actores desde sus intervenciones le han dado a ciertos barrios.

Entre esos barrios de la comuna 13, Las Independencias ha cobrado un protagonismo especial para los desarrollos de la violencia, lo que se ha traducido en la concentración de sucesos violentos en ese sector y barrios aledaños. Así, Las Independencias y barrios como Nuevos Conquistadores y El Salado contienen unas características particulares que han influido en la concentración de hechos violentos a lo largo del tiempo, así con la influencia miliciana, la incursión paramilitar y las operaciones militares.

Los relatos y las cifras presentan una sistematicidad de hechos violentos en barrios como El Salado, El Socorro y Las Independencias, que entre 2012 y 2013 hicieron parte de los barrios más afectados por violencia homicida en Medellín. (Personería de Medellín, 2013, pág. 35), evidenciando que la concentración de violencia no es sólo comunal, sino también barrial y que la intervención del Estado para incluir y asegurar esos territorios a través del PUI ha sido insuficiente o desviada, pues la ubicación de los proyectos en los barrios de la comuna coincide con la condensación de los homicidios, situación que revela la disonancia entre el discurso estatal, la aplicación territorial del Proyecto Urbano Integral y sus resultados.

Ahora bien, la densidad poblacional de los barrios de la comuna 13 es otra cuestión importante a la hora de revisar la concentración de la violencia, que a su vez se refleja en la aglomeración de las viviendas y la falta de espacio público en ese sector, lo cual, como vimos, ha sido funcional para los actores armados. Las Independencias concentran el 12% del total de la población de la comuna, mientras que los barrios Belencito, San Javier 1 y 2, Santa Rosa de Lima, Metropolitano y Eduardo Santos suman tan solo el 10% del total de la población.



Gráfica N°7. Número de habitantes por barrio de la Comuna 13. Concentración poblacional por Fuente: Plan de Desarrollo Local Comuna 13, 2014, pág. 51

De este modo, el incremento de bandas y combos en la comuna 13, después de la desmovilización parcial de los paramilitares, extendió su ocupación territorial a estos barrios y estableció un control más fuerte en esta zona, cuestión que con las disputas de la Oficina de Envigado se recrudeció, dando paso a una confrontación a muerte entre combos. Se fragmentó aún más la dinámica barrial, pues las disputas entre un barrio u otro, están asociadas al control de puntos de expendio, extorsión a negocios o pertenencia a estructuras paramilitares diferentes, lo que demarcó fronteras territoriales que dependen del combo al mando o de los frágiles pactos establecidos por los altos mandos.

En suma, la posición de dominio en el barrio la asumen todos los combos que hacen presencia y su convicción de poder no prescinde de la intimidación, la vulneración de derechos y la expulsión de población en su ejercicio de control territorial. Por otro lado, cuando las fisuras de lo pactado se hacen manifiestas en lo barrial, las disputas pasan a la agresión letal, así, es nuevamente el sector de mayor extensión, con mayor concentración poblacional, de una compleja construcción físico-espacial y donde se fijan un mayor número de grupos ilegales, el que vuelve a concentrar la violencia homicida en la comuna.

La tensa calma

En la comuna se vive entre una tensa calma, pues la gente sabe desde su propia vivencia que la violencia tiene ritmos, se transforma y que en cualquier momento todo puede

empeorar. Mientras tanto, la inconsistencia de la estrategia social y securitiva del Urbanismo Social en el territorio se hace evidente porque, en primer lugar, la gestión de los homicidios en la ciudad está a cargo de los grupos ilegales sin que se presenten acciones conjuntas entre gobierno nacional y local para desmontar las estructuras paramilitares de mayor alcance a las que están subordinados los combos.

Se han omitido otras violencias que pese a su cantidad, continuidad y concentración en el territorio, se vuelven cada vez más silenciosas, menos visibles, parece que tanto los grupos ilegales como el Estado, coinciden en que la seguridad se mide en las cifras de homicidios, pues ambos han apuntado su accionar al ocultamiento y la reducción de los asesinatos en la ciudad cuando las condiciones lo exigen.

Tal vez, después de las operaciones militares que erradicaron a las milicias, aplique lo que María Teresa Uribe (1998) llama una estatalización de las violencias, puesto que *“La presencia omnipotente del Leviatán no hace desaparecer la guerra y la violencia, las estataliza, les pone límites, las domestica y las sitúa en las fronteras geográficas del Estado o en sus límites político culturales e ideológicos”*, lo que posibilita las alianzas en objetivos comunes como la reducción de homicidios en la ciudad o la ejecución de megaproyectos en territorios antes inaccesibles para el Estado que concreten la proyección internacional de una Medellín incluyente e innovadora a pesar de las incisivas contradicciones en los territorios.

CAPÍTULO IV

Modelo urbano para el capital

La magnitud de la violencia que durante los años 80 y 90 azotó a Medellín hasta envolverla en una guerra urbana sin precedentes, parece haber desfigurado la importancia de las manifestaciones violentas que se posaron en los barrios durante los últimos años. Las armas y las drogas se ajustaron al paisaje urbano como un elemento natural del barrio, porque “son los pelaos del barrio”, porque “no pasa nada si uno no se mete con ellos” o sencillamente porque ya “se matan es entre ellos”. Afirmaciones cotidianas que son reflejo de la realidad que se ha vivido en muchos de los barrios populares de la Medellín innovadora.

Con todo, este escenario no impidió el renacimiento de Medellín en materia de inversión económica ni obstaculizó una serie de transformaciones desatadas con el nuevo modelo urbano, como las obras físicas que han ampliado la cobertura en educación, deporte y cultura, la conexión geográfica de la ciudad gracias a la ampliación del sistema integrado de transporte masivo, el acceso a barrios periféricos con la construcción del metrocable y la acción conjunta entre gobierno local, universidades y sector privado, que le han dado a Medellín múltiples reconocimientos internacionales asociados al turismo, la educación y la sostenibilidad⁶, entre ellos, el otorgado por el diario *Wall Street Journal* y el *Urban Land Institute* –ULI- que la posicionó en el 2013 como la ciudad más innovadora a nivel mundial y la ha convertido en epicentro de grandes eventos de alcance internacional.

Como se enunció antes, las transformaciones ocurridas en Medellín obedecen a una nueva forma de pensar y hacer la ciudad que empezó a gestarse en el marco de apertura económica del país en los años noventa, donde se da el tránsito de una economía basada en la producción industrial a una fundada en la prestación de bienes y servicios. No obstante, a esta altura es importante resaltar que esa transformación requiere para su estabilidad y crecimiento la promoción de la ciudad a nivel internacional con el fin de atraer inversionistas y visitantes que amplíen la oferta y la demanda. Para lograr ese objetivo, se establecieron las siguientes categorías generales en la producción de las ciudades:

1. La competitividad y la generación de crecimiento endógeno: Articular los sistemas productivos y redes urbanas próximas.
2. El fortalecimiento de la descentralización: Autonomía en el manejo de recursos público provenientes de la nación y en el recaudo de recursos propios, con el fin de aumentar la eficiencia de su aparato burocrático.
3. El control de la conurbación: Limitar la expansión descontrolada de asentamientos urbanos hacia las zonas rurales.
4. El fortalecimiento de la ciudad- región: Conectar a través de redes a la ciudad con municipios vecinos (Zapata, 2015, pág. 100).

⁶ Premio Global Knowledge Partnership 2007, por la Red de Bibliotecas; el Premio Internacional de Hábitat Dubai 2008; el Premio City to City Barcelona FAD 2009, por el proyecto “Medellín, la más educada”, entre otros.

En esa medida, el poder económico y político se reconfiguró, consolidando un Estado gerencial determinado por el manejo empresarial de sus funciones y de esa manera desplegar estrategias, metodologías y técnicas que le permitieran aumentar la competitividad de la ciudad en el mercado global. En ello, la administración pública comenzó a operar desde la racionalidad económica y trasladó parte de sus funciones al sector privado.

Para el modelo del neoliberalismo, la función del Estado pasa de la garantía a disponer condiciones que posibiliten la provisión de los servicios, es un Estado gerencial que se convierte en actor de mercado regido por la dinámica de la competencia, de esta forma, para obtener márgenes de eficiencia y eficacia no asume los altos costos de provisión directa de los servicios básicos sociales (Sierra, 2016, pág. 127).

Así, las categorías generales son puestas en marcha en el marco de un modelo urbano global productor de ciudades competitivas dentro de un contexto de libre mercado, donde los derechos se convierten en servicios tendientes a la privatización, los ciudadanos en usuarios y la ciudad en mercancía, de manera que la ampliación en la cobertura de servicios públicos y de derechos como la educación que tuvo lugar en Medellín, obedecieron a la necesidad de crear la imagen de un Estado amigable con una vasta presencia e incidencia territorial, que de la mano de iniciativas privadas pueda vender un modelo urbano ejemplar para el mundo.

De esta forma, *“la accesibilidad a las oportunidades de trabajo, a los recursos y a los servicios sociales sólo puede ser obtenida pagando un precio”* (Harvey, 1977, pág. 53), ofreciendo beneficios que no son homogéneos en calidad, cantidad o permanencia, puesto que su obtención radica en la capacidad de pago del individuo en un contexto de complejas asimetrías sociales, donde gran parte de la población no cuenta con estabilidad económica o no tienen la capacidad de pagar por todos los servicios.

Nos subieron el puntaje del SISBEN únicamente porque Vanesa está en la Universidad, (...) eso me parece muy injusto porque una persona de un barrio pobre está en la Universidad, que es una universidad pública es que no es una universidad

privada, que únicamente por ese hecho le suban el puntaje del SISBEN. Antes deberían apoyar más a esos jóvenes, porque esos jóvenes se están superando y quieren salir adelante y únicamente por ella estar en la Universidad de Antioquia nos subieron el puntaje y nos quitaron ese mínimo vital de agua. (Entrevista a doña Regina, Comuna 13, Medellín, 2017)

La desigualdad en el acceso a los derechos ha sido una constante en Medellín, pues las elites económicas locales siempre moldearon la configuración urbana de acuerdo a sus intereses, pero nunca antes había ocurrido de manera tan determinante y efectiva como con la implementación del Urbanismo Social, donde se empezaron a incluir a los sectores marginados que más padecieron la inaccesibilidad a derechos fundamentales, claro está, bajo una relación servicio-cliente.

Ahora bien, la razón por la que Medellín no se posicionó antes como un modelo urbano ejemplar, fue su imagen negativa ante el mundo, sostenida durante años por el narcotráfico y la violencia, convirtiéndola en una ciudad insegura y peligrosa. Así, mientras las elites intentaban entrar efectivamente en la competencia, del mercado global, Medellín estaba sumida en múltiples violencias que no permitieron la plena transformación de la imagen ni de las condiciones socio-espaciales a favor de los flujos del capital.

En ese sentido, la concreción del modelo urbano mercantil en Medellín fue posible gracias a la frágil estabilización de la violencia que trajo el control paramilitar en los barrios populares, y con ello, la considerable reducción de homicidios que tuvo lugar desde el año 2004. De esa manera, la ciudad logró insertarse con fuerza en la economía global, reposicionando una nueva imagen frente al mundo, impulsada por un nuevo actor armado que ejerce control en los barrios sin amenazar los intereses económicos de las elites locales.

El incremento en la violencia homicida afecta negativamente la economía, y es en los periodos de disminución de los homicidios en que la economía pasa por sus mejores momentos. Esto resulta importante en tanto el accionar de actores armados y el manejo de la economía son factores de poder que están en relación, pues al afectarse de manera sensible uno, se genera una reacción en el otro, lo que además impacta en la población y el territorio, por lo que el manejo del orden público debe ser un asunto de preocupación para las élites económicas con presencia en la ciudad. Esto permite

pensar que mientras las estructuras criminales no representen un peligro para la estabilidad del orden, ni un obstáculo para el despliegue del modelo económico, político y territorial, su control estatal desde la represión se hace relativo (Zapata, 2015, pág. 97).

En suma, no sólo la ilegalidad se transformó, también lo hicieron las formas de la administración local, ajustando su discurso y su accionar a un nuevo escenario de cambios, tanto de la violencia en la ciudad, como de los parámetros de ciudades competitivas en la economía global. En la sujeción del gobierno local a la liberalización del mercado que trajo la reinención del capitalismo, se retomó al urbanismo como uno de los instrumentos de planeación en el espacio urbano y la gestión del suelo más efectivo, pues *“La implementación de la planificación urbana es una forma aceptable de poder, ya que produce cosas y enriquece el conocimiento”* (Outes, 2002, pág. 9).

Por medio del urbanismo comenzaron a incidir en territorios donde el alcance del Estado siempre fue corto, limitado o represivo, para incorporarlos a los flujos financieros del mercado especulativo, produciendo en ellos espacios públicos bellos, donde primara la renovación sobre la consolidación, transformando los elementos que sean capitalizables para la oferta turística y de servicios (Sierra, 2016, pág. 134). La construcción de infraestructura se vendió como el medio que transformó socialmente esos barrios, disolviendo las condiciones estructurales que fundan su desigualdad.

Para lograrlo, era necesario borrar o suavizar la imagen histórica del Estado en territorios marginados de Medellín, lo que impulsó el despliegue de múltiples estrategias institucionales como el Urbanismo Social, “metodología urbana” que convirtió en su mayor potenciador y en el núcleo de su intervención. Las nuevas estrategias parten *“del discurso de la inclusión, del lenguaje de los derechos, de la participación ciudadana, de la efectividad, de la transparencia en el manejo de recursos públicos para lograr un ambiente de gobernabilidad, impensable con una visión del Estado como evasivo, excluyente, lejano y represor”* (Montoya, 2014, pág. 169)

El Urbanismo Social reproduce entonces la idea de una ciudad renovada donde la mayoría de su población cuenta con buenos estándares en su calidad de vida y refuerza permanentemente la imagen de un Estado incluyente, transparente y socialmente

responsable, crucial para la mercantilización y proyección internacional de la ciudad. En ello, crea conforme al *“lenguaje común de los derechos una serie de necesidades estándares, a saber: lo que necesitan los barrios marginados es lo que sí tienen los barrios planeados: seguridad, espacio público, educación, cultura, movilidad, vivienda.”* (Montoya, 2014, pág. 171), donde el calificativo social del urbanismo termina por justificar su intervención más que explicarla.

De ese modo, *“la función pública asume lo que hasta entonces entraba en una economía de mercado”* (Lefebvre, El derecho a la ciudad , 1978, pág. 35), se adhiere a la producción neoliberal de la ciudad, impulsando junto al sector privado a Medellín como una marca en la que sobresalen permanentemente un engranaje de aspectos positivos que den cuenta de su conversión, los cuales no se limitan a una voluntad meramente descriptiva de la vida urbana, sino que contienen una fuerte connotación política (Delgado & Malet, Jornadas Marx siglo XXI, 2007, pág. 2), pues el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de lo público están atravesadas por las lógicas del mercado y por la imposición de la gestión privada.

Emergen con fuerza entonces las asociaciones público-privadas dispuestas a gobernar a través de la imagen (Sierra, 2016, pág. 127), la cual entienden como un recurso de alta competitividad en el mercado global, generan una difusión sin precedentes de la imagen de una ciudad transformada que logró salir de la violencia, siempre con miras hacia el futuro, equitativa, incluyente y renovada en su totalidad. Se trata de la creación acelerada de una hiper-realidad, en la que el tramo de un andén o la colocación de un edificio con su sello, se asumen y se venden como garantía de transformación social del territorio intervenido, ficción de vidas mejoradas de manera profunda.

Se adoptan los planteamientos del *marketing urbano*, en el que se usan imágenes selectivas de la realidad urbana mientras se desechan los aspectos considerados desagradables o negativos, exhibiendo así una totalización de la ciudad y haciendo posible la venta y el consumo de sus mejores atributos en el mercado: prestación de bienes y servicios, responsabilidad social y empresarial, tecnología e innovación, etcétera.

Gracias a la audaz difusión de una ciudad restaurada e incluyente, se estructura una realidad dominante sobre todas las demás experiencias, condiciones e intereses que riñen entre sí dentro del escenario urbano.

“US [Urbanismo Social] se inserta en unas lógicas profundamente dialécticas, de manera que sus prácticas no responden a objetivos centrados exclusivamente en lo social, como se predica, sino que están también dirigidas a cambiar la imagen de la ciudad para hacerla un destino competitivo de inversiones” (Montoya, Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir de la utilización estratégica de derechos, 2014, pág. 210).

De ese modo, la idea de una renovada Medellín se constituye en sí misma como la marca que definirá el auge de la inversión privada, su posicionamiento internacional como un destino turístico atractivo y su constitución como ejemplo de modelo urbano exitoso para todas las ciudades del mundo. Instaurando estratégicamente la idea de renovación en el imaginario colectivo, deja atrás características como la inseguridad, la exclusión y la violencia que la convirtieron en el anti-modelo urbano durante muchos años.

La transformación del imaginario colectivo a través de la producción de una imagen que integre los elementos constitutivos de lo pretendido como ideal, una mezcla de algunas realidades y muchas proyecciones. La lógica y estructura narrativa de la publicidad orienta las acciones de la ciudad para enfatizar su imagen y aumentar su visibilidad por medio de la producción de acontecimientos, la misma ciudad se convierte en acontecimiento para competir en el mercado global de ciudades. Lo que no se muestra, no se vende. (Sierra, 2016, pág. 130).

Para lograr un equilibrio entre el constructo ideológico de una realidad urbana hegemónica, sostenida pese a los diversos contrastes presentes en la ciudad, no sólo fue fundamental la proyección internacional de una imagen absoluta de la realidad urbana, también resultó crucial la legitimación en lo local, poniendo en el centro de su discurso valores democráticos como la inclusión, la participación ciudadana y la convivencia, dando especial relevancia al espacio público como un lugar de todos y de nadie, diferenciado del espacio privado como el lugar donde transcurren y se resuelven las necesidades individuales.

Mucha crítica que se hacía era 'pero cómo así, están haciendo una súper biblioteca y un gran parque y nuestras casas sin techo' Si pero esa es la parte privada, esa es la que tu jalonas [...] la vida de la casa no es como sucede también en la calle, entonces creo que también eso fue diferenciador, se le apuntó un poco también como al ejercicio público, que es donde no va a invertir un privado, ósea si uno le invierte a todas las casas y el espacio público lo deja vuelto nada, jamás las personas se van a reunir fácilmente para hacer una biblioteca. Cada quien le apunta de todos modos a su espacio y a su casa (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

La centralidad otorgada a la visión clásica de ciudadanía cuyo máximo desarrollo tiene lugar en el espacio público, se sostiene como instrumento ideológico dominante que aboga por la supresión de los antagonismos sociales en él, disuasión de cualquier capacidad de contestación, que desde esta disposición absoluta, ya no es subversiva, sino incívica, camuflando así toda relación de dominio.

Se reproduce la idea de un Estado neutro o mediador que interviene en los barrios históricamente marginados de Medellín, disociado completamente de los intereses de las clases dominantes, que se encuentra por encima de toda contradicción social posible y que desde la comprensión de su contexto se entrega como la posibilidad de saldar una deuda histórica que haga posible la construcción de una ciudad más incluyente.

El ciudadanismo es también el dogma de referencia de un conjunto de movimientos de reforma ética del capitalismo, que aspiran a aliviar sus efectos mediante una agudización de los valores democráticos abstractos y un aumento en las competencias estatales que la hagan posible, entendiendo de algún modo que la exclusión y el abuso no son factores estructurales, sino meros accidentes o contingencias de un sistema de dominación al que se cree posible mejorar éticamente. [...] Prescindiendo de cualquier referencia a la clase social como criterio clasificatorio, remite en todo momento a una difusa ecúmene de individuos a los que unen no sus intereses, sino sus juicios morales de condena o aprobación (Delgado & Malet, Jornadas Marx siglo XXI, 2007, pág. 3).

En esa misma línea, el Urbanismo Social se configuró como el medio que justificó frente a las clases medias de la ciudad, la inversión en comunas donde se concentraba la violencia, ya que desde la idea del pobre como criminal, la intervención integral en territorios donde

habitaban los “portadores del peligro”, fue vista como la posibilidad de reducir el riesgo que representaban. Mientras tanto, en los barrios objeto de su intervención se presentaba el origen y los beneficios de los proyectos que se llevaron a cabo (Montoya, Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir de la utilización estratégica de derechos, 2014, pág. 214) con la aplicación de valores y principios de orden superior, que permitieron la aprobación natural de la nueva llegada del Estado a la comuna.

El hecho urbano se presenta entonces como *“algo a gestionar, objetivo, natural, sin ninguna implicación política, que ha logrado generalizar una percepción del mundo que mira hacia cuestiones que eluden la verdadera motivación del urbanismo”* (Fernández & García, 2014, pág. 3), lo cual genera una amplia aceptación de las intervenciones urbanísticas, especialmente de aquellas que incluyen a los sectores marginados de Medellín, pues su historia de exclusión obliga a asumir, no sólo en el imaginario colectivo, sino desde la vivencia de las comunidades segregadas, que es necesaria la inversión integral del Estado en sus territorios.

De esa manera, aunque el Urbanismo Social presenta sus formas como contextuales, guiadas únicamente por la realidad local, logra de forma exitosa vender la imagen de una ciudad compacta -contraria a su realidad difusa- bajo parámetros, estrategias, categorías y técnicas propias de un modelo global que entiende a la ciudad y a lo urbano como mercancía, así *“impone unas lógicas que no son propias del lugar, y antes que unir, fragmentan espacialmente, agudizan el conflicto y excluyen a mucha población de dichos beneficios”* (Velásquez, 2011, pág. 77).

En ese sentido, la proyección se superpone a las complejas realidades persistentes en los territorios y a las disputas suscitadas en la aplicación del modelo urbanístico, en el que en repetidas ocasiones se ha expulsado población de los puntos de influencia estratégicos por la rentabilidad que estos representan, haciendo uso de la fuerza, de medidas jurídicas o como efecto del encarecimiento del suelo que trae la renovación urbanística, lo cual, hace insostenible la habitabilidad de muchas familias que se ven obligadas a salir de sus territorios (Zapata, 2015, pág. 38).

No obstante, la expulsión de población y la segregación territorial son sólo una pequeña muestra de las contrariedades manifiestas del publicitado Urbanismo Social en Medellín, cuyos criterios de intervención en las comunas fueron los niveles de pobreza y violencia. Según datos de la Alcaldía de Medellín:

“En 2011 la situación del estrato 1 difiere en casi 20 puntos de aquella del estrato 6, demostrándonos lo desigual que es la ciudad. Igualmente, el último informe del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) para América Latina, clasificó a Medellín como la urbe más inequitativa del país” (Velásquez C. A., 2013, pág. 141)

La disparidad social señala la permanencia de una ciudad dual, cuyo crecimiento económico no se revierte sobre el desarrollo territorial de una mayoría poblacional de extracción popular, pues aunque las transformaciones de los últimos años en transporte e infraestructura, sí han mejorado el entorno de la población y han conectado geográficamente a la ciudad, no han mejorado significativamente las condiciones de vida de la mayoría ni ha reducido de manera efectiva la inquietante brecha social de Medellín.

Sobre la violencia podemos decir que lo expuesto acerca de sus manifestaciones y variaciones en la ciudad, devela más una acción de encubrimiento por parte del Estado que una acción integral encaminada a su reducción, pues en nuestra revisión de hechos violentos se evidenció que tanto funcionarios como Fuerza Pública han enturbiado por medio de sus prácticas los presupuestos del Urbanismo Social y la pretendida solidez de un Estado con incidencia hegemónica en lo local, pues en realidad ha coexistido en los territorios con grupos armados ilegales que sostienen una fuerte influencia en lo barrial. *“En esas condiciones los ideales de identidad urbana, ciudadanía y pertenencia, y de una política urbana coherente, ya amenazados por la creciente difusión de la ética neoliberal individualista, se hacen mucho más difíciles de sostener”* (Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana., 2012, pág. 36)

Intervención territorializada: La Comuna 13

La consecución de una visión hegemónica de la realidad urbana implicó la inclusión de territorios que durante décadas fueron señalados de ser los responsables de que Medellín

fuera un anti-modelo urbano. Por tanto, cambiar la imagen de las comunas reconocidas como las más pobres y las más peligrosas, donde se establecieron diversos actores armados, se dieron cruentas disputas y tuvieron lugar múltiples violencias, seguidamente transformarían la idea que se tenía de Medellín en su totalidad, especialmente por hechos como los acaecidos en la comuna 13, que marcaron la memoria del conflicto armado en la ciudad.

Todos somos de las comunas, pero hubo una manera peyorativa en ello no solamente por acciones, por olvido del Estado, sino también por algunas presencias desafortunadas como la Operación Orión en la comuna 13 pues que ya llegó al extremo contrario de incidir por la fuerza (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Pese a que los Proyectos Urbanos Integrales con los que operó el Urbanismo Social en las comunas populares ya habían sido aplicados en la Zona Nororiental de la ciudad, su intervención no tuvo tanta difusión si la comparamos con la conmoción mediática que generó la nueva actuación del Estado en la comuna 13, pues lograr transformar la imagen de una comuna popular con dinámicas históricas de violencia tan complejas, ubicó a ese PUI como proyecto insignia del modelo urbano y convirtió a la comuna en una de las etiquetas territoriales más explotadas por la marca Medellín.

Tu no dices, 'yo vivo en la comuna 14', '¿Para dónde vas? Ah no, voy para la comuna 11' uno nunca dice eso, pero cuando vas para San Javier, nunca decís San Javier (decís comuna 13) [...] después pasamos al PUI comuna 8 y 9 que llamamos Centroriental, pero era muy fácil decir Nororiental, Centroriental o Noroccidental y muy difícil decir Centroccidental, cuando se tenía la palabra comuna 13 (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

La comuna 13 se situó entonces como uno de los lugares turísticos obligados de la ciudad, donde la historia de la violencia se enmarcó en el pasado y se enlazó con un presente sensacional de reinención. Ligazón que se convirtió en uno de los mayores atractivos para propios y extraños, pues la posibilidad de recorrerla pese a la guerra que tuvo lugar allí, parece toda una hazaña llena de significantes positivos, que terminaron por sellar el paso de

una ciudad sumida en el caos a una completamente renovada gracias a la intervención urbana integral del Estado.

Elementos disruptivos

Para conseguir lo que en otro momento era impensable, es decir, que cientos de personas ajenas a la comuna pudieran visitarla sin mayores percances y que en concordancia con las líneas generales de la nueva Medellín se posicionara su imagen por aspectos distantes a la violencia, se estructuraron estrategias desde el reconocimiento territorial que potenciaran la idea de su transformación en la ciudad y en el mundo.

De esta manera, en la intervención llevada a cabo en la comuna 13 se aplicaron elementos disruptivos dentro de las obras para que incidieran con robustez en la transformación de su imagen, acompañando estrategias de intercambios sociales masivos como los planteados por la acupuntura urbana dentro del Proyecto Urbano Integral. Las condiciones estaban dadas para cumplir con ese propósito, pues la ciudad estaba cada vez más conectada geográficamente por los medios de transporte que facilitaban el acceso a la comuna desde cualquier parte y por otro lado, las transacciones con las bandas y combos en el territorio se hicieron sin mayores inconvenientes.

En ese escenario de oportunidad, la idea del tránsito de una comuna violenta a una pacificada también se dio desde el nombramiento de algunas obras, como el Parque de la Paz en el barrio Veinte de Julio o la biblioteca Presbítero José Luis Arroyave⁷ en San Javier, Por su parte, la grandeza y la calidad del diseño en las obras se convirtieron en elementos de recordación, que de alguna manera, generan una asociación con el compromiso y la vastedad del Estado.

Los elementos concentraron la atención y desviaron la mirada de problemáticas sociales vigentes en la comuna, esto ocurrió especialmente con las escaleras eléctricas, inauguradas en diciembre de 2011 en el barrio Independencias I, pues el hecho de ser las primeras de carácter público y gratuito ubicadas en un barrio popular, antes recordado por la violencia, las convirtió en un modelo de innovación sin precedentes dentro de la planificación urbana en todo el mundo. La novedad del proyecto generó un impacto publicitario de gran

⁷ Sacerdote asesinado por miembros de los Comandos Armados del Pueblo en el año 2002.

magnitud, en donde se sobreexplotó la idea de una comuna pacificada a través del Urbanismo Social.

Ahora la colorida ciudad, la segunda más grande de Colombia, es parte de una imagen completamente más brillante. Un riguroso esfuerzo de paz ha sofocado el conflicto armado, mientras que un reciente informe la clasificó como la economía metropolitana de más rápido crecimiento en América Latina. La planificación de una ciudad ingeniosa es una de las razones detrás de esta explosión. En lo alto de la ladera de la ciudad, la Comuna 13 es un área que ha estado plagada de violencia y la que alguna vez fue una fortaleza para las guerrillas y los traficantes de drogas [...] Más importante aún, a esta simple innovación se le otorga el crédito de ayudar a traer paz y orgullo a una comunidad que alguna vez estuvo plagada con violencia. (CNN, 2015)

Los discursos institucionales y académicos de transformación urbana se centraron entonces sobre la comuna 13, seleccionando y priorizando los hechos que reflejaban que el nuevo núcleo de su reaparición mediática eran la innovación y el progreso. Objetivo primordial trazado meticulosamente, en el que se descartaron otras soluciones urbanísticas que pudieron mejorar la calidad de vida de muchos habitantes, no sólo desde la movilidad, sino desde aspectos integrales como la concreción del derecho a una vivienda digna,

Sin embargo, la lógica mercantil en la que se encuentra envuelta el modelo urbano de Medellín, entiende que el suelo es una forma ficticia del capital que representa una rentabilidad futura, lo que no permite la igualdad en el acceso a la vivienda, derecho que además no contribuye a la promoción y el posicionamiento en todo el mundo de Medellín como una marca exitosa de la apuesta neoliberal de la ciudad.

En la comuna 13 hubiéramos podido hacer un mejoramiento de andenes, sí. Hubiéramos podido hacer viviendas como están las viviendas ahí en Independencias que con el PRIMED alcanzó a hacer dos, tres bloques ahí en las Independencias. Eso no generó orgullo, porque eso es funcional, había que coger un elemento tan disyuntivo (disruptivo), tan salido de los cabellos para que la gente diga 'Yo no soy ya miliciano, sino que yo vivo donde están las escaleras eléctricas y aquí ha venido

Maluma, ha venido Enrique Iglesias, ha venido Francois Girbaud, han venido los presidentes, Clinton' (Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín, 2017)

Así se le atribuyó al PUI la capacidad de hacer sentir orgullosas a las personas de la comuna por tan innovadora intervención en su territorio, lo que no hubiese sido posible con la puesta en marcha de otros proyectos de carácter social menos resonantes y más funcionales para la comunidad. Esto demuestra que si bien en lo planteado por el Urbanismo Social se reconoció una asociación histórica entre pobreza y violencia, las acciones ejecutadas en el territorio parecen omitir el reconocimiento de ese vínculo, en cambio, si indican cuales fueron sus principales objetivos, distantes de la erradicación de la desigualdad y la violencia y cercanos a la proyección internacional de una nueva Medellín.

Hoy un ciudadano de la comuna 13 no tiene nada que envidiarle a otro ciudadano de cualquier otro barrio, pues en sentido de orgullo, quieren a su barrio. Antes era pena decir la comuna 13 '¡Qué pena, allá como matan de gente!' y hoy qué dice la gente 'Ah, donde quedan las escaleras eléctricas, ¡Uh que nota!' ¿Si me entiende? Mire en un juego de frases como se le cambia el orgullo a la gente, con un juego. Si hubiéramos hecho unas viviendas qué, 'dónde quedan lo edificios de la comuna 13', no, 'dónde quedan los andenes que mejoraron', nadie va a decir eso. Había que ser totalmente disruptivo ahí, es decir, rómpale a la gente y mira que eso hoy es un hecho muy positivo de ciudad (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Una ruptura determinante en donde no sólo fue necesario ubicar elementos que concentraran la atención, también había que establecer un quiebre definitivo con las marcas del accionar miliciano en las memorias de la comuna. La aceptación de la idea de una ciudad hegemónica necesita de símbolos que se adhieran a ella y bajo esa comprensión totalizante, la incidencia en el territorio con la ubicación de las escaleras eléctricas en el barrio Independencias I estuvo marcada por la anulación de cualquier reducto simbólico de las milicias.

Indiscutiblemente todo era un gueto asociado a la guerrilla, porque todo fue criado por la guerrilla. [...] Entonces ahí indiscutiblemente escuchando fue que entendimos todas las historias que habían marcado mucho la gente, mucho, porque ya las generaciones pasaron, ya iban pasando. Ya la generación miliciana, ya los habían matado, quedaban las mujeres viudas, los hijos crecieron sin esa imagen paternal,

entonces la generación empezó a cambiar, entonces nosotros aquí milicianos de qué o qué, ya había otra estructura asociada más a delincuencia común, más que a FARC, más que a ELN o M-19 o EPL que inclusive también estuvo allá. Era otro tema, era más delincuencia común, eso nos permitió a nosotros decir: ¡Juepucha, tenemos la oportunidad aquí! (Entrevista a Directivo del PUI, Medellín, 2017)

Las posturas que reducen la complejidad y los alcances de las estructuras paramilitares a meros grupos criminales en la ciudad, han ocultado de alguna forma las distintas motivaciones y formas de acción de aquellos en el escenario urbano. Así, la nueva intervención del Estado en la comuna revistió esa posición a través de los planteamientos del Urbanismo Social y del auge publicitario otorgado a su intervención, lo cual estuvo acompañado de un rechazo contundente de las acciones y representaciones de carácter subversivo que daban cuenta de la pasada influencia miliciana.

Lo único que ha cambiado es que han puesto unas escaleras eléctricas que obedece a la arquitectura del ocultamiento, que la inauguraron 7 veces y que la inauguraron en un lugar donde tenía comandancia las CAP y el ELN, donde había un Che y que luego de que llegó allá el ejército lo que hicieron fue borrarlo, cambiaron el nombre, que no era el Plan del Che sino que yo no sé qué y la gente dijo 'bueno' y luego ponen unas escaleras eléctricas para venderle al país y a la ciudad y a otros lugares en lo turístico que es un lugar de transformación y de cambio (Entrevista a líder juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

La nueva imagen de la comuna -estrechamente ligada a la de ciudad-, se catapultó por la intervención urbanística realizada sobre un reducido espacio público en el que se pusieron las luces y los lentes de todo el mundo, resaltando constantemente los elementos innovadores y pacificadores atribuidos al Proyecto Urbano Integral. Realidad parcial que confluye en escenarios de la comuna con constantes alteraciones sociales, políticas y económicas donde aflora el hermetismo institucional y se impone el control de los actores armados ilegales.

Predomina entonces un panorama de rupturas con el pasado dentro de la ciudad competitiva que se proyecta a nivel internacional como el modelo urbano ideal, aunque a él se contraponen realidades dramáticas como las vividas por cientos de personas que año tras

año tuvieron que abandonar la comuna debido a la persistencia de hechos violentos perpetrados por actores armados que aun ejercen control en los barrios.

Por otro lado, la gestión en el espacio público sí mejoró la estética y las condiciones físicas del entorno, aunque para convertirlo en lugar de múltiples actividades o en áreas turísticas donde su politización se diluye a medida que se convierte en lugar de consumo y consumo de lugar, donde *“La calle ya no es más que la obligada transición entre el trabajo forzado, los esparcimientos programados y la habitación”* (Lefebvre, 1983, pág. 15). Se adornó la envoltura de los barrios, pero no se resolvieron cuestiones que han sido claves en el origen de las disputas territoriales de la ciudad como la informalidad de la vivienda o la prevención del riesgo.

En barrios como las Independencias II, muchas de las casas no cuentan con escrituras y se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo, dejando un escenario abierto para posibles desalojos y con ello, la germinación de otros conflictos.

Nosotros ninguno tiene escrituras, pues muy poquitas las personas, entonces si vienen y nos van a pagar basándose en un coso de compra-venta pues no nos van a dar nada. Ósea que eso sí sería un conflicto ahí y uno dejarse sacar de la casa, pues yo no me dejo (Entrevista a mujer joven N°2, Comuna 13, Medellín, 2017)

Cuestión que no se limita a la formalización de vivienda en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que aún existen en la comuna, sino que se extiende al mejoramiento en la habitabilidad de muchas familias que no tienen un lugar digno donde vivir, mientras tanto, el sector inmobiliario acumula ganancias de forma desenfrenada y se da una especulación desmedida del suelo urbano sin regulación alguna por parte del gobierno, beneficiando a toda costa la inversión privada (Zárate L. , 2014, pág. 7)

De ese modo, el Estado local por medio del Urbanismo Social, visibilizó la renovación urbana en los puntos de intervención y sus proximidades, omitiendo las condiciones físico-espaciales y socioeconómicas de otros sectores del territorio. Además, a partir de la construcción de una híper-realidad de la vida diaria, aumentó en su divulgación la verdadera capacidad de incidencia territorial y poblacional de obras como las escaleras eléctricas.

Es que por acá invierten mucho como en la fachada, pero más no como en las necesidades de cada persona. Por acá hay mucha pobreza, nosotras no somos pobres, pero hay gente que realmente si es muy pobre, por acá hay gente que vive necesidades horribles, precarias y pues acá uno no ve que alguien venga y los busque para que vayan a estudiar o que busquen niños que no estén las mejores comodidades [...] por acá nadie viene a buscar o a mirar como las necesidades de cada familia, porque si buscaran las necesidades de cada familia sería algo mejor o las necesidades que tienen estructuralmente en la casa, pero por acá arreglan es las fachadas, pintan las casas que están cerquita, ponen las escaleras eléctricas, los tubos y así, pero nada más. (Entrevista a mujer joven N°2, Comuna 13, Medellín, 2017)

En efecto, el territorio se transformó espacialmente en algunos sectores, también cambió la idea que se tiene de él y eso produjo su inserción al modelo urbano, pues solidificó la imagen de una Medellín renovada por completo, preparada para la inversión y la masiva llegada de visitantes. Se hizo funcional porque se vende como un producto fascinante, la comuna se volvió un lugar de consumo al atraer por su estética, por su historia violenta y por su redención a cientos de turistas entusiasmados de recorrer un barrio popular de Medellín y poder exhibirlo sin problema. Mientras tanto, se socavan otras realidades constantes que escapan a la fugacidad de un recorrido o que son imperceptibles en los fluidos -aunque informales- intercambios económicos que tienen lugar alrededor de las escaleras eléctricas.

Las escaleras eléctricas de la comuna 13 es una estrategia de ocultamiento, es una estrategia de vender. Pues no son las escaleras de la comuna 13, si algo son dos tramos pequeñitos ni siquiera medio barrio ¿Sí? Ósea no son de la comuna 13. Además hemos estado ahí cercanos, la otra vez estuvimos atendiendo un homicidio de un man que llegó y le voleó machete a toda una familia y ese día entendimos que ahí alrededor lo que había era un tema de pues que muy chimba la fachada, muy chimba la pintura y yo celebro que el barrio sea bonito, que se trabaje desde ahí, pero preocupa mucho el tema de que mucha gente se levanta y les toca que tomarse un agua panela con papel higiénico, ¿Si pilla? Entonces tiene chimba de fachada, pero mera hambre y meras situaciones en sus casas, además se les valoriza y eso genera otras cosas. Bueno ¿Para quién es ese lugar? Pa'l turista. (Entrevista a lider juvenil, Comuna 13, Medellín, 2017)

El espacio público se convierte en extensión material de una ideología dominante (Delgado & Malet, Jornadas Marx siglo XXI, 2007, pág. 7), pues a través de principios abstractos y universales de mediación, la administración pública oculta las reales motivaciones de un urbanismo al servicio del orden económico vigente. La contradicción permanece ahí y las condiciones socioeconómicas adversas se sostienen, aunque se presenten como una mera desavenencia individual en una ciudad donde la vida se mercantiliza cada vez más.

Los discursos de civilidad no redimen entonces la violencia, la pobreza y las desigualdades latentes en el territorio, pero si logran proyectar a través de los Proyectos Urbanos Integrales la entelequia de una comuna en paz y de una ciudad incluyente ante el mundo. Medellín logra conquistar el mercado global, se convierte en “*producto mercantil, sujeto de intercambio, oferta, negociación, venta, compra, que ofrece cualidades susceptibles de rentabilización*” (Sierra, 2016, pág. 129); Logra camuflarse en medio de todas las problemáticas que aquejan a los sectores populares, para convertirse en la ciudad innovadora, donde lo único seguro es la inyección de capital.

La prolongación de la violencia

El modelo urbano mercantil tiende a intensificar la conflictividad en la ciudad, pues la producción espacial está atravesada por la inversión privada y el dominio de la especulación inmobiliaria donde “*Las clases populares como sujeto colectivo que más padece el desplazamiento de su territorio*” (Janoschka & Sequera, 2014, pág. 7) son las más vulnerables en esta Medellín globalizada.

El Urbanismo Social hace del barrio popular su máximo objeto de intervención para la consolidación de una imagen irreal de la ciudad, cuya proyección internacional se completa a partir de una negación de las contradicciones, que no radican únicamente en la segregación, exclusión y desplazamiento que provoca su aplicación, pues realmente sus efectos no crean la desigualdad, lo que hacen es intensificar la asimetría social preexistente.

En esa medida surgen nuevas disputas que no prescinden en su totalidad de la violencia y que abren un escenario en el que se entrecruzan, como es habitual en Medellín, los conflictos asociados al modelo urbano con las violencias existentes y los actores armados

ilegales consolidados en los barrios, que también desplazan, expulsan y victimizan a la población.

Esas realidades se ocultaron ante el mundo, logrando así la internacionalización de la ciudad, por tanto, la motivación real de incidir en el “agreste” espacio popular develó los intereses económicos de las elites en la modelación de una realidad urbana hegemónica, lo que también explica que la presencia y las acciones del Estado en los territorios no estuvieran acompañadas de acciones mancomunadas entre las distintas instituciones que los representan.

En esa medida, la posibilidad de que ocurriera una transformación más clara de las condiciones de vida que influyen en la intensificación de la pobreza, se diluyen en medio de los intereses del capital, en donde su proceso de intervención se revierte en la agudización de las asimetrías sociales. Por otro lado, los comportamientos desviados de las fuerzas policiales en la comuna 13 terminan agravando la victimización a la vez que robustecen el dominio de bandas y combos en el territorio.

Conclusiones

El turbado trayecto realizado en el contexto social e histórico en el que se desarrollan las múltiples violencias que tuvieron lugar en Medellín, nos llevó a reconocer el papel protagónico del territorio popular y a analizar las distintas formas en las que el Estado intervino en él. En ello, fue clave profundizar en dos cuestiones: primero, las condiciones precarias en el origen de muchos barrios populares de la ciudad y segundo, las respuestas estatales, que más que centrarse en una ausencia, se comprendieron desde una actuación diferenciada, que varió entre la represión, la inoperancia, la atención mínima a ciertas necesidades básicas y la permisividad u omisión frente a hechos violentos, pero que en definitiva, sumieron a estos territorios en la marginalidad durante muchos años.

En ese sentido, se comprende que no es posible analizar las transformaciones que ha sufrido la ciudad en los últimos tiempos sin considerar ese entramado histórico. Pues el territorio popular, además de contener durante toda su historia un acumulado de carencias, terminó por concentrar las manifestaciones de la violencia en la ciudad. No obstante, este escenario sufrió una serie de transformaciones en los últimos años, en el que se

consideraron como fundamentales los procesos de desmovilización paramilitar, por el comportamiento que adquiere la violencia después de estos y porque, el equilibrio inestable que logró la consolidación de ese actor armado en la ciudad, posibilitó la nueva intervención del Estado, que desde el Urbanismo Social, incidió en las comunas más pobres y violentas de Medellín.

Ahora bien, las instituciones públicas y privadas que hicieron parte de todo el proceso de construcción del Urbanismo Social, presentaron al Proyecto Urbano Integral como una metodología de intervención cuyo objetivo era saldar la deuda histórica que se tenía con algunos sectores de la ciudad, marginados y estigmatizados durante años. En ese sentido, abogaron por un urbanismo contextual que parte de las necesidades presentes en la experiencia local, por esa razón, entraron a analizar los niveles de pobreza y las cifras de homicidio en cada una de las comunas de Medellín, encontrado que aquellos territorios donde los niveles de pobreza y violencia eran altos, coincidían con los sectores donde el Estado había invertido menos en materia social.

De ese modo, la inmersión en el territorio popular que es la Comuna 13, señaló que además de haber sido un territorio marcado por la violencia, donde la confrontación armada fue más cruda, también era una de las comunas con más carencias y necesidades. Cuestión que desde la proyección del nuevo modelo urbano logró transformarse, convirtiendo a esta comuna en uno de los escenarios de la ciudad más reconocidos por las transformaciones positivas atribuidas al Urbanismo Social.

Sin embargo, el análisis parte de que esta nueva modelación de la ciudad aplica parámetros globales de la economía neoliberal en la vida urbana, donde la intervención espacial de lo público está mediada constantemente por los intereses privados, por eso, se considera que en el centro de las motivaciones del Urbanismo Social, prima el interés económico sobre el interés social. Siguiendo esta motivación, Medellín se abrió paso a la inversión privada, comenzó a apostarle a la innovación, al ocio y al turismo, generando altos flujos de capital financiero, buscando consolidarse en el mercado global como una ciudad competitiva.

En ese proceso de transformación de Medellín, se invirtió en territorios que otrora fueron señalados de convertirla en una de las ciudades más violentas y peligrosas, sosteniéndola

durante mucho tiempo como el antimodelo urbano. En esa medida, resultó crucial conocer y estudiar las problemáticas de esos territorios, para generar en la comunidad la aprobación del proyecto, romper con el estigma puesto sobre estas comunas e impulsar así, una imagen positiva de la ciudad que pudiera posicionarla ante el mundo como un modelo urbano a seguir.

Este posicionamiento que implicó el ocultamiento de otras realidades problemáticas que siguieron azotando a la ciudad, a la comuna y al barrio, pero que gracias a las estrategias de marketing urbano y a la difusión de valores democráticos supremos y neutrales, que justificaron la intervención realizada, la imagen de la Comuna 13 se transformó, contribuyendo al cambio en la idea que se tenía de la ciudad a nivel internacional, se convirtió en un atractivo turístico que presenta su mayor reinversión en el abandono de la violencia.

Es cierto que los cambios ocurridos mejoraron el entorno de algunos sectores y conectaron a la comuna con el resto de la ciudad y del mundo, pero la intervención urbanística se encontraba condicionada y potenciada por estructuras de dominación que concentran la riqueza y el desarrollo, lo que hizo que las condiciones socioeconómicas precarias de la mayoría de sus habitantes no se transforman. Medellín continuó siendo una ciudad desigual, dual, llena de contrastes que muestran las asimetrías de un modelo urbano que beneficia el capital privado.

Además, la lectura territorial permitió un análisis más detallado de las relaciones entre los grupos ilegales y las distintas instituciones del Estado presentes, durante y después de la ejecución del proyecto. Las alarmantes cifras de desplazamiento forzado, la concentración de los homicidios, los casos de extorsión y los señalamientos de quienes habitan la comuna, evidenciaron que el relacionamiento de las fuerzas policiales con los combos y bandas, fue más de asociatividad que de ruptura con las acciones violentas que estos ejecutaron, lo que contradice los objetivos trazados por el Urbanismo Social, al que se le han atribuido un carácter pacificador.

Asimismo, la gestión de las demás instituciones estatales con presencia en el territorio resultó insuficiente frente al poderío y la legitimidad que sostienen los grupos ilegales, pues

son ellos los que han regulado la movilidad, los usos del espacio, los conflictos y el cobro de las “vacunas”, sin que se presentaran acciones contundentes para su desmonte, pues no hubo una intención real de transformar de modo integral, las estructuras y condiciones que dan soporte y perpetúan el control junto a las modalidades de violencia desplegadas dentro de su ejercicio de poder.

En esa medida, la relación en el territorio entre el Urbanismo Social y la violencia, terminó por agudizar las condiciones de pobreza, en la medida que no se abordaron como una cuestión estructural y sistémica. A su vez, se potenciaron los hechos violentos por la omisión, permisividad y participación directa de las instituciones estatales en distintos casos de victimización, dejando a una población vulnerable dentro de un círculo de violencia.

Se develan así los intereses económicos de un modelo al servicio del capital, que terminó por profundizar las contradicciones y fortalecer el accionar de los grupos ilegales, abriendo paso a la posibilidad de que surjan nuevas disputas, en una Medellín que no logró saldar la deuda histórica con los barrios populares y que pese a las variadas mascararas que la embellecen ante el mundo, ha sabido reinventar sus violencias.

Bibliografía

Audiencia de versión libre, Diego Fernando Murillo Bejarano (Unidad Nacional para la Justicia y la Paz 28 de noviembre de 2008).

(2 de agosto de 2017). Entrevista a arquitecto del PUI, Medellín.

(7 de septiembre de 2017). Entrevista a Directivo del PUI, Medellín.

(1 de de septiembre de 2017). Entrevista a doña Mery, Comuna 13, Medellín.

(10 de septiembre de 2017). Entrevista a doña Regina, Comuna 13, Medellín.

(14 de agosto de 2017). Entrevista a hombre adulto, Comuna 13, Medellín.

(24 de agosto de 2017). Entrevista a Jhon, Comuna 13, Medellín.

(19 de agosto de 2017). Entrevista a lider cultural, Comuna 13, Medellín.

(22 de agosto de 2017). Entrevista a lider juvenil, Comuna 13, Medellín.

(1 de septiembre de 2017). Entrevista a Magaly, Comuna 13, Medellín.

(10 de septiembre de 2017). Entrevista a mujer joven N°2, Comuna 13, Medellín.

(1 de septiembre de 2017). Entrevista mujer joven N°1, Comuna 13, Medellín.

Alcaldía de Medellín & Instituto de Estudios Políticos. (2015). *Reclutamiento, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes en Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín- Universidad de Antioquia .

Alcaldía de Medellín. (2009). *Plan de Desarrollo Local Comuna 13, San Javier "Sembrando para el futuro y el desarrollo local" 2010-2020*. Medellín: Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2012-2015). *Medellín, modelo de transformación urbana. Proyecto Urbano Integral -PUI- en la zona Nororiental. Consolidación habitacional en la quebrada Juan Bobo*. Medellín: Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2015). *Plan de Desarrollo Local /Comuna 13 San Javier*. Medellín: Alcaldía de Medellín.

Alessandri, F. (2014). La ciudad como privación y la reapropiación de lo urbano como ejercicio de la ciudadanía. *XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control*, 1-15.

Alonso, M., & Valencia, G. (Julio- diciembre de 2008). Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín. *Estudios Políticos*, 11-34.

- Alto Comisionado para la Paz. (2006). *Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe ejecutivo*. Bogotá: Presidencia de la República; Oficina Alto Comisionado para la Paz .
- Aricapa, R. (2005). *Comuna 13: Crónica de una guerra urbana*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Blair, E. (enero-junio de 2009). Conflictividades urbanas vs. "guerra" urbana: otra "clave" para leer el conflicto en Medellín. *Universitas humanística*(67), 29-54.
- Borja, J. (2011). Espacio Público y derecho a la ciudad. *Viento Sur*, 39-49.
- Carrasco, J. (1 de agosto de 2005). La ciudad, su espacio y sus políticas. *Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, IX(194), 1- 12.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2011). *Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerra*. Bogotá: Taurus.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *Medellín: memorias de una guerra urbana*. Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín- Universidad EAFIT- Universidad de Antioquia.
- CNN. (14 de diciembre de 2015). *CNNespañol*. Recuperado el 6 de julio de 2017, de <http://cnnespanol.cnn.com/2015/12/14/escaleras-mecanicas-gigantes-transforman-barrio-de-medellin/#0>
- Corporación Jurídica Libertad. (02 de Julio de 2009). *Corporación Jurídica Libertad*. Recuperado el 30 de 10 de 2016, de Corporacion Jurídica Libertad: <http://www.cjlibertad.org/victimas/62-memoria/132-memoria-historica-de-la-comuna-trece-de-medellin.html>
- Delgado, M., & Malet, D. (diciembre de 2007). El espacio público como ideología. *Jornadas Marx siglo XXI*, 1-13.
- Duque, I. (04 de abril de 2011). Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano. *Cuadernos de geografía. Revista colombiana de geografía*, 29-45.
- Echeverri, A., & Orsini, F. (2010). Informalidad y Urbanismo Social en Medellín. *Sostenible*, 11-24.
- Echeverría, C., & Rincón, A. (2000). *Ciudad de territorialidades. Polémicas de Medellín*. Medellín: Centro de estudios del habitat popular- cehap de la Universidad Nacional de Colombia.
- El Colombiano. (27 de junio de 2014). *Revelaciones del bajo mundo*. Recuperado el 21 de marzo de 2017, de Revelaciones del bajo mundo: <http://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/el-listado-de-los-combos-que-azotan-a-medellin/7180>
- El Espectador. (17 de Octubre de 2013). Alias "Sebastián", de jalador de carros a una corte en EE.UU. *El Espectador*.

- Empresa de Desarrollo Urbano. (2011). *Proyectos Urbanos Integrales -PUI- Elementos clave de los PUI y sus retos frente a la construcción social del hábitat en la comuna 2*. Medellín: Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de Medellín.
- Fernández, C., & García, E. (5-10 de mayo de 2014). XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control. *Urbanismo inmobiliario, la especulación como forma hegemónica de hacer ciudad*. Barcelona, España: Universitat de Barcelona.
- Gil, M. Y. (2009). *Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005. Tesis de grado para el título de Maestría en Ciencia Política*. Medellín: Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia.
- Giraldo, J. (septiembre de 2008). Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín. *Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*(5), 99-113.
- Giraldo, J. (2014). *Nuevas modalidades de captación de rentas ilegales en Medellín*. Medellín: Centro de Análisis Político- Universidad EAFIT.
- GMH. (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid: Siglo veintiuno editores.
- Harvey, D. (octubre de 2008). *www.fadu.uba.ar*. Recuperado el septiembre de 2016, de www.fadu.uba.ar: http://www.fadu.uba.ar/mail/difusion_extension/090522_bol.pdf
- Harvey, D. (2012). *Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal, S.A.
- Instituto Popular de Capacitación. (11 de junio de 2010). *Agencia de Prensa IPC*. Recuperado el 12 de marzo de 2017, de Agencia de Prensa IPC: <http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2010/06/11/rentas-de-las-vacunas-ilegales-objeto-de-disputa-en-medellin/>
- Janoschka, M., & Sequera, J. (2014). Procesos de gentrificación y desplazamiento en América Latina, una perspectiva comparativista. *Contested cities*, 1-23.
- Jaramillo, A., & Gil, M. Y. (2014). Medellín en su laberinto. Criminalidad y violencia en los comienzos del siglo XXI. En A. Jaramillo, & C. M. Peres, *Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez* (págs. 119-178). Medellín: Corporación Región; Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.
- Kienyke. (9 de abril de 2013). *KIENYKE*. Recuperado el 23 de mayo de 2017, de KIENYKE: <https://www.kienyke.com/historias/cesar-hernandez-construyo-escaleras-electricas-en-la-comuna-13>

- Lefebvre, H. (1978). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- Lefebvre, H. (1983). *La revolución urbana*. Madrid: Alianza Editorial.
- Losada, R., & Casas, A. (2008). *Enfoques para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
- Lungo, M. (julio de 2005). Globalización, grandes proyectos y gestión urbana. *URBANO*, 49-58.
- Madoery, O. (junio de 1999). Serie Documentos de Trabajo. *El territorio como factor estratégico de desarrollo. Hacia un espacio de gestión metropolitana en el Gran Rosario*. Instituto de Desarrollo Regional.
- Martin, G. (2012). *Medellín Tragedia y Resurrección. Mafia, ciudad y Estado. 1975- 2012*. Bogotá: Planeta.
- Migdal, J. (2011). *Estados débiles, Estados fuertes*. México: Fondo de Cultura Económica .
- Montoya, N. (2014). El urbanismo social: las tácticas de un Estado anfibio. *Bitácora urbano territorial*, 1(24), 167-172.
- Montoya, N. (2014). Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir de la utilización estratégica de derechos. *Estudios Políticos*(45), 205-222.
- Moreno, R. (2003). Conflicto y violencia urbana en Medellín desde la década del 90 : algunas. En *Violencias y conflictos urbanos un reto para las políticas públicas* (pág. 191 a 232). Medellín: Instituto Popular de Capacitación -IPC-.
- Municipio de Medellín; CORVIDE; PNUD; Consejería Presidencial. (1993). *Programa integral de mejoramiento de barrios subnormales en Medellín (PRIMED): Estudio de factibilidad*. Medellín: Alcaldía de Medellín; PNUD.
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. (2012). *Control territorial y resistencias: una lectura desde la Seguridad Humana*. Medellín: La Carreta Editores E.U.
- Outtes, J. (mayo de 2002). Disciplinando la sociedad a través de la ciudad. El origen del urbanismo en Argentina y Brasil (1894-1945). *eure*, XXVIII(83), 7-29.
- Personería de Medellín . (2006). *Informe semestral de la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín*. Medellín: Personería Municipal de Medellín.
- Personería de Medellín . (2009). *Informe Ejecutivo de Derechos Humanos- 2009*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2004). *Balance de la situación de derechos humanos en Medellín durante el año 2004*. Medellín : Personería de Medellín.

- Personería de Medellín. (2005). *Informe anual de la situación de Derechos Humanos 2005*. Medellín: Personería Municipal de Medellín.
- Personería de Medellín. (2006). *Informe semestral de la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2008). *Informe ejecutivo de Derechos Humanos-2008*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2010). *Informe semestral situación de los derechos humanos en Medellín 1-2010*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2011). *Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Medellín*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2012). *Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín-2012*. Medellín: Personería de Medellín.
- Personería de Medellín. (2013). *Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín 2013*. Medellín: Personería de Medellín.
- Ramírez, S. P., & León, K. (2013). *Del pueblo a la ciudad. Migración y cambio social en Medellín y el valle de Aburrá, 1920-1970*. Medellín: Universidad de Antioquia; Alcaldía de Medellín; Hombre Nuevo Editores.
- Restrepo, W., Pérez, W. F., & Vélez, J. C. (2012). Aproximaciones al estudio de la violencia urbana en Colombia y de la criminalidad homicida en Medellín. En *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín, 1997-2007* (págs. 15-52). Medellín: Instituto de Estudios Políticos- Universidad de Antioquia.
- Revista Semana. (03 de julio de 2011). "Miembros de las AUC sumaban 15.000 o 16.000, al final se desmovilizaron 31.000": 'El Alemán'. *Semana*.
- Sánchez, A. (octubre de 2012). Documentos de trabajo sobre economía regional. *La reinención de Medellín*. Colombia: Banco de la República-Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).
- Sierra, P. (julio-diciembre de 2016). Marketing urbano, forma de gobierno neoliberal . *Iconofacto*, 12(19), 124-153.
- Soycomuna13. (07 de noviembre de 2017). *soycomuna13.blogspot.com.co*. Recuperado el 19 de 05 de 2017, de *soycomuna13.blogspot.com.co*: <http://soycomuna13.blogspot.com.co/>
- UNESCO. (1996). *PRIMED una experiencia exitosa en la intervención urbana*. Medellín: Multigráficas Ltda.

- Uribe, M. T. (1998). Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz. *Estudios Políticos*(13), 11-37.
- Velásquez. (2011). La política de mejoramiento integral de barrios en Medellín ¿Reconquista del territorio por parte del Estado? *Kavilando*, 3(1/2), 72-78.
- Velásquez, C. A. (2013). Intervenciones estatales en sectores informales de Medellín. Experiencias en mejoramiento barrial urbano. *Revista Bitácora Urbano Territorial*, 23(2), 139-146.
- Vélez, J. C. (2001). Conflicto y guerra: La lucha por el orden en Medellín. *Estudios Políticos*(18), 61-89.
- Vélez, J. C., & Alonso, M. (1998). Guerra, soberanía y ordenes alternos. *Estudios Políticos*(13), 41-71.
- Verdad Abierta. (08 de agosto de 2015). *verdadabierta.com*. Recuperado el 23 de julio de 2016, de verdadabierta.com: <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/desaparecidos/5912-desaparecian-personas-en-la-comuna-13-y-decian-que-eran-un-mito>
- Verdad Abierta. (08 de noviembre de 2015). *verdadabierta.com*. Recuperado el 18 de 05 de 2017, de verdadabierta.com: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6061-las-amargas-lecciones-que-dejo-la-desmovilizacion-de-las-auc>
- Villa, M. I., & Naranjo, G. (1997). *Entre luces y sombras. Medellín: Espacio y políticas urbanas*. Medellín: Corporación Región.
- Zapata, F. (2015). Trabajo de grado para optar al título de politólogo . *Biopolítica y gentrificación en Medellín: Modelo de ciudad para Medellín como ejercicio de poder a partir de la distribución y regulación de la vida en el espacio urbano entre el 2008 y el 2014*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Zárate, A., & Rubio, M. T. (2010). *Conceptos y prácticas de geografía humana*. Editorial universitaria Ramón Areces .
- Zárate, L. (Abril de 2014). El derecho a la ciudad: luchas urbanas por el buen vivir. *Desde la Región*(55), 4-19.
- Zibechi, R. (2008). *Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas* . Málaga: BALADRE.
- Zoido, F. (2007). Territorialidad y gobierno del territorio, hacia una nueva cultura política. *Universidad de Sevilla. Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional*, 1-27.

